

PAULO HIDALGO

Editor

POLÍTICA Y SOCIEDAD
EN CHILE
ANTIGUAS Y NUEVAS CARAS



Ernesto Águila
José Bengoa
Álvaro Briones
Francisco Javier Díaz
Malva Espinosa
Paulo Hidalgo
Lisandra Muñoz
Rodrigo Salcedo
Eugenio Tironi
Marcel Thezá

Catalonia

POLÍTICA Y SOCIEDAD
EN CHILE
ANTIGUAS Y NUEVAS CARAS

EDITOR
PAULO HIDALGO

POLÍTICA Y SOCIEDAD
EN CHILE
ANTIGUAS Y NUEVAS CARAS

Catalonia

HIDALGO PAULO (editor)

Política y sociedad en Chile/ Paulo Hidalgo

Santiago: Catalonia, 2005

192 p.; 15 x 23 cm

ISBN 956-8303-24-3

CIENCIAS POLÍTICAS

CH 320

Diseño de portada e interiores: Patricio Andrade
Impresión: Andros Impresores. S.A., Santiago de Chile
Dirección editorial: Arturo Infante Reñasco

Todos los derechos reservados.
Esta publicación no puede ser reproducida,
en todo o en parte, ni registrada o transmitida
por sistema alguno de recuperación de información,
en ninguna forma o medio, sea mecánico,
fotoquímico, electrónico, magnético,
electroóptico, por fotocopia o cualquier otro,
sin permiso previo, por escrito,
de la editorial.

Primera edición: Septiembre 2005
ISBN 956-8303-24-3

Registro de Propiedad Intelectual N° 149.654

© Paulo Hidalgo, 2005
© Catalonia Ltda., 2005
Santa Isabel 1235, Providencia
Santiago de Chile
www.catalonia.cl

ÍNDICE

PRESENTACIÓN <i>Marcelo Schilling</i>	9
PRÓLOGO <i>Michelle Bachelet</i>	11
PARTIDOS, ELITES Y FORMAS DE REPRESENTACIÓN	
EL FIN DE UN CICLO POLÍTICO Y ESCENARIOS FUTUROS <i>Paulo Hidalgo</i>	17
UNA MIRADA GLOBAL AL SISTEMA DE PARTIDOS: FRACTURAS Y CONTRADICCIONES <i>Francisco Javier Díaz</i>	31
LA ELITE POLÍTICA DE LA CONCERTACIÓN: REPRODUCCIÓN O REEMPLAZO <i>Rodrigo Salcedo</i>	47
SISTEMA POLÍTICO, CIRCUITO EXTRAINSTITUCIONAL DEL PODER Y EL DESPERTAR DE LA CIUDADANÍA <i>Ernesto Águila</i>	65
ACTORES SOCIALES: IDENTIDADES Y PROPOSICIONES	
LA CUARTA RUPTURA. REFLEXIONES SOBRE COMUNIDAD, PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO EN EL CHILE DE HOY <i>Eugenio Tironi</i>	81

EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO: NUEVAS Y CLÁSICAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN <i>Marcel Thezá y Lisandra Muñoz</i>	107
INDÍGENAS, INSTITUCIONALIDAD Y RELACIONES INTERÉTNICAS EN CHILE <i>José Bengoa</i>	123
SINDICALISMO EN CHILE: ACTORES DE AYER Y DE HOY EN LA INCANSABLE BÚSQUEDA DEL SUJETO <i>Malva Espinosa</i>	147
¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DE LOS EMPRESARIOS? <i>Álvaro Briones</i>	169

PRESENTACIÓN

Este libro, *Política y sociedad en Chile. Antiguas y nuevas caras*, tiene la pretensión de ir con los tiempos. Intenta conjugar un balance del pasado reciente, centrado en el análisis de los actores sociales y políticos, con su proyección y posibilidades de cambio. Es un trabajo instalado en la coyuntura, en sus antecedentes y en su probable evolución hacia un nuevo ciclo de la sociedad y de la política chilenas.

Los signos de que algo termina y algo nuevo se inicia son múltiples. A mi juicio, el liderazgo de Michelle Bachelet es una manifestación de aquello. Pareciera expresar la aspiración de instalar la primacía, o al menos la fortaleza, de lo ciudadano frente a lo político; de potenciar el derecho a la deliberación ciudadana en el proceso de toma de decisiones públicas; de alcanzar una sociedad más segura para todos; de renovar la clase política, en fin.

Esto no es lo único que señala la emergencia de un nuevo Chile. La creencia de que hay un centro político que expresaría a las clases medias parece haberse esfumado para ser reemplazada, simplemente, por la Concertación, con el consiguiente desdibujamiento de los perfiles de los partidos que la integran. Ello explica que los candidatos "de izquierda" a las alcaldías de Puerto Montt y La Serena obtengan votaciones ampliamente por encima del 50%. También ayuda a explicar el sólido apoyo con que hoy cuenta Michelle Bachelet, que revelaría un cambio mayor en la política y la sociedad actuales.

Asimismo, hay indicios de cambios poderosos en otros ámbitos. Por ejemplo, en el desarrollo de la ciudadanía y del ciudadano, como se ha visto en el tratamiento de algunos conflictos medioambientales o en esa imagen de un aymará, en un poblado pequeño, frente al Presidente de la República, portando un letrero donde reclama por la tardanza de la ayuda ante el reciente terremoto. "¡Vaya osadía!" o, peor aún, "¡qué insolencia!", se habría exclamado hace escasos años atrás.

Para poner otro ejemplo en el ámbito político, miremos lo que viene ocurriendo en la selección del futuro personal parlamentario, cualquiera sea su desenlace final. Alejandro Navarro, Guido Girardi, Juan Pablo Letelier –por mencionar sólo a quienes aspiran al Senado– eran dirigentes estudiantiles o juveniles al finalizar la década de los ochenta. ¿Se trata sólo de un recambio generacional o está conectado, aunque al menos en parte, a la pujanza de la emergencia de los “aspiracionales” en la escena nacional?

La potencia de la intervención, a veces superficial e interesada, de los medios de comunicación en la política y la sociedad, el deseo de transparencia de los ciudadanos, los errores de los partidos políticos y del Parlamento, han conducido a un cierto desencanto y distanciamiento de la política. Lo nuevo es que a esa crítica los chilenos no hemos opuesto la salida tradicional del autoritarismo, sino la búsqueda de un liderazgo innovador e inclusivo, que proviene de la política y de los partidos. Una buena noticia.

Este libro, de consagrados y debutantes autores, espera contribuir a un debate necesario sobre lo viejo y lo nuevo en Chile, en la política y la sociedad.

MARCELO SCHILLING
DIRECTOR EJECUTIVO
INSTITUTO IGUALDAD

UNA NUEVA POLÍTICA PARA UNA NUEVA CIUDADANÍA

MICHELLE BACHELET

La sociedad chilena está cambiando. Comienzan a ajustarse las diversas dimensiones que comprenden el proceso modernizador que ha vivido Chile durante las últimas dos décadas. La dimensión económica, la dimensión política y, ahora último, la dimensión social. Se percibe un clima de mayor tolerancia, de mayor apertura. Lo veo día a día en mi recorrer por el país: vemos una juventud menos prejuiciosa, una mujer que asume mayores responsabilidades, una ciudadanía más tolerante, pero a la vez mucho más crítica y exigente. Chile hoy es otro.

Por eso son importantes los libros como este. Porque si ya es difícil detenerse a analizar un proceso de cambio en el cual uno mismo está inserto, analizar el proceso en medio de un año electoral es más difícil aun. Ahí radica el mérito de este libro del Instituto Igualdad, y el mérito de la reflexión que esperamos genere este volumen.

¿Cómo vemos este Chile del 2005? Vemos un Chile con ganas, optimista, pero consciente de sus desafíos y falencias. Chile ha progresado mucho durante los últimos quince años. La gente valora los logros alcanzados, porque nos han permitido mejorar la calidad de vida de los chilenos y porque son la base para seguir avanzando en construir el país que queremos.

Chile está hoy en otro pie para mirar el futuro. Es un país que ha cambiado su rostro. Pero también hay mucha gente que encuentra obstáculos para incorporarse a este camino de progreso. Como hemos dicho desde el comienzo de esta campaña: nuestro desafío es construir un país donde ganemos todos, por lo que no podemos cerrar los ojos a las situaciones de pobreza, la discriminación o la desigualdad.

Como bien lo indica el último Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el desafío de hoy es que el Chile poderoso que estamos construyendo se transforme en más poder para todos. Que todos tengan más capacidades para

realizar sus proyectos. Que todos tengan más posibilidades de influir en las decisiones que los afectan. Las chilenas y chilenos quieren ser tratados como adultos. No quieren ser "objeto" de soluciones. Quieren ser parte de la solución.

Cumplir con estas aspiraciones no es una tarea fácil. Nos demanda un gran cambio en la forma en que tradicionalmente hacemos las cosas. En la forma en que muchas veces pensamos nuestro rol en la política. Por eso mi reflexión al comenzar este libro: tenemos que dar una nueva política para una nueva ciudadanía.

En miras del futuro gobierno, junto con identificar los nuevos retos a enfrentar, tenemos que ser capaces de desarrollar una nueva forma de encarar los problemas. Es posible enumerar una larga lista de desafíos programáticos, pero el eje principal es la puesta al día de nosotros, los líderes políticos, con el gran cambio cultural que estamos viviendo. Ello implicará un gran cambio en cómo hacemos las cosas.

A mi juicio, ese es el principal mensaje que deja esta obra. Nos habla de cómo se adaptan y renuevan los partidos políticos, de cómo se remecen viejas elites y emergen nuevas agrupaciones de poder. Nos habla de los nuevos actores sociales que emergen, de un nuevo movimiento indígena, de un nuevo movimiento sindical. Pero el libro también da una voz de alerta. Subsisten muchos grupos que no dan cuenta de los cambios, y que parecen destinados a una lenta y triste agonía.

Hay tres aspectos que quisiera destacar en este cuadro de cambio en la sociedad chilena. Lo primero es el malestar que existe respecto de nuestra práctica democrática, aspecto que cruza muchos de los presentes ensayos. Esta situación es de hecho recurrente en toda América Latina. Estudios como el Latinobarómetro o el Observatorio para la Democracia, entre otros, nos muestran un fenómeno de creciente apatía y desconfianza, que se manifiesta en altas tasas de abstención electoral. Ello puede terminar corroyendo la legitimidad de las autoridades electas. Debemos dar cuenta de esta realidad. Debemos construir nuevos mecanismos de participación, que legitimen el accionar democrático que tanto esfuerzo nos costó reconstruir. En definitiva, debemos entender que existe un cambio cultural importante que hace que nuestra política se vea desfasada. La sociedad avanza más rápido que la política. El propio hecho de que en Chile vaya a ser una mujer la que enfrente a la derecha en las elecciones presidenciales de fin de año habla algo de este gran cambio.

El segundo tema es un aspecto que me llamó la atención del artículo del editor de este volumen, Paulo Hidalgo. Allí, el autor nos

alerta acerca de la dicotomía “alternativismo ingenuo o pedaleo conservador”. Es una buena figura, que nos llama a ser más exigentes con nosotros mismos. Hay mucho por hacer y mucho por cambiar para evitar que caigamos en los polos que presenta Hidalgo.

El tercer aspecto es un tema ausente de este volumen, pero que he podido percibir en estos primeros meses de campaña. Se trata del tema regional. Recorriendo Chile me he percatado de que quizá donde mejor se puede evidenciar una transformación en la sociedad chilena es en las regiones. El desarrollo económico, las migraciones, el avance tecnológico, entre otras causas, han creado una ciudadanía regional mucho menos dócil, más exigente y de mayor vocación local. Allí hay un dato sobre el cual hay que reflexionar más. Por mi parte, responderé a esa demanda con una profundización de la descentralización regional y municipal.

Felicito nuevamente al Instituto Igualdad por este libro, y espero que haga meditar a todos quienes estamos en política sobre qué es lo que espera la ciudadanía de nosotros. Una nueva política para una nueva ciudadanía, que nosotros, los progresistas, ayudamos a construir.

Santiago, agosto de 2005

**PARTIDOS, ELITES Y FORMAS DE
REPRESENTACIÓN**

PAULO HIDALGO

Sociólogo de la Universidad de York-Inglaterra. Posee un M.A. en ciencias políticas de la FLACSO-México y es doctor en sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es asesor de la División de Estudios del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y es profesor en la FLACSO-Chile y en la Universidad Central. Ha publicado un sinnúmero de artículos en revistas especializadas sobre democracia, populismo y actores políticos en Chile y América Latina. Es autor de los libros *Pasión y razón del socialismo chileno* (en colaboración con Jorge Arrate), y *¿Fin de un ciclo político? Ensayos sobre política y sociedad*. También es autor del proyecto "Observatorio de Políticas Públicas en Chile", publicado por la Universidad de Chile y la Universidad de Los Lagos.

EL FIN DE UN CICLO POLÍTICO Y ESCENARIOS FUTUROS

PAULO HIDALGO

*Come senators, congressmen
Please heed the call
Don't stand in the doorway
Don't block up the hall
For he that gets hurt
Will be he who has stalled
There's a battle outside
And it is ragin'.
It'll soon shake your windows
And rattle your walls
For the times they are a-changin'*

Bob Dylan

El término de un ciclo político en Chile fue la hipótesis central de un texto que publiqué con los buenos auspicios de la editorial Cesoc (Hidalgo 2002). De dicha constatación ha pasado ya algún tiempo y continúo pensando que esta propuesta refleja el estado actual de la política en Chile. En efecto, es posible señalar el franco agotamiento de ciertos aspectos de la vida político-institucional del país; ello se expresa en variados síntomas que serán a continuación descritos. La paradoja que parece verificarse en Chile es que si en el pasado la política parecía dominarlo todo en tanto la economía languidecía, hoy se experimenta una situación diametralmente inversa: la economía aparece como pujante y dinámica mientras que la política se ha osificado al mostrar dificultades estructurales que impiden una plena representación de la ciudadanía. En este artículo se examinan los antecedentes políticos que avalan un fin de ciclo y más adelante se aventuran algunas proposiciones destinadas a pensar en la nueva etapa política que se abre en el país.

En general, todos los gobiernos exitosos inauguran lo que se pudiera denominar un círculo virtuoso, que denota un amplio acuerdo de una elite política por llevar a cabo un conjunto de reformas en los más variados campos, que a su vez cuentan con un sólido respaldo de

una elite técnico-profesional que se instala en el gobierno. Ello parece haber ocurrido en Chile prácticamente desde la instalación de la democracia en los noventa.

El primer impulso sin duda se verificó con el momento simbólico expresivo del triunfo del "No" en el plebiscito y el establecimiento del primer gobierno democrático. Este trajo la llegada de la figura del *pater familia*, don Patricio Aylwin, quien, tras ser restaurada la democracia en un delicado equilibrio, procuró buscar la justicia y aliviar los dolores y pérdidas de la comunidad chilena, en la medida de lo posible. Cómo no recordar la emotiva alocución del Presidente Aylwin cuando le fueron entregados los resultados del informe de la Comisión Rettig, que compilaba los nombres de los detenidos desaparecidos durante la dictadura militar. Así, la democracia reconquistada tenía la ardua tarea de recomponer los lazos más básicos de la sociedad chilena, que ansiaba la estabilidad y un orden en donde se respetaran los derechos más elementales. Eran los inicios de la larga transición vivida por este país que ha enfrentado, en un camino sinuoso, las pesadas herencias que la dictadura militar dejó presentes tanto en los ámbitos político-institucionales (la Constitución del 80, hoy reformada en sus capítulos centrales) como en la masiva violación a los derechos humanos, hoy reconocida por moros y cristianos. De este modo, una coalición política que unía al centro y a la izquierda aglutinada en radical oposición a la dictadura, tuvo que convertirse sin solución de continuidad en gobierno y asumir, en algunos casos de modo dramático, los límites que imponía el corsé institucional y político imperante en el país. Para algunos autores, el arco de restricciones autoimpuesto fue exagerado producto de una negociación con más costos que beneficios; para otros, se trató de la única alternativa disponible en un campo político que presentaba amenazas complejas de procesar por la renuencia del empresariado y de las Fuerzas Armadas a participar plenamente del juego democrático (Moulian 1997; Boeninger 1997).

El segundo momento de la recién inaugurada democracia fue el de la euforia del crecimiento y la modernización. La altísima votación -57,9%- obtenida por Eduardo Frei Ruiz-Tagle ratificó el buen momento que vivía el país. Quedaban temas pendientes del pasado, pero la comunidad nacional ahora sí gozaba de un tiempo de bonanza económica y de bienestar, aunque, por cierto, limitada por la estructura de desigualdad existente en el país. Esta es la etapa de las grandes reformas en infraestructura, educación y justicia, y el inicio de la apertura de Chile al mundo. Fueron años en que las matrículas

para educación superior se ampliaron vertiginosamente y el consumo, en su vasta gama, ocupó parte sustancial de la vida de los chilenos. Pero todo este período exitoso tuvo un primer corte abrupto con los graves efectos sobre la economía del país que produjo la crisis asiática en los años 98-99. Entonces, por primera vez desde la inauguración de la democracia, el país vivía una seria crisis económica que impactaba la tranquilidad y la parsimonia previas (Tironi 2005).

Esa fue, en la práctica, la coyuntura que le tocó vivir a la Concertación en su tercer intento por conquistar la Presidencia de la República. Ocasión en que, como nunca antes, emergía en la derecha una candidatura competitiva que curiosamente enarbolaba la bandera del cambio. El liderazgo de Ricardo Lagos tuvo la difícil prueba de enfrentar una campaña en el ciclo más bajo de la economía nacional y, en un principio, con una cierta renuencia de los votantes de centro. El lema de su campaña reflejaba de manera adecuada los nuevos desafíos que debía encarar la Concertación: Crecimiento con igualdad.

La lentitud de la recuperación económica, pese a que la promesa de la campaña consistía en la creación casi inmediata de medio millón de empleos, fue el signo distintivo de los primeros tres años de gobierno del Presidente Lagos. A la vez, el “vuelo” que el país traía de la década de los noventa mostró sus limitaciones de modo inexorable. Todo el entramado institucional del país fue puesto seriamente en tela de juicio. Por una parte, algunos casos reñidos con la probidad pública alcanzaron una alta cobertura mediática, afectando a altos funcionarios de la administración del Estado. Ello, por cierto, fue el acicate para que el gobierno sentara las bases para dar pasos clave en la modernización del Estado. Por otra parte, los tribunales de justicia estuvieron –y están– en la mira de la ciudadanía y de los medios de comunicación en una sociedad que parece ahora reclamar, de parte de sus instituciones, una plena transparencia e igualdad real y efectiva ante la ley.

No cabe duda de que la gestión del Presidente Lagos ha sido uno de los capitales más valiosos de la democracia chilena en estos años. Ello porque, evitando toda tentación populista, ha logrado liderar al país en un período económico inicialmente crítico y ha sido pertinaz en llevar adelante buena parte de la agenda política que le prometió a la nación. Prueba de esto ha sido el logro de tratados comerciales fundamentales para el futuro económico nacional; la aprobación, luego de un largo proceso legislativo, de parte importante de la reforma a la salud –el proyecto AUGE–; y las diversas iniciativas destinadas a combatir la pobreza más extrema de nuestro país, expresadas en el

programa Chile Solidario. No es un dato menor constatar que, según la encuesta CEP –una de las más fiables del mercado–, prácticamente al cierre de su administración, el Presidente Lagos cuenta con un 61% de apoyo.

Sin embargo, el “vuelo” que traía el sistema político y la Concertación pareció ocultar por un tiempo los datos “duros”, inerciales, de un ciclo político que se estaba agotando en varios sentidos, a lo menos respecto de lo que señalo a continuación.

El impulso reformador y de cambio de la Concertación, que constituyó en sus mejores años el mapa estratégico de la coalición, ya perdía fuerza. Muchas iniciativas se entrampaban en visiones distintas de políticas que a menudo no enfrentaban posiciones delimitadas en un campo doctrinario, sino que expresaban el agotamiento de la dirigencia política y la búsqueda de posiciones en el corto plazo. La condición sine qua non de una elite exitosa se diluía con el paso del tiempo, esto es, se diluía la existencia de una sólida carta de navegación compartida por la elite política que le diera proyección y le inyectara entusiasmo a la gestión del gobierno. Al respecto, resulta ilustrativa la fatigosa tramitación parlamentaria de la reforma a la salud, la que enfrentó, a menudo ásperamente, a posturas más proclives a endurecer el papel del Estado, y también otras posiciones más pragmáticas. En términos simples, lo que se desea apuntar en este acápite es el agotamiento de los “mapas cognitivos” de la elite política concertacionista, que ya carece de las certezas y convicciones necesarias para ser una agente que lidere cambios en las diversas esferas sociales (Lechner 1988).

En otro ámbito, los partidos políticos han tenido crecientes dificultades para representar a los electorados más amplios y su personal político ha demostrado poca renovación de liderazgos y propósitos. El centro político, Partido Demócratacristiano, por ejemplo, acusa una severa baja en la preferencia de los electores e inicia un proceso de “rectificación” destinado a recuperar a los esquivos votantes. Si bien en la última elección municipal –2004– la DC detuvo su caída, la tendencia a la baja en las sucesivas elecciones es ya un fenómeno instalado en el actual panorama político. Así, este partido parece estar viviendo una lenta “muerte dulce”, tal como le ocurriera al antiguo Partido Radical (aunque no se trata de un proceso político inexorable).

De otro lado, la promesa de un partido ciudadano de nuevo tipo que encarnaba el Partido por la Democracia no logra en verdad cristalizar en una apuesta política novedosa y atractiva que captive sobre

todo a los jóvenes, y más bien describe a un conjunto de líderes que a menudo cuentan con agendas propias sin que se constituya un serio programa político de mediano y largo plazo.

Por otra parte, el Partido Socialista –que vivió un interesante proceso renovador en décadas pasadas– tal parece que no ha extraído las consecuencias políticas esperadas, en el sentido de configurarse como una alternativa socialdemócrata perfilada que cautive tanto a sus electores clásicos como a los sectores de trabajadores que han surgido en estos años (vinculados al sector servicios), como a los universitarios y las capas medias. Así, se encuentra pendiente la necesaria unidad de este sector político, de manera que logre congregarse a las diversas tendencias y matrices ideológicas que se cobijan no sólo bajo el PS, sino también bajo el pequeño Partido Radical Socialdemócrata y el PPD. Quizás insistir en esta opción de confluencia política sea un mero “canto de cisne”, toda vez que cada partido por separado ya ha cristalizado sus propias elites, cuadros directivos y bases de apoyo inmediatas que hacen extremadamente difícil una genuina fusión política. Con todo, no cabe duda de que si se examina cualquier situación política similar, la alternativa socialdemócrata tendrá un amplio espacio y convocatoria en tanto sea capaz de expresar en un solo cuerpo político y orgánico un sello de modernidad, ampliación de los ámbitos de deliberación política, y políticas redistributivas (Paramio 1988).

En otro plano, el sistema político en su conjunto muestra, ya a esta altura, serias dificultades para representar al conjunto de la ciudadanía. Es sabido que el padrón electoral del país representa un cuerpo electoral antiguo que no ha logrado capturar a los más jóvenes, quienes se manifiestan reacios a inscribirse en los registros electorales. Ello además sugiere una creciente percepción ciudadana de la existencia de un “duopolio” en la política, en tanto el sistema electoral binominal consagra la existencia de dos grandes bloques, lo que desalienta la participación, pues impide la renovación tanto de los líderes como de las ofertas políticas.

También es importante considerar la situación de la derecha. Si bien la UDI ha tenido cierto éxito electoral en los últimos años, al romper el estigma minoritario y defensivo de la derecha histórica, hasta ahora esta opción política ha sido incapaz de efectuar una verdadera reconversión programática que logre arrebatarse a la Concertación su supremacía en los sectores populares. El liderazgo de Joaquín Lavín, en este sentido, también ha cumplido un ciclo. La innegable capacidad comunicativa de este líder, unida a un populismo de fácil

consumo, fue capaz de atraer a un electorado prácticamente impensado para la derecha, asentado en franjas no despreciables de los sectores populares y medios del país. Sin embargo, la apelación lavinista ya no es novedad. Más aun, a pesar de los esfuerzos que despliega este candidato, él ya no fue capaz de conectarse con los contornos psicosociales que hoy muestra la sociedad chilena, muy diferentes de lo que ocurría a fines de la década de los noventa.

Al respecto, será extremadamente difícil en las nuevas contiendas electorales que el candidato de la Unión Demócrata Independiente logre alcanzar su techo histórico de un 49% en un cuadro de crisis económica como lo fue el año 1999. Es por esto que, advirtiendo estas limitantes, la derecha finalmente se bifurcó y Renovación Nacional decidió levantar la candidatura presidencial del empresario y ex senador Sebastián Piñera. Si bien en un comienzo hubo un verdadero frenesí político en tanto se pensaba que Piñera podía “dar vuelta” el tablero político, a poco andar los fríos números de la política chilena se impusieron: Piñera disputaba claramente una votación del bloque de derecha sin que se produjera una fuga o hecatombe de votantes de centro –ligados a la DC– hacia su persona. Por otra parte, el largo y arduo trabajo de la UDI y el candidato Lavín en los sectores populares, le impedía a Piñera penetrar fácilmente allí, en los que son, en verdad, su verdadero talón de Aquiles. Aun más: las preferencias del empresario-político en gran medida se confinan a los sectores profesionales de más altos ingresos. De este modo, se instala en la derecha una fuerte disputa por la hegemonía del sector, puesto que sus miembros perciben que tienen claramente perdida la elección presidencial.

Así, con dos candidatos presidenciales y desde ya preocupados por dejar a los mejores nombres posicionados para el 2009, la derecha en los hechos ha sido incapaz –desde la reinstalación de la democracia en el país– de constituir una oposición decorosa y de elaborar un programa serio de gobierno que realmente pueda competir con la Concertación. Sin embargo, en esta elección presidencial la derecha se dispone a elaborar un competitivo programa electoral que buscará disputarle el “corazón” a la Concertación en el campo de la desigualdad social. La oposición tiene clara conciencia de que si no logra sustentar un claro programa que atienda a los problemas de arrastre de la Concertación en el campo de la estructura de la desigualdad del país tiene pocas chances reales de un, a lo menos, adecuado desempeño electoral. En consecuencia, no es difícil concluir en el dato, si se quiere elemental, de que también la derecha ha cumplido un ciclo

político, una etapa histórica en la que ha demostrado su incapacidad estructural para ser una alternativa de gobierno eficaz. De modo que la derecha o reactualiza sus liderazgos y comprende los enormes cambios que ha tenido Chile en los últimos años o sencillamente vuelve a ser un actor político resentido, minoritario y en defensa de los intereses patrimoniales de siempre (Correa 2004).

En el campo económico, de igual manera es posible señalar el cierre de un ciclo que ha estado signado por altas tasas de crecimiento y dinamismo. Si bien es posible estimar que la economía ha tenido un repunte producto del buen manejo macroeconómico y de los denodados esfuerzos por poner a Chile en los circuitos más competitivos del mercado mundial, se abren interrogantes de primer orden. La primera de ellas es en relación a la capacidad que tiene ahora la economía para crear nuevos puestos de trabajo y para mejorar también la calidad del empleo. El desempleo continúa siendo el eslabón más débil del modelo económico chileno dentro de una estructura productiva que ya presenta ciertas rigideces y bloqueos. Aunque a menudo el debate de los expertos sostiene la necesidad de pasar a una segunda fase exportadora que incremente los empleos y la educación de la fuerza de trabajo, no se ve claramente cómo salir del círculo cuando los productos que en verdad son rentables en los diversos mercados tienen un limitado valor agregado y es cada vez mayor el nivel de introducción de tecnologías que, en vez de aumentar, ahorran mano de obra (Moguillansky 1999).

Tampoco parece aún del todo clara una política agresiva de parte del Estado para fomentar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa que vive en condiciones de alta precariedad e incertidumbre, pero que a la vez genera parte importante del empleo en el país.

En este contexto es importante reconocer las asimetrías que se están incubando entre el sistema educativo y las necesidades del mercado laboral. Es decir, mientras la educación superior prácticamente ha multiplicado su matrícula y se espera que en un mediano plazo lleguen miles de profesionales a buscar empleo, la estructura productiva actual se encuentra desfasada para lograr cubrir esa demanda precisamente porque lo que requiere no son necesariamente profesionales de alta calificación. Este proceso paradójico de algún modo anticipa la denominada “crisis de los certificados”, como ha sucedido en otras economías más desarrolladas, que tienen una masa importante de profesionales que no encuentran trabajo en sus propias disciplinas y deben contentarse con empleos de más baja calificación y remuneración.

Las dimensiones reseñadas indican el cierre de una etapa histórica en la sociedad chilena. Es de la mayor importancia, entonces, dedicar esfuerzos sostenidos por describir el conjunto de temas, actores y significados que abren las posibilidades de un nuevo ciclo en el país. A lo menos sería bueno reconocer este punto de partida.

LAS CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO CICLO POLÍTICO

Según todos los estudios que tratan los diversos factores que permiten el surgimiento y desarrollo de los sistemas democráticos, no existen causas o determinantes que “condenen” a priori a una elite política a fracasar en instalar una democracia plena. Puede que la economía esté en crisis, que el contexto internacional no sea el más favorable o que las culturas políticas heredadas sean complejas para inaugurar una democracia, pero así y todo una elite que esté convencida de la democracia, si insiste en ella de modo sistemático, con el paso del tiempo logrará instalarla (Rustow 1970). De este modo, si se vuelve ahora la mirada a la elite política concertacionista, ella posee amplios espacios de libertad para darle un verdadero giro copernicano a la democracia chilena, removiendo los obstáculos y problemas que describen el término del largo ciclo político inaugurado con la instalación de la democracia el año noventa. Ha quedado de manifiesto que el sistema político se encuentra tremendamente rezagado; los partidos han dejado de representar a amplias franjas de ciudadanos y se encuentran con un personal político con poca renovación; sus ofertas políticas también están desfasadas y los “mapas mentales” ya no responden a lo que crecientemente está demandando la ciudadanía.

Se requiere desarrollar, entonces, una política que se pudiera denominar de *radicalismo democrático* que enfrente de modo inteligente una renovación de la democracia chilena, lo que supone abrir las esclusas de la deliberación pública y la participación a través de la reforma del sistema institucional del país. El acicate fundamental para esta verdadera reforma intelectual y moral, en un sistema tan encapsulado como el chileno, puede provenir de la capacidad transformadora con que cuente un liderazgo que se encuentre persuadido de los cambios necesarios de introducir. Quien se halla hoy en día en la mejor posición para ser un agente de cambios sin duda está representado en el liderazgo ciudadano que ha logrado conquistar desde la Concertación la candidata y futura presidenta Michelle Bachelet. La insistencia de la candidata del conglomerado de gobierno de darle un sello ciudadano a su oferta política y de comprometer

a los jóvenes y a las mujeres en su propuesta política, a la par de señalar su intención de darle un nuevo aire a la democracia chilena, permite abrigar fundadas expectativas de que el radicalismo democrático será el nuevo sello de la convivencia de los chilenos en los próximos años (Bachelet 2005).

En otros términos, la Concertación enfrenta la etapa de encarar seriamente lo que se pudiera denominar el estadio de una “modernización difícil” (parafraseando el histórico lenguaje de la Cepal), que supone elaborar un conjunto comprensivo de políticas de gobierno que proyecten a la actual coalición para un nuevo período con un cuerpo de ideas y cometidos que se constituyan sólidamente como tareas de largo aliento. Es decir, se requiere abrir un nuevo ciclo político que dote al conglomerado de nuevos principios y razones de acción política.

Una política global orientada por lo que denominamos radicalismo democrático debería actuar en variados frentes. La Concertación ya pasó la prueba de que puede mantener una economía sana y en franco crecimiento permitiendo los “buenos negocios”, a la par de perseverar en los equilibrios macroeconómicos. Pasado este “test de la blancura”, existe una creciente convicción en la elite política de que ahora sí es posible desarrollar una actitud más asertiva que, sin olvidar los datos estructurales, elabore los rasgos y características que tiene para Chile la construcción de una sociedad efectivamente justa. No es casual que el fenómeno anterior se verifique en un contexto internacional de franca retirada del neoliberalismo, que nunca en verdad constituyó un modelo de sociedad deseada y en donde se ha producido una interesante revitalización de las opciones socialdemócratas. Si bien estas experiencias no proveen un decálogo o simple recetario a imitar, sí han puesto el acento en los umbrales necesarios para contar con sociedades integradas, dueñas de niveles importantes de cohesión social.

Aunque se puede afirmar que todavía no se empieza la construcción del edificio, a lo menos cierto andamiaje básico parece estar en franco desarrollo. De ello dan cuenta los debates en torno al papel insustituible del Estado como agente igualador de oportunidades sociales y como ente regulador de los mercados. O la reforma educacional en desarrollo, que con todas sus complejidades tiene como núcleo central entregar un conjunto de conocimientos y destrezas con nuevos métodos y tecnologías, orientados a dinamizar al sector público en procura de igualar los flujos de conocimiento en la sociedad. También se deben señalar los cambios en un sentido igualitario

del sistema de salud y los proyectos destinados a acortar la brecha de la desigualdad (Chile Solidario). Es innegable que quizás en algunos casos se actúe por la fórmula de ensayo y error. Pero ello revela, en cierta medida, la carencia de un modelo omnicompreensivo –que en verdad nadie posee– y la búsqueda real y genuina por combinar crecimiento económico con políticas de Estado de corte redistributivo.

Al respecto, fuera de una consideración estrictamente técnica y más allá de los conflictos puntuales, no parecen haberse atendido lo suficiente los pactos que se están bosquejando en el sector público, un conjunto de políticas que vinculan crecientemente las remuneraciones con el desempeño, es decir, con metas medibles que eleven los niveles de eficacia y agilidad de dicho sector. Es un proceso de largo aliento, pero que sin duda prefigura una forma distinta al histórico modo de relación e integración de los actores sociales con el Estado, desarrollo que habría que seguir con interés.

Este es el sentido que adquiere el debate en la actualidad. Es a todas luces claro, por otro lado, que se transita por un sendero que cuenta con dos “zonas de riesgo” muy claras que de algún modo trazan los límites de lo políticamente deseable. La primera se puede denominar de “alternativismo ingenuo”. La retórica de esta “zona riesgosa” es decir que se ha actuado con restricciones de manera muy prolongada y que es hora de “soltarse las trenzas” para construir algún tipo de camino propio de diversos colores. Ello a menudo no contiene un claro afán programático y representa más bien la expresión de un cierto radicalismo iracundo. Ejemplos de esta línea son los llamados altisonantes “en contra” del modelo neoliberal, que a menudo denuncian los problemas de la desigualdad y por ende de la concentración de la riqueza en el país, pero a la hora de las propuestas se quedan en un mero “consignismo” genérico. La segunda se puede denominar de “pedaleo conservador”. El tenor de esta actitud es simplemente administrar los datos estructurales de la realidad y oponerse de manera cerrada a cualquier cambio debido, supuestamente, a los efectos perversos que aquellos pudieran desencadenar (Hirschman 1991).

Como se podrá percibir, la reforma intelectual que hemos descrito supone un nuevo salto para elaborar un conjunto de políticas públicas, si se quiere de “segunda generación”, que profundicen muchas de las iniciativas que se encuentran en pleno desarrollo. Pero también es crucial plantearse las reformas que es necesario introducir en los sistemas de representación toda vez que se concluye en el arcaísmo y en la esclerosis de una elite política crecientemente más ensimismada.

Al efecto, no es del todo razonable pensar que la Concertación esté en condiciones de elaborar una “refundación” radical de sus partidos y de sus culturas políticas más basales. En general, en los diversos procesos históricos, los partidos políticos que han sido gobierno sólo están en condiciones de cambiar sus perfiles políticos y de readecuarse de modo más sustantivo una vez que dejan el poder. Como es natural, todo proceso refundacional de un partido o de una coalición supone desajustes considerables, lo que implica una alta dosis de introversión política de difícil pronóstico cuando partidos o coaliciones se encuentran en el gobierno.

Lo que sí cabe esperar en el caso de una coalición de partidos como la Concertación es la mudanza de estilos políticos y la capacidad para capturar y elaborar políticamente los nuevos sentidos y problemas que muestra la sociedad. Para decirlo derechamente, los partidos cuentan con una inmejorable oportunidad para introducir un conjunto de cambios que les permitan “ventilar” sus opciones políticas y abrirse al reclutamiento de nuevos contingentes de liderazgos emergentes en la sociedad. En este libro, por cierto, se examina la situación de la Concertación y se describen de modo realista los mecanismos de funcionamiento de la elite concertacionista, que ha sido refractaria a cambiar sus repertorios políticos más basales por las inercias existentes y los pocos incentivos que existen para una mutación de las culturas políticas heredadas. Sin embargo, se debiera instalar como una convicción política profunda la imperiosa necesidad de transitar a modelos de partidos genuinamente democráticos y participativos.

Ello impone la tarea política de sentar las bases de un gran partido socialdemócrata en el país, que aloje en su interior vertientes amplias y diversas que expresen tanto la matriz socialista histórica como también el humanismo cristiano, sin menospreciar a aquellas más “movimientistas” de la izquierda extraparlamentaria. Este ejercicio político debiera ser complementado con una fuerte ciudadanización de las rutinas y prácticas partidarias. Es decir, el nuevo ciclo debiera traer a la acción política al primer plano, de modo claro y nítido, para que esté a tono y sea, si se quiere, funcional al dinamismo y vitalidad que hoy manifiestan vicariamente los ciudadanos por todos los intersticios de la sociedad.

Por otra parte, la habilidad que en adelante tenga la Concertación y sus partidos para abrir las esclusas de la participación ciudadana en otros dominios, denotaría un cambio de estilo fundamental. Uno de esos dominios se refiere al proceso de elaboración programática. Este

proceso siempre tiene un componente técnico-profesional insoslayable, pero junto a este será de la máxima importancia generar espacios variados de encuentro entre la ciudadanía, los profesionales, los partidos y los candidatos, de tal manera que se produzca un “caldo de cultivo” de nuevas ideas y referentes ético-culturales. La imagen de una convención burocrática de partidos cuyos miembros elaboran un programa ha de ser, en este sentido, un artefacto del pasado.

La descripción de un nuevo o distinto “mapa cognitivo” que debería internalizar la elite política vinculada a la Concertación, debe sin duda combinar la dimensión clásica de toda acción política bien orientada, esto es, combinar adecuadamente la dimensión racional-instrumental con aquella simbólico-expresiva. Es decir, cuando se elabora un conjunto de argumentos que avalan la necesidad de moverse hacia una política de radicalismo democrático, ello no implica dejar de lado la capacidad de dirección y conducción de los procesos políticos, lo que es responsabilidad indelegable de una dirigencia política lucida.

En este sentido es posible apuntar que los cambios insinuados en estas páginas, en la línea de una profundización de la democracia y de la apertura de un ciclo signado por una mayor deliberación pública y participación, sugieren que sean incorporadas las nuevas demandas y expresiones difusas de la ciudadanía por mayores espacios de deliberación y de “voz” (Hirschman 1977). Sin embargo, ello no significa que exista una acción ciudadana espontánea y con capacidad de autogobierno *per se*. Más bien se trata de recoger esta dimensión simbólico-expresiva de la política para fundar una sociedad más reflexiva, que amplifique deberes y derechos, pero que ha de ser adecuadamente conducida y liderada por una buena dosis de racionalidad-instrumental, lo que define los contornos clásicos de un buen gobierno. Sostenemos con esta argumentación circular que se debe evitar caer en una cierta mitologización de la política que, en la búsqueda de un libreto distinto, se refugia en atalayas como aquella de la participación. Se trata de un concepto elusivo y complejo que requiere ser siempre elaborado y situado en contextos específicos (Elster 2001).

En suma, la elite política vinculada a la Concertación ha demostrado una notable capacidad para gobernar el país y modernizarlo en diversos ámbitos. Ahora será importante que la política regrese al primer plano para sentar las bases de una sociedad reflexiva, tolerante, pluralista y cada vez más igualitaria.

REFERENCIAS

- Bachelet, Michelle. *Ideas para mi gobierno. Una propuesta ciudadana*. Santiago: s/e, 2005.
- Boeninger, Edgardo. *Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad*. Santiago: Andrés Bello, 1997.
- Correa, Sofía. *Con las riendas del poder. La derecha chilena en el siglo XX*. Santiago: Sudamericana, 2004.
- Elster, Jon. *La democracia deliberativa*. Madrid: Gedisa, 2001.
- Hidalgo, Paulo. *¿Fin de un ciclo político? Ensayos sobre política y sociedad*. Santiago: Cesoc, 2002.
- Hirschman, Albert. *Retóricas de la intransigencia*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1991.
- . *Salida, voz y lealtad*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1977.
- Lechner Norbert. *Los patios interiores de la democracia. Subjetividad y política*. Santiago: Flacso, 1988.
- Moguillansky, Graciela. *La inversión en Chile. ¿El fin de un ciclo en expansión?* Santiago: Fondo de Cultura Económica/CEPAL, 1999.
- Moulian, Tomás. *Chile actual. Anatomía de un mito*. Santiago: Lom, 1997.
- Paramio, Ludolfo. *Tras el diluvio. La izquierda ante el fin de siglo*. México D.F.: Siglo XXI, 1988.
- Rustow, Dankwart. "Transiciones a la democracia. Hacia un modelo dinámico". *Comparative Politics* (Abril 1970).
- Tironi Eugenio. *Comunidad, familia y nación en el Bicentenario. El sueño chileno*. Santiago: Taurus, 2005.

FRANCISCO JAVIER DÍAZ

Candidato a doctor en ciencia política de la Universidad de Pittsburgh y abogado de la Universidad de Chile. En 2000 obtuvo el grado de Master of Science en política comparada en la London School of Economics & Political Science y obtuvo la beca Fulbright para realizar estudios de Ph.D. en Estados Unidos. Es autor de diversos artículos acerca de política nacional e internacional en periódicos, revistas y libros. Ha ejercido la docencia en la Escuela de Gobierno del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Arcis y en la Academia Diplomática Andrés Bello del Ministerio de Relaciones Exteriores. También fue Teaching Fellow en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Pittsburgh.

UNA MIRADA GLOBAL AL SISTEMA DE PARTIDOS: FRACTURAS Y CONTRADICCIONES

FRANCISCO JAVIER DÍAZ

INTRODUCCIÓN

Si hay algo a lo que deben temer los analistas políticos es a los estados de ánimo. Si de estos dependiera el análisis, un ensayo acerca del sistema de partidos chileno, escrito el 1 de noviembre de 2004, esto es, un día después de las elecciones municipales de 2004, cuando la Concertación y la Alianza llevaron candidatos a alcalde en todas las comunas del país en fórmula uninominal, sería muy distinto a un ensayo acerca del mismo tema, escrito el domingo 16 de mayo, vale decir, un día después de la proclamación presidencial de Sebastián Piñera en el consejo general de Renovación Nacional.

En el primer caso, el observador pudo verse obnubilado por el acto de disciplina electoral y programática de ambos bloques, y haber proclamado dicha elección como el evento que terminó por consolidar la dinámica bicoalicial del sistema de partidos chileno. En el segundo caso, en cambio, el observador pudo verse obnubilado por la apuesta electoral de Renovación Nacional, por cómo esta intenta tentar al electorado demócratacristiano en una aventura a través del centro político, y haber proclamado el fin de los dos bloques y la vuelta a los clásicos tres tercios de la política chilena.

Se trata de distintas interpretaciones, fundadas en estados de ánimo, para las fracturas y contradicciones que tiene el sistema de partidos en Chile. El presente ensayo se refiere precisamente a estas fracturas y contradicciones. Postula, en breve, que en los sistemas de partidos hay que diferenciar lo que son sus *estructuras*, de lo que son sus *dinámicas*. La estructura del sistema chileno es fruto de una serie de fracturas históricas, cada una de las cuales da origen a distintas ramas de partidos, originándose una *estructura multipartidaria*. La gran contradicción, entonces, es por qué desde 1989 a la fecha, el sistema ha operado bajo una *dinámica bicoalicial* y no multipartidista o multibloque. La respuesta sugerida está dada por dos elementos: el

sistema electoral parlamentario y la centralidad de la fractura “Sí-No” de 1988.

La primera parte de este ensayo describe sumariamente las tradicionales fracturas o “escisiones generativas” del sistema de partidos chileno. Luego, analiza la discusión acerca de la dinámica de este sistema. Argumenta que a partir de 1989 el sistema ha pasado de una dinámica multibloque a una dinámica bicoalicial. Finalmente, el ensayo sugiere cuáles son los elementos que podrían hacer cambiar la actual dinámica y entrega algunas conclusiones.

LOS ORIGENES DEL SISTEMA: TRES TERCIOS

Siguiendo la teoría de los *cleavages* o fracturas, expuesta por Lipset y Rokkan (1967), Arturo Valenzuela explica que el sistema de partidos chileno es fruto de diversas y sucesivas “escisiones generativas” (Valenzuela 1990, 136). La primera fractura fue la división entre la administración central y la periferia, lo que determinó el surgimiento de dos partidos de carácter nacional, el Partido Liberal (PL) y el Partido Conservador (PCo), hecho que fue determinante para la consolidación del Estado.

El segundo clivaje fue la cuestión religiosa. Este clivaje determinó una diferencia aun mayor entre liberales y conservadores, pero a la vez justificó la emergencia de un tercer partido, el Partido Radical (PR), el que encuentra un fuerte soporte en la incipiente clase media y profesional (Arriagada 1997, 18).

El tercer clivaje fue la cuestión social. El proceso de industrialización y el fortalecimiento del sector minero crearon las condiciones para el surgimiento de un incipiente proletariado (Arriagada 1997, 21). Se comienzan a propagar ideas socialistas entre las organizaciones de trabajadores y, poco a poco, se forman agrupaciones políticas de izquierda. De este clivaje emergen dos partidos principales: el Partido Comunista (PC), en 1922, y el Partido Socialista (PS), en 1933 (Díaz 1998).

Es este el momento en que se produce la consolidación estructural del sistema de partidos chileno. Como señala Giovanni Sartori, a partir del momento en que aparecen los partidos de masas es precisamente cuando se puede hablar de un sistema consolidado (Sartori 1967, 75). Ello, por cuanto el partido de masas expone el fenómeno de ampliación del sufragio y la participación de la mayoría de la ciudadanía en el proceso político. De aquí también la famosa “hipótesis congeladora” de Lipset y Rokkan (1967, 134). Según ella, los parti-

dos que existían alrededor de 1920 terminarán siendo básicamente los mismos partidos que existirán cuarenta años después, alrededor de 1960. Peter Mair reactualizó esta hipótesis a fines de los años noventa, señalando que la hipótesis tiene aun mayor validez. “Los viejos partidos que existían en los años 1920 y 1960, permanecen en sus posiciones dominantes, no obstante los desafíos de nuevos partidos y de nuevos movimientos sociales” (Mair 1997, 90).

La única excepción a este cuadro fue la aparición del Partido Demócratacristiano. Pero la excepción es más bien aparente. El PDC, heredero de la Falange Nacional, es más bien el producto de la interacción de dos clivajes ya existentes: el clivaje religioso y el clivaje social. La Falange nace como una agrupación de jóvenes católicos influenciados por la doctrina social de la Iglesia Católica en 1938 (Walker 1999, 92). Tuvo el gran mérito de incorporar al sistema sectores aún no movilizados políticamente, como era el campesinado y los pobladores (Walker 1999, 125), lo que completó la tendencia hacia la movilización máxima del sistema (Arriagada 1997, 34).

Son estos tres clivajes los que dan forma a la estructura multipartidista del sistema chileno. Sartori calificó el sistema chileno como un caso de “multipartidismo polarizado” (Sartori 1976, 159). Dos características resaltaban: una, el alto índice de fraccionalización del sistema -0.796 para el período 1945 a 1973, según el índice de Rae (Sartori 1976, 314)–, así como el alto número de partidos que obtuvieron representación parlamentaria (45 partidos). Sin embargo, esta estructura multipartidista se mantuvo siempre bajo una dinámica de grandes bloques, los denominados “tres tercios”.

Siguiendo el concepto de *core parties* de Gordon Smith (1990, 161), se puede señalar que pese a la alta fraccionalización existieron siempre en Chile lo que denominamos “partidos principales”. Se trata de seis partidos, los que estuvieron siempre presentes en la competencia y consolidaron una dinámica de competencia de tres grandes bloques: izquierda, centro y derecha. Como muestra la Tabla 1, durante el período 1932-1973 los partidos principales mantuvieron significativa representación parlamentaria, a la vez que los tres bloques mantuvieron promedios de 20% de la votación como mínimo. Además, su capacidad coalicional fue significativa, participando todos ellos del gobierno, como muestra la Tabla 2. Esta dinámica se mantuvo durante 41 años, 8 elecciones presidenciales y 11 elecciones parlamentarias consecutivas.

TABLA 1
PARTIDOS PRINCIPALES 1932-1973:
RESULTADOS ELECTORALES^(a)

Partido	1932 %	1937 %	1941 %	1945 %	1949 %	1953 %	1957 %	1961 %	1965 %	1969 %	1973 %	Prom.
PL	10,6	20,8	14,0	20,1	19,3	10,9	15,4	16,1	7,3	-	-	14,9
PCo	16,9	21,3	17,2	23,6	22,7	14,4	17,6	14,3	5,2	-	-	17,0
PN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	21,3	20,6
PDC	-	-	3,5 ^(b)	2,6 ^(b)	3,9 ^(b)	2,9 ^(b)	9,4	15,4	42,3	29,8	29,1	25,2 ^(c)
PR	18,2	18,7	20,7	19,9	27,7	15,6	22,1	21,4	13,3	13,0	7,7 ^(d)	18,0
PS	-	11,2	20,6	12,8	9,4	14,2	10,7	10,7	10,3	12,2	18,7	13,0
PC	-	4,2	11,8	10,3	^(e)	^(e)	^(e)	11,4	12,4	15,9	16,2	11,7
Otros	54,3	23,8	12,2	10,7	17,0	42 ^(f)	24,8	10,7	9,2	9,1	7,0	20,0
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-

^(a) Resultados elecciones parlamentarias, Cámara de Diputados.

^(b) Porcentaje de la Falange Nacional (1941-1953).

^(c) Media PDC, considerando elecciones desde 1957.

^(d) Partido Radical se divide en tres: PR, PIR (SD) y PDR.

^(e) El PC es proscrito durante las elecciones de 1949, 1953 y 1957.

^(f) Dentro de este 42% estaba el Partido Agrario Laborista (18,9%), de Carlos Ibáñez.

Fuente: Cruz-Coke 1984.

TABLA 2
PARTIDOS PRINCIPALES 1932-1973:
CAPACIDAD COALICIONAL

Partido	Veces en el gobierno	Años en el gobierno
PL	3	16
PCo	3	11
PN	-	-
PDC	1 ^(a)	6 ^(a)
PR	6	20
PS	4	17
PC	4	12

^(a) La Falange Nacional participó en dos coaliciones de gobierno, logrando tres años en el poder.

Fuente: Urzúa 1992.

Al comenzar la nueva democracia en 1988, cundía el entusiasmo tanto entre actores políticos como entre académicos: 92,23% de la población en edad de votar se registró voluntariamente en los padrones electorales, mientras que el 96,6% votó en el plebiscito. Un año después, en diciembre de 1989, 92,3% del electorado votaba en las elecciones presidenciales. El proceso de transición a la democracia era conducido por casi los mismos partidos y líderes que se encontraban activos en 1973. El discurso de Pinochet en contra de la política y “los políticos” parecía no haber tenido éxito alguno.

Sin embargo, aparentemente sí ha habido un cambio durante los últimos años. Dos coaliciones principales emergieron luego de las elecciones de 1989, combinando sus fuerzas a nivel presidencial y parlamentario. Estas dos coaliciones obtuvieron conjuntamente 85,67% de los votos en dichas elecciones parlamentarias, patrón que persistiría en sucesivos comicios. Juntas obtuvieron 92,08% en 1993, 87,96% en 1997 y 92,17% en 2001. Sus candidatos presidenciales también alcanzaron similares porcentajes. Los candidatos apoyados por la Concertación y por la alianza RN-UDI obtuvieron, en conjunto, 84,6% en 1989, 82,4% en 1993 y un impresionante 95,5% en 1999 (ver Tabla 3). Aun así, algunos autores señalan que este patrón no debiera ser tomado de manera tajante, argumentando que los “tres tercios” están aún presentes en la política chilena, según se desprendería al comparar la votación de cada “tercio” con su promedio anterior al golpe de Estado.

Este ensayo toma partido por el “bicoalicionismo” como nueva dinámica de interacción. Reconoce la estructura multipartidaria, pero postula que esta opera bajo una dinámica bipolar. Las coaliciones no son simples acuerdos electorales; se trata más bien de verdaderos bloques políticos y programáticos, los cuales ejercen fuerza centrípeta sobre el sistema político. Cada bloque presenta listas conjuntas para cada elección, sin importar el sistema electoral que se utilice en cada una de ellas. Presentan un solo candidato para la Presidencia, donde la fórmula es de segunda vuelta en magnitud distrital uninominal; para el Congreso Nacional, donde la fórmula es proporcional tipo D'Hondt en magnitud distrital binominal; para las alcaldías, donde la fórmula es uninominal mayoritaria simple; y para concejales, donde la fórmula es proporcional tipo D'Hondt en distritos multinominales (6, 8 ó 10, dependiendo del número de habitantes de la comuna).

Además, los partidos han consolidado un sistema de bloques electorales cohesionados, obteniendo significativo apoyo en todas las elecciones que han tenido lugar durante la restauración democrática. El apoyo promedio para el caso de elecciones parlamentarias es de 89,47% para el período 1989-2001. En el caso de elecciones presidenciales, este promedio es similarmente alto: 87,5% para el período 1989-1999.

TABLA 3
VOTACIÓN CONCERTACIÓN Y ALIANZA 1989-2001

Elección	1989	1993	1997	1999	2001	Prom.
Presidente	84,60%	82,40%	–	95,50%	–	87,50%
Congreso	85,67%	92,08%	87,96%	–	92,17%	89,47%

Fuente: Ministerio del Interior.

¿Las razones de esta nueva dinámica? Como señalamos arriba, esta nueva dinámica se explica por la centralidad del sistema electoral parlamentario, así como por la centralidad de la fractura Sí/No. En los próximos párrafos analizaremos uno y otro.

LA CENTRALIDAD DEL SISTEMA BINOMINAL

Existe una continua discusión a nivel teórico respecto de si el sistema electoral ha logrado cambiar o no el sistema de partidos. Un sector de la literatura sostiene que el sistema electoral ha favorecido efectivamente la formación de dos grandes coaliciones (v.gr. Aninat y Navia 2005; Rabkin 1996; Guzmán 1993), mientras que otro sector insiste en lo contrario: el sistema electoral no redujo la fragmentación partidaria como se esperaba que efectivamente ocurriese (v.gr. Rahat y Snajder 1998; Siavelis 1997; Valenzuela 1990). A simple vista, las conclusiones de este grupo podrían parecer valederas a la luz del hecho de que más de 10 partidos distintos han obtenido representación parlamentaria durante la década pasada. Como observa Peter Siavelis, “es un error tratar simplemente a las actuales coaliciones como si fueran partidos” (Siavelis 1997, 655).

Uno puede también analizar el índice de fraccionamiento del actual sistema de partidos. Como ha sostenido Peter Siavelis, la fórmula electoral impuesta por el régimen militar no habría logrado cumplir su propósito reductor del sistema partidario. Por el contrario, usando

diversos métodos para medir "partidos de relevancia",¹ Siavelis concluye que "el sistema binominal no ha tenido éxito en reducir substancialmente el número de partidos políticos relevantes" (Siavelis 1997, 661). Y agrega que se tiende a olvidar que muchas veces el accionar de los partidos más pequeños no se traduce en cupos parlamentarios, sino más bien en la negociación de cuotas de poder o cargos a nivel municipal. A nuestro juicio, esta línea de argumentación omite algo importante: todos estos arreglos y negociaciones se dan en un marco de competencia entre dos bloques. Los partidos pequeños que actúan en este contexto lo hacen dentro de la mecánica bicoalicial, por lo que difícilmente podrían ser tratados como muestra de fraccionamiento del sistema partidario.

De hecho, al analizar los datos a nivel distrital, el bicoalicionismo parece más consolidado aún. Como han demostrado Navia y Sandoval, la competencia electoral real a nivel de distrito se entraba entre menos partidos que la competencia electoral a nivel nacional (Navia y Sandoval 1998, 12). Así, por ejemplo, el número efectivo de partidos (de acuerdo al índice de Taagepera y Shugart) a nivel nacional fue de 6,77 en 1993 y 7,32 en 1997, mientras que a nivel distrital dicho índice fue considerablemente menor: 3,67 en 1993 y 4,5 en 1997 (promediando todos los índices a nivel distrital). Sin haber hecho los cálculos, era posible adelantar que estos índices fueran menores en la parlamentaria de 2001, cuando ya ni la UCC ni el Partido del Sur eligieron representante alguno. ¿Cómo es esto posible? Se puede explicar en parte debido a la peculiar mecánica que se da en un sistema binominal. Cada partido o polo dentro de la coalición presenta su candidato; hay, por tanto, cuatro candidatos para cada elección (un RN y un UDI en la Alianza; un DC y un PS-PPD en la Concertación). Si un partido menor como el PRSD, o en su tiempo la UCC, desea obtener algún cupo debe negociarlo con el partido o polo mayor. De esta manera, por ejemplo, un votante PPD no tendrá ningún candidato PPD por quien votar en alrededor de 30 distritos, por cuanto el PS se habrá llevado los otros 30 cupos que le corresponde a dicho polo.

¹ Siavelis reporta sus resultados utilizando los siguientes índices: 1) número de partidos con representantes en la Cámara; 2) número de partidos de "simple relevancia" (i.e. representación en el parlamento + promedio nacional sobre 5%); 3) porcentaje de votos recibidos por partidos de "simple relevancia"; 4) índice de Laakso y Taagepera de "partidos efectivos"; 5) índice de Molinar de "número de partidos" (Siavelis 1997, 660).

Dicha situación, que se ha repetido en todas las elecciones, sólo puede ser posible en un contexto de competencia de coaliciones estables: los partidos sacrifican asientos porque actúan bajo consideraciones de bloque. Además, hay que destacar cómo *el sistema electoral parlamentario permea las otras elecciones*.

En efecto, para la presidencial tenemos en Chile un sistema de segunda vuelta, con umbral de 50%. Este sistema, en teoría, debiera fomentar el multipartidismo, mientras que el sistema de mayoría simple o *plurality*, que era el que existía en los hechos en Chile antes de 1973, debiera fomentar el bipartidismo (Jones 1994). ¿Qué ocurría y qué ocurre en Chile? Precisamente lo contrario. Antes de 1973 se presentaban candidaturas presidenciales bajo una dinámica multi-bloque, en circunstancias que en estricta lógica los candidatos más afines debieran haber unido fuerzas para evitar el triunfo de un tercero más distante. A su vez, después de 1989 las candidaturas presidenciales se presentan bajo dinámica bicoalicional, en circunstancias que en teoría existe un claro incentivo a presentar diversas opciones a la primera vuelta para después negociar apoyos en la segunda. Esta contradicción está dada, a nuestro juicio, por la centralidad del sistema electoral parlamentario: proporcional de alta magnitud distrital antes de 1973, proporcional de baja magnitud distrital y, por tanto, de mecánica mayoritaria, después de 1989.

La candidatura de Sebastián Piñera, en este sentido, no es vista como una amenaza a esta dinámica, sino más bien como una manera de resolver el liderazgo dentro de la derecha. A pocas horas de proclamada dicha candidatura, tanto los dirigentes de RN, de la UDI, como los propios candidatos, se apresuraron en ratificar el acuerdo parlamentario de lista única. A los pocos días, una vez descartada la posibilidad de realizar una primaria, ambos candidatos comienzan a tratarse de “socios” para sumar más votos en la primera vuelta y ganarle a la Concertación en la segunda vuelta.

El sistema binominal permea también las elecciones municipales. Para las elecciones de 2004 se utilizó por primera vez un sistema uninominal para elegir alcalde. Las coaliciones se ordenaron en todo Chile y presentaron candidatos únicos en todas las comunas. Los resultados fueron decisivos: 44,79% para la Concertación, obteniendo 204 alcaldes que equivalen al 59,3% del total. Para la Alianza, 38,59%, obteniendo 103 alcaldes (31,6% del total). Y 5,86% para el pacto Juntos Podemos, eligiendo 4 alcaldes (1,1% del total).

Esta elección reviste la mayor trascendencia. Un votante DC, por ejemplo, no tuvo alcalde DC por quien votar en más de la mitad de

las comunas de Chile y, sin embargo, la Concertación mantuvo su rango de votación. Esto habla de la disciplina de los partidos, pero también de la coincidencia programática de los bloques. En la mayoría de los casos, los partidos deben hacer campaña para la coalición más que para ellos mismos y apoyar así segundas opciones para su electorado más que enarbolar sus propias banderas.

LA CENTRALIDAD DE LA FRACTURA SÍ/NO

El gobierno militar no fue sólo una dictadura cleptócrata como tantas otras en el mundo, que carecen de toda línea programática. Por el contrario, se trató de un gobierno altamente ideologizado, que combinó el neoliberalismo más extremo en lo económico, un rígido conservadurismo en lo moral y un fuerte autoritarismo en lo político (Cavallo 1990; Constable y Valenzuela 1991; Huneus 2001). Todo ello, además, se vio plasmado en la Constitución y las leyes dictadas por el régimen.

La fuerte impronta ideológica del régimen militar provocó que el eje “democracia versus autoritarismo”, propio de la política chilena durante los años setenta y ochenta, derivara en un claro componente “izquierda/derecha”. Así, una situación política muy concreta (Sí o No a Pinochet en 1988) derivó en un nuevo clivaje, esta vez no social, sino político. Dicho clivaje ha sido capaz de incorporar diversas temáticas emergentes en la sociedad chilena: la Concertación representa al PDC, PR, PS y PPD, pero es también un canal privilegiado (y a veces conflictuado) para la incorporación de demandas de organizaciones sociales o ambientales. Por otro lado, la Alianza también incorpora nuevos temas y demandas en su plataforma, como la eficiencia, el crimen o la corrupción.

Las coaliciones ya no son las mismas que hace 15 ó 16 años. Sus partidos han formado verdaderas alianzas; han elaborado nuevos discursos y han cambiado radicalmente su manera de atraer seguidores. No obstante han mantenido viejos nichos electorales, los partidos han transformado sus medios de organización y sus instrumentos de hacer campaña, a la vez que han absorbido nuevos valores y preocupaciones presentes en la sociedad.

Para la Concertación se trata de un pacto forjado con esfuerzo. Según ha sido latamente documentado, tres factores principales contribuyeron al reencuentro de las verdaderas subculturas políticas que eran la izquierda y el centro: la lucha por los derechos humanos durante el régimen militar, la influencia del intercambio académico

entre intelectuales y líderes políticos durante los años ochenta y el proceso de renovación de la izquierda (v.gr. Cavallo 1990; Constable y Valenzuela 1991; Ortega 1992; Otano 1995; Joignant 1998).

La legitimación política llegaría con la unidad demostrada para el plebiscito de 1988 y, sobre todo, para las elecciones parlamentarias de 1989. Este fue un punto crucial: después de décadas de fiero enfrentamiento, los socialistas llegaban a acuerdos con la DC en áreas como el concepto de democracia o principios económicos básicos. La renovación del Partido Socialista fue un hito fundamental en esta convergencia, la cual a la larga constituye un cambio trascendental que moldearía un nuevo paisaje político en el país (Walker 1990; Díaz 1998). Como sugirió Eugenio Tironi en 1990, la Concertación significó que los partidos tuvieron que derrotar “su tradicional inercia y disputas ideológicas, y adoptar una conducta racional y pragmática para poder embarcarse en futuras acciones. Lo anterior revela una importante modernización en la política chilena” (Tironi 1990, 31).

En la derecha la tarea fue algo más fácil. En rigor, fueron los neoliberales quienes se hicieron del poder político después de 1989, en desmedro de los nacionalistas. Los neoliberales predominaron en Renovación Nacional, donde se concentraron los herederos del antiguo Partido Nacional, y ciertamente en la UDI, donde primaban los gremialistas (Cabezas y Osorio 1995; Valdés 1995; Huneus 2001). Hoy por hoy, las diferencias en términos programáticos al interior de la Alianza son mínimas, por no decir inexistentes. Tanto así, que el programa que preparaba Joaquín Lavín como candidato único presidencial de la Alianza en los denominados “Talleres Bicentenario” ahora será compartido por ambos candidatos. Esta confluencia tiene un agregado adicional: ambos partidos defienden el statu quo económico e institucional. El statu quo en Chile no es neutral, es una clara opción política. Esa es la opción de toda la Alianza, lavinistas o piñeristas.

De esta manera, ambos bloques demuestran una interesante capacidad de adaptación. La derecha logró sacudirse electoralmente de su pasado vinculado al régimen y casi se hizo de la Presidencia en 1999. La Concertación, por su parte, después de complicados años de crisis económica y escándalos de corrupción (reales o aparentes), repotencia el liderazgo tradicional de Ricardo Lagos y el liderazgo emergente de Michelle Bachelet, y se apresta para disputar palmo a palmo la elección de 2005, algo impensado por muchos en 2001 ó 2002 .

La competencia política hoy en Chile, al igual que en la mayoría de las democracias desarrolladas, es entre izquierdas y derechas (Bobbio 1996; Giddens 2000). Es efectivo que excepcionalmente la Democracia Cristiana en Chile compite con la izquierda, y no en la centro-derecha, como ocurre en Europa. Pero hay que atender la especial historia de nuestro país, la excesiva ideologización de la derecha chilena y el tradicional progresismo de la DC chilena (Walker 1998). La pelea final es entre izquierda y derecha. Como señala Anthony Giddens, quienes niegan esta realidad tienden a ser de derecha (Giddens 1998, 40).

LA REAL AMENAZA AL SISTEMA

¿Cuál es la real amenaza a la dinámica bicoalicional del sistema de partidos en Chile? ¿Se resolverá de alguna manera la contradicción de tener un sistema de estructura multipartidaria operando en dinámica bipolar? ¿O nos mantendremos en esta situación, como ocurre en países europeos, donde la competencia se da precisamente entre coaliciones de izquierdas y derechas?

Hemos señalado que la evidencia apunta hacia la mantención del sistema en sus actuales formas y que el surgimiento de una tercera fuerza de centro, basada en la alianza de la DC y RN, resulta difícil. Tendrían que superar la enorme influencia del sistema electoral y, además, superar décadas de trabajo conjunto de la izquierda y el centro. Sin embargo, sí existe a nuestro juicio un elemento que podría detonar cambios en el sistema de partidos chileno: la decreciente representatividad y, consecuentemente, la paulatina pérdida de legitimidad del sistema.

¿A qué nos referimos con esto? Al hecho tan simple y básico de que para las últimas elecciones municipales, apenas el 54,6% de los chilenos en edad de votar votó válidamente. O sea, 43,7% de los chilenos no se inscribió o no fue a votar o, si lo hizo, anuló su voto o lo dejó en blanco. En otras palabras, nos acercamos peligrosamente al umbral de que sea más la gente que no participa en las elecciones que la que participa. Ello generará, indudablemente, un cuestionamiento de legitimidad en el sistema.

De acuerdo al Latinobarómetro 2004, sólo el 57% de los chilenos apoya la democracia, mientras que sólo un 40% se siente satisfecho con ella. Según todas las encuestas, los partidos políticos son las primeras instituciones en resentir esta pérdida de legitimidad, pasando a ser las instituciones peor evaluadas.

A nuestro juicio, parte importante de este desprestigio pasa por la escasa incertidumbre que existe en las elecciones. Debido al sistema binominal, los chilenos prácticamente sólo acuden a ratificar en las urnas a los candidatos impuestos por los partidos. En más del 95% de los distritos de Chile se elige un parlamentario de cada alianza. Esto atenta contra la esencia de la democracia. Como señala Adam Przeworski, la democracia es un sistema de “incertidumbre institucionalizada”. Las elecciones, según Przeworski, deben poseer una mínima cuota de disputa (Przeworski 2000, 35).

Desde hace décadas que la literatura norteamericana viene advirtiendo acerca de los “marginales desvanecientes” (*vanishing marginals*), entendiéndose por tal el peligro que encierra una serie de regulaciones y prácticas que hacen que la posición de los incumbentes sea cada vez más difícil de desafiar y, por tanto, se reduce la incertidumbre en las elecciones (Mayhew 1974; Fiorina 1977). La sensación de ilegitimidad se acrecienta. Al no haber incertidumbre, dadas ciertas reglas, la ciudadanía carece de poder de decisión. Desde Europa surgen críticas similares. Peter Mair advierte acerca de la “cartelización” de los partidos, donde estos adoptan una serie de protecciones para autosustentar su posición dominante y de esta manera evitar nueva competencia, como lo hacen los carteles (Mair 1997).

En las elecciones parlamentarias chilenas hay cada día menos incertidumbre. A tanto ha llegado esta situación, que la Alianza por Chile ha “cerrado” circunscripciones en varias ocasiones, haciendo correr un solo candidato por circunscripción (como lo hizo en 2001) o llevando a un solo candidato fuerte junto a otro que sirve de mera comparsa (como lo hizo en 1993 con el senador Errázuriz). De 480 escaños de diputados que se han elegido desde 1989, sólo en tres ocasiones se ha escogido candidatos fuera de todo pacto,² mientras que en sólo cuatro ocasiones se han elegido candidatos de otro pacto que no sea la Concertación y la Alianza.³

Los partidos tienen que tomar conciencia de todo esto. El peligro puede derivar en un “big bang” del sistema, para utilizar la expresión de Genaro Arriagada (1997). Así ocurrió en Italia en 1990 o en Venezuela con la llegada de Hugo Chávez en 1999, ante la grave crisis de legitimidad de aquellos sistemas de partidos. La gran amenaza del

² González (1997) y Paredes (2001) en Arica, y Venegas (1997) en San Antonio, todos quienes al poco tiempo ingresaron a partidos de las coaliciones.

³ Tres de estos fueron diputados del PAIS, en 1989. El otro fue Victoria Ovalle, de la UCC, en 1997.

sistema de partidos es la creciente y corrosiva abstención. Si no se hace nada, la nueva fractura podría darse entre los representantes del viejo orden partidocrático, contra los apolíticos.

COMENTARIOS FINALES

Hemos pretendido brindar un breve panorama del sistema de partidos en Chile, y colocar esta descripción en el marco de la literatura nacional y comparada que existe al respecto. Este es un ensayo; no hemos pretendido comprobar ninguna hipótesis, sino tan sólo ilustrar argumentos para analizar cómo vemos el futuro del sistema de partidos en Chile.

La idea central de este trabajo es que el sistema de partidos chileno presenta una gran contradicción: posee una estructura multipartidista, fruto de sucesivas fracturas sociales y políticas, pero que opera en una dinámica bicoalicial. Con esta aseveración hemos descartado las teorías que se han lanzado el último tiempo respecto del posible surgimiento de una tercera fuerza de centro RN-DC. La razón que hemos dado para descartar esta tesis es que tanto la centralidad que adquiere el sistema binominal parlamentario como la conformación histórica de dos grandes bloques programáticos en un eje izquierda/derecha, dificultan el surgimiento de una alternativa de centro.

Hemos identificado, sin embargo, un potencial peligro para el sistema. Este es el creciente malestar de la ciudadanía con los partidos políticos, lo que se evidencia en la baja participación electoral y en la bajísima estima hacia los partidos políticos. Pero se aprecia una esperanza en este sentido: simples modificaciones institucionales, como la inscripción automática, podrían incentivar la participación. La reforma al sistema binominal, a su vez, le podría dar nuevos aires de competencia al sistema político.

Los partidos chilenos han demostrado una alta capacidad de adaptación. Se adaptaron en los años veinte y treinta de la década pasada, cuando se extendió la clase media y surgió el proletariado; se adaptaron cuando se masificó el sufragio. La izquierda, con dolor, logró sobrevivir a la clandestinidad y la persecución, a la vez que todos los partidos se adaptaron a la nueva democracia. El sistema se adaptó a la competencia entre las tecnocracias, a la vez que hoy se adapta al marketing y los *soundbites*. El desafío es ahora ajustarse a una nueva ciudadanía, mucho más crítica, exigente y reflexiva que antes. Los nuevos liderazgos parecen demostrar que lo están logrando.

REFERENCIAS

- Aninat, Cristóbal; P. Navia. *Reformas políticas: los avances y lo que falta*. Working Paper. Santiago: Corporación Expansiva, 2005.
- Arriagada, Genaro. *¿Hacia un big bang del sistema de partidos?* Santiago: Los Andes, 1997.
- Bobbio, Norberto. *Left and Right*. Cambridge: Polity Press, 1996.
- Cabezas, Iván; V. Osorio. *Los hijos de Pinochet*. Santiago: Planeta, 1995.
- Cavallo, Ascanio, M. Salazar y O. Sepúlveda. *La historia oculta del régimen militar*. Santiago: Antártica, 1990.
- Constable, Pamela; A. Valenzuela. *A Nation of Enemies: Chile Under Pinochet*. New York: W.W. Norton, 1991.
- Cruz-Coke, Eduardo. *Historia electoral de Chile, 1925-1973*. Santiago: Jurídica, 1984.
- Díaz, Francisco Javier. *El Partido Socialista: historia, ideología y estructura. Funcionamiento, militancia y futuro*. Working Paper 22. Santiago: Instituto de Ciencia Política, Universidad de Chile, 1998.
- Fiorina, Morris. *Congress. Keystone of the Washington Establishment*. New Haven: Yale University Press, 1977.
- Giddens, Anthony. *The Third Way*. Cambridge: Polity Press, 1998.
- . *Más allá de la izquierda y la derecha*. Madrid: Cátedra, 2000.
- Guzmán, Eugenio. "Reflexiones sobre el sistema binominal". *Revista de Estudios Públicos CEP* 51 (1993): 303-325.
- Huneus, Carlos. *El régimen de Pinochet*. Santiago: Sudamericana, 2001.
- Joignant, Alfredo. *El gesto y la palabra*. Santiago: LOM, 1998.
- Jones, Mark. "Presidential Elections Laws and Multipartyism in Latin America." *Political Research Quarterly* 47 (1994): 41-57.
- Lipset, Seymour; S. Rokkan. "Cleavages Structures, Party Systems, and Voter Alignments." En P. Mair. *The West European Party System*. New York: Oxford University Press, 1990.
- Mair, Peter. *Party System Change*. Oxford: Clarendon, 1997.
- Mayhew, David. "Congressional Elections: The Case of Vanishing Marginals". *Polity* 6 (1974): 295-317.
- Navia, Patricio; J. Sandoval. "Binominal Electoral Law and Multi-Party System: The Chilean Contradiction." Preparado para ser presentado en la Conferencia 1998 de la Asociación de Estudios Latino Americanos. Chicago, Illinois (septiembre 24-26, 1998).
- Ortega, Eugenio. *Historia de una Alianza*. Santiago: CED/CESOC, 1992.
- Otano, Rafael. *Crónica de la transición*. Santiago: Planeta, 1995.
- Przeworski, Adam et al. *Democracy and Development*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- Rabkin, Rhoda. "Redemocratization, Electoral Engineering, and Party Strategies in Chile, 1989-1995." *Comparative Political Studies* Vol. 29 No. 3 (1996): 333-56.
- Rahat, Gideon; M. Snajder. "Electoral Engineering in Chile: the Electoral System and Limited Democracy." *Electoral Studies* Vol. 17 No. 4 (1998).

- Reeve, Andrew; A. Wave. *Electoral Systems*. London: Routledge, 1992.
- Sartori, Giovanni. "Structuring the Party System." En P. Mair. *The West European Party System*, New York: Oxford University Press, 1990.
- Sartori, Giovanni. *Parties and Party Systems*. Cambridge: Cambridge Polity Press, 1976.
- . *Ingeniería constitucional comparada*. México D.F.: FCE, 1996.
- Siavelis, Peter. "Continuity and Change in the Chilean Party System. On the Transformational Effects of Electoral Reform." *Comparative Political Studies* Vol. 30 No. 6 (1997): 651-74.
- Smith, Gordon. "Core Persistence: System Change and the People's Party." *Understanding Party System Change in Western Europe*. Eds. P. Mair and G. Smith. London: Frank Cass & Co. Ltd, 1990.
- Taagepera, Rein y M. Shugart. *Seats and Votes*. New Haven: Yale University Press, 1989.
- Urzúa, Germán. *Historia política de Chile y su evolución electoral (desde 1810 a 1992)*. Santiago: Jurídica, 1992.
- Valdés, Juan Gabriel. *Pinochet's Economists*. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
- Valenzuela, Arturo. "Partidos políticos y crisis presidencial en Chile: proposición para un gobierno parlamentario". *Hacia una democracia moderna: la opción parlamentaria*. Ed. O. Godoy. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile, 1990.
- Walker, Ignacio. *Socialismo y democracia*. Santiago: Hachette, 1990.
- . *El futuro de la Democracia Cristiana*. Santiago: Ediciones B, 1999.

RODRIGO SALCEDO

Sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Posee un M.A. y un Ph.D. en ciencias políticas en la Universidad de Illinois, Chicago, y diplomados en estudios de género y metodología de la enseñanza de las ciencias sociales, realizados en la misma universidad norteamericana. Sus ensayos han sido publicados en importantes revistas científicas extranjeras, tales como *American Behavioral Scientist* e *International Journal of Urban and Regional Research*. En Chile colabora frecuentemente en revista *Avances*. Es profesor en las universidades Católica de Chile y del Pacífico, y se desempeña como investigador titular en un proyecto de investigación sobre segregación residencial, financiado por Fondecyt y Banco Mundial. Actualmente es analista de la División de Estudios de la Secretaría General de la Presidencia y socio de la consultora en comunicación estratégica y opinión pública Ekhos.

LA ELITE POLÍTICA DE LA CONCERTACIÓN: REPRODUCCIÓN O REEMPLAZO

RODRIGO SALCEDO

Eighty percent of everything is just show up
Woody Allen

Desde su creación, a mediados de 1988, la Concertación de Partidos por la Democracia ha tenido un liderazgo estable, claro y que, con altibajos, siempre ha resuelto sus diferencias internas, especialmente las que tienen que ver con disputas de espacios de poder. Esa estabilidad se debe en buena medida a que la elite política del oficialismo, aquella que en definitiva toma las decisiones y alcanza acuerdos, ha variado muy poco desde la aparición del conglomerado. Ahora bien, dicha estabilidad, que hasta hoy aparece como una virtud, puede en el futuro complicar al oficialismo por el desfase que se produce entre una elite exitosa pero agotada y lejana a las preocupaciones de la gente, y una ciudadanía cultural, económica y socialmente muy diferente a la de fines de los ochenta. Así, es posible prever que sólo un reemplazo al menos parcial de la elite dominante permitirá a la Concertación mantener su vigencia, quizá no en el plano político (lo que en el corto plazo parece asegurado), pero sí como fuerza sociocultural. El siguiente trabajo, desde una manera ensayística y alejada de los estrictos cánones de la ciencia política, analiza las condiciones de reproducción y reemplazo de las elites políticas, aplicando la teoría elitista tradicional y modificada al caso de la Concertación en nuestro país. Se sostiene que, al menos en el corto plazo, no existen condiciones estructurales para un reemplazo de la elite dominante, sino más bien para su mera reproducción numérica, ya sea vía vasallaje, herencia y, en menor medida, mérito. Con todo, se sostiene que, al analizar el tema, se deben incluir variables ajenas a la política misma, tales como cambios en la sociedad, liderazgos y otros, los que podrían llevar a alternativas y escenarios insospechados.

I. UN BREVE REPASO A LA TEORÍA POLÍTICA SOBRE LAS ELITES PARTIDARIAS

Se entiende por elite política al conjunto de individuos que controlan los recursos políticos, toman las decisiones concernientes al ejer-

cicio y distribución del poder, especialmente al interior de los partidos políticos, el Parlamento y los órganos del Estado.

La característica central de toda elite política es la búsqueda permanente de la mantención de su dominio sobre el resto de los actores. Esto fue detallado hace ya muchos años por Michels (1958), quien sostiene que, con la excusa de reducir los divisionismos internos en los partidos, los líderes de ellos llegan a acuerdos a través de los cuales se reparten el poder, reduciendo las posibilidades de acceso por parte de otros actores partidarios (190-194). Mosca (1939) resumió esto en su ya famosa "ley de hierro de las oligarquías partidarias".

En teoría contemporánea, las tesis de Mosca (1939) y Michels (1958) sobre el comportamiento de las elites partidarias se han expandido hacia otros actores políticos. Así, por ejemplo, Mayhew (1974) y Arnold (1990) sostienen que el objetivo central de todo parlamentario, independiente de su ideología o fines políticos, es la mantención de su escaño. De este modo las consideraciones individualistas y muchas veces colectivas –generadas por históricos lazos de amistad o fidelidad–, determinan una tendencia hacia la autopropetuaación.

Estas elites políticas compiten entre sí para obtener el favor popular, tal como lo señala la teoría elitista clásica a la Wright Mills (1956). La lucha democrática no se refiere tanto a los grupos sociales que accederán al poder, sino más bien a la forma en que distintas elites han de distribuírselo. Cabe hacer notar, en este sentido, que en sistemas democráticos un grupo elitico, al ser electoralmente derrotado, puede ver reducida su participación en el poder, puede reducirse en número, pero, por lo común, no deja de ser parte de la elite política del país. Así, uno podría señalar que generalmente existe una elite política "en el gobierno" y otra en la "oposición", las que mantienen sus posiciones antagónicas hasta que son amenazadas como colectivo, ante lo cual tienden a unirse, en forma simbólica, en aras de preservar el "sistema político".¹

Con todo, a pesar de su enclaustramiento hacia el exterior, las elites políticas deben reproducirse; es decir, generar al menos el número de miembros necesarios para reemplazar a aquellos integrantes de la elite que, ya sea por consideraciones físicas (edad) o voluntariamente, deciden retirarse. Este proceso de reproducción no está exento

¹ Un ejemplo típico de acuerdo intraelite fue el caso de la denuncia respecto al consumo de drogas en el Congreso, ante la cual todos los parlamentarios reaccionaron corporativamente.

de problemas, pues “toda oligarquía está saturada de sospechas contra quienes aspiran a ingresar a sus filas, y los considera no sólo como herederos eventuales sino como sucesores que están prontos a reemplazarla sin esperar su muerte natural” (Michels 1958, 200).

El proceso de reproducción es un hecho natural, lleno de sospecha y resentimiento para los actuales integrantes de la elite, pero aun así, voluntario. Por lo anterior, no debe ser confundido con el reemplazo, es decir, con la desaparición de una elite política tras la irrupción de un nuevo y cohesionado grupo que asume sus funciones, el cual es un proceso social involuntario ante el que las elites se resisten con todas sus fuerzas.

Así, debe distinguirse claramente entre la reproducción y el reemplazo de las elites, procesos muy diferentes y que poseen sus propias reglas y mecanismos.

La reproducción funciona a base de la voluntariedad y el deseo de las elites de integrar a algunos actores externos a las labores de conducción. De manera que para que exista reproducción se debe contar con la confianza y protección de al menos parte de la elite existente. En este sentido, y partiendo del fundamento de la confianza necesaria, existen tres mecanismos diferentes que permiten la reproducción: el vasallaje, la herencia y el mérito.

(a) Por vasallaje entendemos la relación que se establece entre un miembro de la elite y un actor externo a ella, en la que se produce un intercambio de valores. Así, desde la elite se ofrece poder a cambio de lealtad. (b) La herencia tiene que ver en general con lazos familiares o al menos de amistad, a través de los cuales un actor externo es introducido, al cumplir cierta edad, al círculo de quienes toman las decisiones. (c) El mérito también funciona como un proceso de intercambio; en este caso, poder a cambio de condiciones técnicas e intelectuales de actores externos a la elite, que son requeridas por esta.

El reemplazo, por el contrario, es un proceso involuntario que requiere de cambios radicales en las condiciones políticas imperantes en el país para producirse. En lenguaje marxista hablaríamos de un “cambio favorable o desfavorable en la correlación de fuerzas”. Para que se produzca el reemplazo, la elite política existente debe: (a) sufrir una derrota contundente, ya sea electoral o militar, que reduzca la confianza de las masas en sus líderes, permitiendo el surgimiento de un grupo diferente que propone una solución a la crisis que afronta tanto la elite como su base de apoyo. Ejemplo de esto son las derrotas propinadas por Margaret Thatcher al laborismo británico o la misma derrota de la Unidad Popular provocada por el golpe militar. (b) Sufrir una

victoria amplia que requiera la incorporación masiva de nuevos actores, a fin de cubrir y cumplir adecuadamente con la administración del Estado.²

Cabe hacer notar, como ejemplo, que si bien la derrota final para la Concertación no se produjo, la mera suposición de un triunfo de la derecha en el año 2005 (la que entre el 2000 y el 2003 se veía inevitable) abrió espacios políticos insospechados para miembros alejados de la elite oficialista, los que se mantenían en una posición crítica hacia ella. Asumen entonces en las secretarías generales del Partido Socialista y Partidos por la Democracia individuos menores de 40 años, y en la Democracia Cristiana, la mesa partidaria se conforma mayoritariamente con *outsiders*. Este cuadro se modifica radicalmente con el mejoramiento de las expectativas electorales, lo que lleva a las elites partidarias a desear recobrar el control de los aparatos políticos que habían abandonado.

2. LA ELITE POLÍTICA CONCERTACIONISTA (1985-2002): DE LA DESCONFIANZA MUTUA AL PARTIDO TRANSVERSAL

Una historia completa de la Concertación y la manera en que se generaron y se mantienen sus elites daría para un libro completo. Por esta razón, me contento con anotar sólo unas pequeñas observaciones que sirven como telón de fondo para avanzar en las temáticas propias de este ensayo.

Con anterioridad al plebiscito de 1988, los partidos miembros de lo que hoy conocemos como Concertación de Partidos por la Democracia, estaban incorporados en dos conglomerados, ideológicamente irreconciliables entre sí: la Alianza Democrática (DC, PR, PS renovado) y el Movimiento Democrático Popular (PS Almeyda, PRSD, MAPU, IC, además del PC, el MIR y el FPMR).

Con todo, y tal como lo han descrito diversos autores (ver por ejemplo: Ortega 1992), ya a partir de fines de los años setenta se comienzan a producir procesos de acercamiento entre la DC y diversos

² Analizando la experiencia de Europa del este, Hankiss (1991) sostiene que, en el momento en que las elites se ven perdidas debido a que se cumplen las condiciones para su reemplazo, ellas buscan "transladar" su poder hacia otras esferas de influencia en la sociedad, por lo general hacia la economía, a través de la privatización de empresas del Estado. De esta forma, esta tesis serviría como un poderoso modo de explicar el proceso privatizador chileno y los grados de corrupción asociados a él.

sectores socialistas, en especial los que se comprometen más profundamente con el proceso de renovación: el grupo de los 24, la asamblea de la civilidad, y otros. Estos procesos llevan a articulaciones políticas y programáticas que hacían viable no sólo una alianza electoral sino también política e incluso, en cierta medida, ideológica.

Al momento de la recuperación democrática se produce la reunificación del socialismo y, con ello, la ampliación de la plataforma político-electoral del futuro gobierno. Sin embargo, la unificación del socialismo significó, al mismo tiempo y en buena medida, un retroceso en los grados de homogeneidad interna del nuevo oficialismo y, asimismo, un mayor grado de desconfianza política entre los diversos actores. Esta desconfianza y resentimiento fueron superados más bien por amistades personales existentes desde antes del golpe militar —como aquella entre Aylwin y Almeyda— o por la misión comúnmente aceptada de sacar al país del autoritarismo, que por debates político-ideológicos como los que se habían producido en los años previos entre la DC y el socialismo renovado.³

Así, cuando asume el gobierno, en la DC aún se discutía la viabilidad de incluir en este a sectores que, hasta hacía poco, formaban parte de un acuerdo político estratégico con el PC, y frente a cuyo compromiso democrático todavía existía un razonable grado de duda.

Ahora bien, es un hecho constante en la ciencia política que el ejercicio del poder y la necesidad de mantener altos grados de cohesión en dicho ejercicio, sumado en el caso chileno a la amenaza militar y a la constante presión política de la derecha, llevan a la reducción de las diferencias internas, así como a un creciente grado de complicidad entre todos aquellos con responsabilidades en el aparato estatal. Esto ocurre a pesar de que los acercamientos ideológicos formales —incluso a nivel intrapartidario (como en el caso del PS)— tardarían años en producirse.

Muchas veces, estas complicidades basadas en la administración del poder y en el razonamiento tecnocrático necesario para construir políticas públicas viables acordes con la realidad del país, comienzan a superar a las más difusas lealtades partidarias, ya sean ellas ideológicas o personales.

³ Es interesante destacar que, con anterioridad a la asunción presidencial de Aylwin, diversos intelectuales "concertacionistas" produjeron una importante cantidad de literatura política e ideológica, la que en años posteriores decae radicalmente, no recuperándose la producción crítica hasta fines de los años noventa.

Estas nuevas lealtades y complicidades empiezan a corto andar a cristalizarse cuasi institucionalmente, surgiendo un verdadero “partido transversal”, al que pertenecen los funcionarios de gobierno y los parlamentarios, los que se convierten en una elite concertacionista que se enfrenta a grupos partidarios que paulatinamente ven su poder reducido y que apelan constantemente a la identidad individual de los conglomerados y a la profundización de los procesos de transformación, lo que lleva a la elite concertacionista hacia posiciones de moderación y búsqueda del consenso.

De este modo, la disputa por la hegemonía política de la concertación comienza a hacerse cada vez más desigual: por un lado, aparece una elite transversal en el gobierno y con recursos políticos, y por otro, diversas elites partidarias, cuyo poder se reduce a las elecciones internas de los partidos y que tienen dificultades importantes para unirse a los descontentos de otros conglomerados. A partir de esta situación surgen disputas entre los funcionarios que han compartido responsabilidades gubernamentales o avalan las políticas implementadas por ellos (autocomplacientes) y quienes han estado al margen de estas decisiones (autoflagelantes), las que con mayor o menor agudeza se repiten hasta el día de hoy. Cabe hacer notar, en cualquier caso, que esta situación es bastante fluida, pudiendo moverse una persona de un grupo al otro con relativa facilidad.

En estas disputas, entre el “partido transversal” y los diversos grupos de descontentos, las nuevas generaciones concertacionistas no se han convertido en un actor relevante, optando mayoritariamente por sumarse, en la medida de lo posible y aprovechando los espacios que se les abren, vía reproducción élitica, a los bandos en conflicto.

Con todo, ello no implica que algunos actores políticos de menor edad hayan intentado constituir movimientos generacionales rupturistas (tales como la G 80 en la DC o la “generacional” en el PS), los que buscaban reemplazar a las elites existentes y que por lo general se identificaban con políticas más radicales y menos propicias a la generación de consensos o acuerdos. Estos movimientos, en buena medida, han terminado acomodados o reducidos dramáticamente en su poder.

Ahora bien, cabe hacer notar que los cambios generacionales en la distribución del poder han sido tan mínimos que al hablar de “nuevas generaciones” es perfectamente posible referirse a todos aquellos individuos menores de 45 años, entre los que por cierto existen diferencias políticas, sociales y culturales sustantivas. Así, no sólo existe una generación a la espera de su espacio en la conducción política del

país, sino dos, representadas por el grupo que participó en la recuperación democrática (en su mayoría dirigentes universitarios o secundarios de los ochenta) y la de aquellos que se incorporaron después al proceso político.

Tal como le ocurrió a la generación en la actualidad cercana a los 50 años, que vio sus aspiraciones de ascenso político frustradas por la llegada de la dictadura, la generación entre los 35 y 45 años tampoco aparece hoy con espacios: con una elite mayor que se niega a desmembrarse y grupos más jóvenes con códigos y tradiciones políticas diferentes, más livianas, menos ideológicas y posiblemente más individualistas, que presionan también por un espacio para realizarse políticamente.

Considerando todo lo antes dicho en este acápite, es posible sostener que históricamente la elite concertacionista y su evolución es asimilable a la descripción que hace Wasilewski (2001) de la transformación de las elites que participaron en los procesos de recuperación y construcción democrática en Europa del este. Para Wasilewski (2001) la elite durante el proceso de transición es un grupo hegemónico en el que prima la visión y la misión de construir un país diferente, luego se convierte en una elite de transformación (con el cambio tecnocrático del país), para terminar en una elite de acomodo, moderación e integración. Ello, sin que todos estos procesos hayan significado la transformación radical, en términos de personas, de los grupos dominantes.

3. LA REPRODUCCIÓN DE LA ELITE POLÍTICA CONCERTACIONISTA: MÁS VALE DIABLO CONOCIDO QUE JOVEN AMBICIOSO POR CONOCER

Ya se ha señalado en las páginas previas que el objetivo central de toda elite política es su autopropetuuación en el tiempo. Para ello, la elite bloquea su reemplazo masivo y genera condiciones para su propia reproducción, al menos, a niveles que permitan la mantención numérica necesaria para su funcionamiento. Así, la elite obstruye el paso de quienes se plantean como su posible competencia, al tiempo que abre espacios para que algunos miembros de las nuevas generaciones se incorporen a ella.

Estableciendo como una hipótesis de trabajo a priori (confirmable con la simple observación de la realidad o la descripción biográfica de quienes han ocupado los principales cargos de la administración) que no ha existido reemplazo mayor en la elite concertacionista (ni en ninguno de los partidos que componen dicha alianza política), las preguntas que cabe hacerse entonces son: ¿cómo ha seleccionado

la elite de la concertación a aquellos que han de incorporarse a las labores de conducción?, ¿qué característica comparten aquellos que han accedido a posiciones de poder en los últimos años?, es decir, ¿cómo se ha reproducido el oficialismo?

a. El vasallaje como condición central

Una primera y obvia respuesta a esta pregunta es que aquellos que son reclutados por la elite tienden a adquirir un compromiso a no buscar el reemplazo absoluto de esta, estableciendo relaciones de vasallaje o clientelismo con quienes los introducen en los círculos del poder y, al tiempo, abandonando a quienes generacional o políticamente les son más cercanos.

Así, no es infrecuente ver que cargos públicos de director de servicio, subsecretario e incluso ministro, son ocupados por individuos que han sido secretarios de parlamentarios, jefes de gabinete, y otros cargos.

Cabe hacer notar que esta forma de reproducción de la elite no es nueva ni infrecuente en nuestro país, sino más bien una continuidad en la tradición política aparecida tras la irrupción de los partidos de masas hacia mediados del siglo veinte. Más aún, parece ser, tal como confirman los escritos de Mosca y Michels, la forma básica de reproducción de las elites partidarias en los movimientos de masas europeos. Con todo, se debe sostener que la existencia de un sistema electoral proporcional permitía que estos nuevos miembros de la elite lograran independizarse con mayor facilidad de sus patrones al obtener legitimidad popular a través de elecciones. De ese modo, el diputado que era electo, aunque fuera "chorreado" en la lista, tenía cuatro años en la Cámara para legitimar su trabajo y consolidar su posición política en la elección siguiente.

Entendiendo el carácter cuasi estructural del fenómeno del vasallaje es teóricamente complejo y sería injusto atribuir un carácter planificado o "maquiavélico" a este tipo de reclutamiento por parte de la elite. Simplemente, aquellos que aparecen como subordinados, en primer lugar, se hacen conocidos y, en segundo, generan las confianzas necesarias como para acceder a mayores grados de responsabilidad.

Por el contrario, quienes se plantean desde una posición crítica a la elite y, más aun, se organizan para reemplazarla, difícilmente serán aceptados: simplemente porque ellos no son conocidos ni respetados por los grupos en el poder.

b. La herencia

Éticamente más discutible que el proceso anterior es el traspaso de poder que se produce entre parientes o entre amigos cercanos, los que se convierten en herederos naturales de aquellos miembros de la elite que desean retirarse. El proceso de herencia es similar al anteriormente descrito, pero en vez de reclutar miembros externos, se reclutan individuos familiarmente cercanos a la elite.

Este traspaso de poder hacia familiares o personas de la máxima confianza permite establecer redes que, en buena medida, acrecientan el poder de la familia o grupo que incorpora a nuevos miembros, por lo que la incorporación se convierte en un intercambio de beneficio mutuo. Así, no es raro observar a parlamentarios cuyos parientes son alcaldes o concejales en los distritos que representan o ministros que colocan a sus cercanos en posiciones de poder en el aparato estatal.

Este tipo de reclutamiento aparece alejado de los ideales racionales de la modernidad burguesa, los que son actualmente hegemónicos en el conjunto del mundo occidental, por lo que este tipo de reproducción es, por lo general, "mal visto" por la ciudadanía, en especial por los grupos más educados y políticamente conscientes. Este descrédito de las tradiciones y de los derechos hereditarios tendería, entonces, a reducir las posibilidades de éxito político de los vasallos-herederos.

Sin embargo, la elite continúa utilizando este mecanismo de reproducción, y con bastante buenos resultados, lo que aparece como una paradoja de la ciencia política. Por un lado, culturalmente a la sociedad le desagrada la idea de la reproducción hereditaria de la elite; por otro, elige democráticamente a los herederos.

La respuesta a esta paradoja, para el caso de nuestro país al menos, se encuentra tanto en las condiciones culturales de las sociedades latinoamericanas como en las características propias de la política posmoderna: una política no ideológica, con bajo nivel de disciplina y control por parte de los partidos, altamente profesional y en la que el dinero juega un rol central.

De esta manera, si bien los hijos de la elite son difíciles de elegir por parte de los grupos educados, aún poseen la lealtad incorruptible de sectores populares desposeídos, quienes preservan una identidad política premoderna, basada en el clientelismo y la presencia personal del líder. Por otra parte, el handicap negativo con el que parten al enfrentarse a políticamente "sofisticados" es compensado con creces con la posesión de dos recursos políticos centrales en la actualidad: (a) *know how* profesional, es decir, la educación adecuada tanto

formal como informal para afrontar el mundo político; y (b) la posesión del dinero necesario, ya sea que este provenga de la propia familia o de redes financieras construidas por ella, para hacer de la política —una actividad altamente inestable y hasta un cierto nivel poco rentable— una profesión permanente.

c. *El mérito*

La meritocracia aparece como el epítome de los logros y transformaciones de la modernidad racional y es por ello alabada por los teóricos democráticos y esgrimida frecuentemente por los políticos que son producto directo o indirecto de ella. Así, las referencias al liceo fiscal y la universidad gratuita son casi obligatorias para aquellos políticos que vienen de ese mundo de clase media lejano al poder y a las relaciones sociales y familiares que de él se desprenden.

No obstante, es una pregunta abierta determinar si esta meritocracia ha aumentado o retrocedido en la política chilena posrecuperación democrática, en comparación a la política ideológica anterior al golpe militar. Mientras la lógica cultural de la sociedad y los avances hacia la reducción de las discriminaciones nos dicen que la meritocracia debiese tender a aumentar, la observación de la realidad nos muestra que ella, de hecho, parece haber retrocedido.

Este aparente retroceso de la meritocracia tiene que ver, desde mi perspectiva, con dos fenómenos paralelos: (a) los mayores grados de desigualdad económica y la ventaja que poseen aquellos que están relacionados con la elite (herencia) o son tributarios de ella (vasallos) en la posesión de los factores clave en la política actual: dinero y *know how*, tal como ya se describió en el acápite anterior; (b) la separación cada vez más radical entre burocracia política y tecnocracia; en palabras de Weber, entre el político y el científico. Este segundo punto merece una explicación de mayor envergadura.

La política anterior a la dictadura militar era ciertamente más simple. Chile era un país pequeño, con una aristocracia cohesionada y con altos niveles de ideologización de la sociedad. En este contexto, el manejo del país revestía de menores grados de complejidad que los requeridos en el Chile actual: no era necesario ser doctor en economía para ser ministro de Hacienda (¿se requerirá realmente hoy?).

Así, los políticos, muchas veces abogados, otras sin siquiera una profesión universitaria, podían saltar de un cargo público a otro y de allí al Parlamento, y viceversa, sin mayor dificultad. Sólo bastaba una buena “muñeca” y una máquina partidaria que se mantuviera

apoyándolos. Esta movilidad extrema aparece impensable en la política de hoy en día, en la que priman altos grados de especialización.

La elite actual de la Concertación, en su mayoría formada políticamente con anterioridad al golpe militar, es aún "generalista", con una concepción del mundo formada a partir de la política y la ideología. Por el contrario, las nuevas generaciones, en especial aquellas que no participaron en la recuperación democrática, aparecen como "tecnocráticas", con una conciencia ideológica, pero fundamentalmente técnica. De tal modo, su aproximación al fenómeno y a la lucha y el ejercicio del poder es ciertamente diferente al de las generaciones que les anteceden. Utilizando libremente las teorías gramscianas podríamos contraponer así al "intelectual orgánico" –prototipo del político tradicional, cuya racionalidad y capacidad técnica están al servicio de la política y la ideología– del intelectual tecnocrático –para el cual es la racionalidad técnica la orientadora de su actuar.

Al considerar esta distinción básica es más fácil entender la relación entre la elite y las nuevas generaciones: la elite abre a los más jóvenes los espacios que técnicamente es incapaz de ocupar (comisiones técnicas de los partidos, centros de estudio, posiciones de alta especialización en ministerios, etc.), reservándose los espacios en que aún prima la racionalidad política, que tienden a coincidir con los espacios en los cuales se toman las decisiones centrales para el país. Cabe hacer notar que, por la propia dificultad para entender los temas técnicamente más complejos, los grupos élíticos tienden a desconfiar de estos jóvenes tecnócratas, aunque los necesitan y requieren de la reproducción de ellos, hasta el momento no se han comprometido con planes partidarios serios para aumentar la cantidad y calidad de dichos cuadros técnicos. Los profesionales ultracalificados que ocupan cargos técnicos lo son más por iniciativa personal (becas y créditos) que por una planificación a largo plazo por parte de la elite concertacionista. Así, ellos sienten que no le deben nada ni a la elite ni al partido, por lo que su compromiso y voluntad de sacrificio aparecen más débiles, generando la desaparición del intelectual orgánico al que Gramsci aspiraba.

Ahora bien, cuando estos nuevos "tecnócratas" quieren moverse a otras posiciones políticas de mayor relevancia se encuentran con dos problemas: (a) la elite les retira su apoyo y beneplácito, y (b) no poseen las habilidades necesarias para entrar en el mundo duro y competitivo de la lucha por el poder. Así, la mayoría de estos individuos termina manteniéndose en sus posiciones técnicas o decepcionándose de la política y los políticos.

Todo lo anteriormente descrito me lleva a concluir que los méritos técnicos (meritocracia) representan una forma de acceso a las posiciones élíticas que requieren de mayor especialización tecnocrática, pero a la vez, y debido a la sobreespecialización de quienes ocupan estos cargos y a la desconfianza de los políticos tradicionales, representan el obstáculo más complejo para alcanzar posiciones que precisan de las habilidades y recursos propios del mundo político.

5. ¿ES POSIBLE EL REEMPLAZO DE LA ELITE CONCERTACIONISTA?

Al aplicar la teoría de formación y reproducción de las élites al caso chileno es posible concluir que las posibilidades estructurales de reemplazar la actual dirigencia concertacionista no están dadas: no se está al borde de una gran derrota ni tampoco *ad portas* de una victoria electoral de una magnitud suficiente que permita ampliar numéricamente los cuadros dirigentes de la Concertación.⁴

En este contexto, la resistencia al cambio o al reemplazo de la elite por parte de los grupos dominantes será enorme, aun cuando en el liderazgo político —o al menos en un sector de este—, exista una voluntad real de, tal como lo sostuvo Michelle Bachelet, entregar el poder a “nuevos rostros”, más diversos, y que representen de mejor forma la realidad del país.

Esta resistencia estará dada por el conocimiento acabado o *know how* que la elite tiene del aparato público, el control de las redes de financiamiento y el relativamente incuestionado dominio de ella sobre los aparatos partidarios.

Sin embargo, se puede argumentar que las conclusiones teóricas provenientes del mundo de la política —que desestiman la posibilidad de cambios al interior de la elite—, son meramente estructurales y no hacen referencia a condiciones relacionadas al desarrollo de la socie-

⁴ Se podría argumentar que las recientes revelaciones sobre el régimen militar implican la derrota definitiva de la elite derechista ligada al pinochetismo. Ciertamente, al interior de la Alianza esta es una derrota ideológica y moral, lo que en dicho conglomerado abre las posibilidades para un cambio en la elite dirigente, tal como lo muestra la candidatura de Piñera y la irrupción de una nueva generación política tanto en RN como en la UDI. Con todo, el triunfo de la Concertación, al no ser electoralmente total, no supone la apertura de nuevos espacios políticos, sino la consolidación ética y política de los arquitectos de la transición.

dad, el surgimiento de nuevos liderazgos o nuevas formas de hacer política. La teoría parece estar explicando las variaciones en la política simplemente con otras variables políticas (derrotas o triunfos electorales), sin mirar las sociedades en las que aquellos cambios se producen. Más aun, esta teoría parece incluso demasiado amarrada a situaciones estructurales que minimizan la voluntad política y la acción e influencia de los distintos actores que conforman los sistemas políticos nacionales.

En este contexto, y aun teniendo en consideración las prevenciones y las tendencias al inmovilismo y la mantención del statu quo que provoca la estabilidad electoral, es posible sostener que existe algún margen para pensar que un reemplazo, al menos parcial, en la elite política de la concertación, es viable.

a. Las transformaciones de la sociedad chilena

Diversos autores, desde Tironi (1999; 2002) hasta Moulian (1997; 1998), coinciden en afirmar que la sociedad chilena se ha transformado social y culturalmente de manera radical en la última década. Nos encontraríamos frente a una sociedad más individualista y en la cual el consumo adquiere una importancia simbólica y cultural de primer nivel. Asimismo, las transformaciones en las tecnologías de la información y la comunicación, tal como la importancia central de los media y de la cultura audiovisual en general, modifican principalmente los modos de hacer política y los códigos a través de los cuales se comunica y socializa. La cultura política de la oralidad, basada en el discurso ideologizado y la presencia física, da paso a una política audiovisual desideologizada, trivial, y en que la apariencia y la forma adquieren radical importancia.

Estos cambios sociales no han sido acompañados por cambios paralelos en el mundo de la política ni en las elites culturales que sustentan el sistema; y si bien no han provocado una alteración en la correlación de fuerzas en el país, ciertamente han influido en que el compromiso y la participación política de vastos sectores ciudadanos se reduzca: los jóvenes dejan de inscribirse en los registros electorales y los porcentajes de abstención y votos blancos y nulos aumentan sustantivamente.

Los políticos tradicionales, la elite concertacionista, hasta ahora se las ha ingeniado para ser reelecta. Sin embargo, ya en las últimas elecciones (probablemente a partir de 1999), en los lugares en que se han enfrentado políticos tradicionales con políticos "de nueva generación" en muchas oportunidades los vencedores han sido estos

últimos,⁵ y no debe descartarse que esta tendencia se agudice en las elecciones que están por venir.

Estos cambios, y las tendencias electorales que ellos acarrearán, traerán en algún momento un importante debate al interior de los grandes conglomerados políticos del país: si se quiere seguir manteniendo o aumentando el caudal electoral y, por ende, las mismas cuotas de poder, será necesario adecuar a los candidatos a las nuevas visiones y nuevas temáticas que comienzan a ser relevantes para la sociedad chilena.⁶

b. El deseo de un liderazgo de un nuevo tipo

Todos estos cambios socioculturales redundan en que la sociedad chilena esté ávida de liderazgos de nuevo tipo y de transformaciones en la forma en que se practica la política y se ejerce el poder. Ello es lo que en 1999 significó Joaquín Lavín y, en buena medida, lo que hoy significa Michelle Bachelet.

Estos liderazgos de nuevo tipo no son comprendidos a cabalidad por la elite política gobernante y, en ese contexto, atribuyen su éxito simplemente a una suerte de “irracionalidad de las masas”. Asimismo, la diferencia existente entre los códigos de acción y comunicación de estos liderazgos y los de la elite tradicional hacen que los sectores dominantes tiendan a desconfiar e incluso a minimizar las capacidades de estos nuevos actores políticos. Mientras estos liderazgos generan adhesión de los ciudadanos comunes y la base militante de los partidos, ellos son en muchos casos ridiculizados por el *establishment*.

Sólo esta avidez por liderazgos de nuevo tipo permite explicar por qué, a pesar del alto grado de éxito y popularidad del Presidente Lagos, ninguno de los candidatos a sucederlo pertenezca a la tradi-

⁵ Muchos ejemplos de esta tendencia se producen en las elecciones del año 2004, en las que no sólo son electos varios alcaldes jóvenes, mediáticos y con propuestas novedosas, auspiciados por los partidos de la Concertación, sino además resultan electos candidatos independientes –ex concertacionistas– que, con frecuencia, se enfrentan a las maquinarias partidarias de sus localidades.

⁶ Esta conclusión ha sido refutada por varios politólogos y actores concertacionistas, quienes sostienen que, dado que los jóvenes cada vez representan un menor porcentaje del electorado (pues han dejado de inscribirse), los políticos tradicionales y sus viejas formas y discursos tienen asegurada su mantención. Con todo, este argumento no considera que los cambios que han sacudido a la sociedad chilena han afectado no sólo a los jóvenes, sino al conjunto de la sociedad.

ción política discursiva, racional y autoritaria a la que él y la mayoría de la elite política de la Concertación pertenecen.

Ahora bien, es importante reconocer que no todos los *outsiders* del sistema representan liderazgos de nuevo tipo y que, incluso, muchos de ellos son más bien la reaparición de caudillismos populistas locales de carácter más bien premoderno. Podríamos argumentar que la hegemonía de la elite concertacionista, formada en el diálogo discursivo y, en muchos casos, en el exilio europeo, se encuentra siendo disputada desde dos polos opuestos: los liderazgos de nuevo tipo, mediáticos y que apelan a los nuevos temas y la emotividad de la ciudadanía —el liderazgo posmoderno—, y el caudillismo populista local premoderno que, por lo general, controla los aparatos políticos locales y que es el soporte imprescindible de la elite.

6. EL FUTURO DE LA CONCERTACIÓN

La sociedad actual se diferencia mucho de la elite concertacionista y, por suerte, también de la elite de la Alianza por Chile. Así, si ambos conglomerados aspiran a seguir manteniendo sus actuales posiciones de privilegio y evitar el deterioro del conjunto del sistema democrático —el que de continuar decayendo la cifra de inscritos en los registros electorales será inevitable— deberán aceptar un reemplazo al menos parcial de sus elites y modificar el sistema electoral para permitir que un porcentaje más grande de las visiones existentes en la ciudadanía se encuentren políticamente representadas.

Ahora bien, aunque justificar teórica y prácticamente la necesidad de reemplazo de la elite es relativamente simple, una vez que se intenta predecir qué tipo de elite tendremos en el futuro y qué grado de éxito tendrá ella, el tema se complica en forma radical. Tal como la mayoría de las decisiones que enfrentan las sociedades contemporáneas, el reemplazo de las elites está sumido en la incertidumbre y el riesgo (Beck, 1992). Sabemos que el cambio es necesario, pero no sabemos con certeza cuán positivo será, y ni siquiera podemos tener certeza de que este cambio logrará preservar un conglomerado exitoso como lo ha sido la Concertación en el mediano plazo.

Es cierto, es posible predecir que, de producirse un reemplazo, la nueva elite concertacionista tenderá a ser más joven, más diversa en términos de género, identidad sexual y preferencias políticas, aunque no necesariamente más diversa en términos de clase social de origen; sin embargo, es difícil pronosticar el tipo de discursos o la ideología política que ella sustentará.

Tal como ya señalé, las nuevas generaciones políticas son culturalmente más individualistas y personalmente más diversas. Si a ello le sumamos la inexistencia de una épica de lucha común (misión/visión) –un proyecto revolucionario, la lucha contra la dictadura, etcétera–, y de una ideología normativa y totalizante, como el marxismo o el comunitarismo, se configura un cuadro de una mayor atomización del discurso político, incluso al interior de cada partido de la Concertación.

En este contexto, no podemos descartar que la nueva elite de la Concertación adopte una posición pragmática y de rechazo a cualquier metarrelato, y que en su accionar prime el formalismo de aquellos que sólo entienden la política como uno más entre varios posibles juegos de lenguaje (Lyotard 1984). El consenso será el sistema democrático, la tolerancia y el respeto; el contenido de dicha democracia será materia de un juego de lenguaje con elecciones, candidatos, campañas, globos y serpentinatas.

Si se quiere rescatar un cierto proyecto político propio de la racionalidad moderna, como lo es la Concertación, e intentar generar una nueva elite social que posea los grados de cohesión necesarios y suficientes como para sostener una cierta hegemonía social, en el sentido gramsciano del término, se deberán alterar pautas culturales y de comportamiento que ya se encuentran ampliamente asentadas en las nuevas generaciones de políticos. Dicha alteración, que estructuralmente no permite un retorno a los metarrelatos, sólo será posible a través de la conformación de un nuevo discurso colectivo que contenga al mismo tiempo elementos racionales de corte programático y otros, como una misión, una épica, una historia e incluso una estética común.

REFERENCIAS

- Arnold, D. *The Logic of Congressional Action*. New Haven: Yale University Press, 1990.
- Beck, U. *Risk Society: Towards a New Modernity*. London: Sage, 1992.
- Gramsci, A. *Letters from Prison*. New York: Columbia University Press, 1994.
- Hankiss, E. "Reforms and the Conversion of Power." *Upheaval against the Plan: Eastern Europe on the Eve of the Storm*. Eds. P. Weilemann et al. Oxford: Berg, 1991.
- Lyotard, F. *The Postmodern Condition: a Report on Knowledge*. Manchester: Manchester University Press, 1984.
- Mayhew, D. *Congress: The Electoral Connection*. New Haven: Yale University Press, 1974.

- Michels, R. *Political Parties; a Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*. Illinois: Free Press, 1958.
- Mosca, G. *The Ruling Class*. New York: McGraw Hill, 1939.
- Moulian, T. *Chile actual. Anatomía de un mito*. Santiago: Lom, 1997.
- _____. *El consumo me consume*. Santiago: Lom, 1998.
- Ortega, E. *Historia de una alianza*. Santiago: Cesoc, 1992.
- Tironi, E. *La irrupción de las masas y el malestar de las elites*. Santiago: Grijalbo, 1999.
- _____. *El cambio está aquí*. Santiago: La Tercera-Mondadori, 2002.
- Wright Mills, C. *The Power Elite*. New York: Oxford University Press, 1956.
- Wasilewski, J. "Three Elites of the Central-East European Democratization." *Transformative Paths in Central and Eastern Europe*. Eds. R. Markowski, E. Wnuk-Lipinski. Warsaw: Ebert Foundation & Institute of Political Studies, 2001.

ERNESTO ÁGUILA

Profesor de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, del Centro de Estudios Pedagógicos y del Centro de Ética Aplicada (CEDEA), de la misma casa de estudios. Es doctor en educación de la Universidad de Barcelona y psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hasta el año 2004 se desempeñó como subdirector de la División de Educación General del Ministerio de Educación, y actualmente es asesor del Mineduc. Es miembro del directorio del Instituto Igualdad e investigador del Centro Avance. Entre sus últimas publicaciones destaca el libro *Lenguaje, experiencia y aprendizaje moral* (Madrid: Octaedro, 2004), y los artículos publicados en la revista *Perspectivas Éticas*, de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile: "Educar en valores en sociedades y escuelas pluralistas" e "Informe Valech: ética y pedagogía de la memoria".

SISTEMA POLÍTICO, CIRCUITO EXTRAINSTITUCIONAL DEL PODER Y EL DESPERTAR DE LA CIUDADANÍA

ERNESTO ÁGUILA

El presente texto se propone analizar el fenómeno del creciente distanciamiento entre el sistema político, las elites y el proceso de toma de decisiones, por un lado, y lo que describiremos como un despertar y renacer de la ciudadanía, por otro.

En primer término, se llama la atención sobre el grado de bloqueo que el sistema político y electoral construye sobre la participación y expresión ciudadanas, imposibilitando con ello la configuración de mayorías claras, y la representación de nuevos actores y dinámicas sociales. Lo anterior tiene como consecuencia una falta de renovación y rotación de las elites, lo que genera dificultades estructurales para representar lo nuevo, y crecientes niveles de distanciamiento y desconfianza de la ciudadanía con lo político sistémico.

En segundo lugar, se destaca el grado de opacidad que tiene el proceso de toma de decisiones en Chile y la consolidación de un complejo engranaje de poder de carácter extrainstitucional, que genera, a su vez, un creciente descrédito y escepticismo en la ciudadanía, y que resulta disfuncional en una sociedad en proceso de modernización con personas dueñas de un mayor nivel educacional, informadas y reflexivas.

Este grado de bloqueo y ensimismamiento del sistema político en sus dimensiones de representación, participación y como ejercicio de gobierno, contrasta, a su vez, con un creciente despertar de un sentido de ciudadanía en la sociedad chilena, y con personas que empiezan a querer conversar y participar del "poder", para expresarlo en términos del último informe del PNUD.

Nuestra conclusión es que lo anterior se traduce en un desacoplamiento entre lo sistémico y las dinámicas sociales, que va conduciendo a un proceso creciente de pérdida de funcionalidad del sistema político para dar efectivo cauce a las subjetividades y nuevas dinámicas sociales que se van produciendo en la sociedad chilena. Ello puede conducir a una pérdida de legitimidad del sistema político —como

exponen diversos estudios de opinión-, y a la búsqueda de nuevas formas de expresión y de representación de lo social en la esfera de la política. El desarrollo de liderazgos –como Bachelet hoy en día y de Lavín en su momento– que irrumpen desde lo mediático y desde ese nuevo “soberano” que son las encuestas de opinión, dan cuenta de este malestar y de la construcción de canales alternativos, distintos a las formas políticas tradicionales, a través de los cuales se van construyendo y generando los liderazgos políticos.

Por último, este trabajo propone algunas medidas y acciones concretas que debieran emprenderse para salir de la actual contradicción entre un sistema político oligarquizado, y la creciente demanda por reconocimiento y ciudadanía.

PETRIFICACIÓN Y BLOQUEO DEL SISTEMA POLÍTICO-ELECTORAL

Un primer aspecto que está a la base de este creciente desacoplamiento entre el sistema político y el despertar de la conciencia ciudadana, nace de la arquitectura del actual sistema institucional. En efecto, y aun cuando se han eliminado la mayor parte de los llamados enclaves autoritarios de la actual Constitución Política¹ –que condicionaban en gran medida la libre expresión y el poder de la soberanía popular– el problema de la participación, representación y renovación de las elites y de la funcionalidad de la institucionalidad política, seguirá pendiente mientras no se aborde la reforma del sistema electoral binominal.

Las dificultades que emanan del sistema binominal para una adecuada representación y canalización de lo social por medio de la institucionalidad política, pueden sintetizarse, a lo menos, en los siguientes cuatro aspectos:

- a) Por un lado, la dificultad para que la mayoría ciudadana se exprese con claridad, debido a la sobrerrepresentación de la minoría que el sistema genera, y con ello la sensación de permanente empate político, que redundando en una suerte de cogobierno entre el oficialismo y la oposición. Lo anterior estrecha el horizonte de cambio que una mayoría política puede plantearse, lo que se

¹ Las reformas constitucionales aprobadas el pasado 13 de julio de 2005 constituyen, en gran medida, el término de los principales vestigios autoritarios presentes en la Constitución Política, el definitivo “cierre de la transición”, según algunos. Sin embargo, la mantención del sistema binominal es profundamente erosionante para la legitimidad de la institucionalidad democrática del país.

refleja en un debate programático plano o en propuestas de diferenciación meramente simbólicas, pero inviables en términos de mayorías parlamentarias. Todo esto conduce a una percepción ciudadana de que no existe mayor espacio para el cambio bajo el actual esquema político-institucional.

- b) En segundo término, un sistema electoral que sólo permite la representación de las dos fuerzas políticas mayoritarias, impidiendo con ello que fuerzas minoritarias accedan a la representación legislativa. La ausencia prolongada y sin horizonte de acceso a cuotas mínimas de poder político, conduce a un desgaste de estas alternativas, y a su marginalización y desaparición. De ello no sólo es expresión el PC, cuya declinación no puede ser atribuida únicamente al sistema electoral binominal, sino que es más expresivo en el caso de otros movimientos que han surgido en su momento, pero que debido al sistema electoral no lograron sostenerse en el tiempo y que, mirados con objetividad y desapasionamiento, tenían un mayor potencial de desarrollo que la efímera existencia que alcanzaron (por ejemplo, el movimiento que encabezara la candidatura presidencial de Manfred Max-Neef o diversas alternativas "verdes").
- c) La tercera consecuencia es la mantención del actual esquema de dos grandes coaliciones políticas (la Concertación y la Alianza). Ello puede ser leído como una virtud, en la medida en que daría estabilidad al sistema político; sin embargo, congela el despliegue de las contradicciones que cada una de estas grandes coaliciones tiene en su interior, y que de poder desarrollarse otorgarían un nuevo dinamismo al sistema político. En efecto, tanto las contradicciones al interior de la derecha entre su ala más liberal y sus sectores conservadores, como en la Concertación entre sus corrientes socialcristianas y socialdemócratas, encierran una gran cantidad de temáticas que tarde o temprano emergerán como parte del proceso de modernización que vive Chile, y que hoy se encuentran constreñidas por las restricciones a la competencia que impone el binominalismo. Dicha situación se hará cada vez menos sustentable hacia el futuro.

Este sistema de coaliciones pudo ser necesario en la etapa de transición y consolidación democrática, pero en un escenario postransición y más normalizado, resulta disfuncional, dada la naturaleza de los temas que se irán instalando en la agenda en el próximo ciclo histórico-político.

- d) Por último, comienza a ser altamente nocivo para la representación ciudadana y la legitimidad del sistema político, el uso y abuso que los partidos políticos –unos más que otros– comienzan a hacer, de manera cada vez más frecuente y desenfadada, de la falta de competitividad del binominalismo. En efecto, se ha instalado una nueva forma de “parlamentario designado”, el cual se construye a través de negociaciones entre los partidos, donde se ponen en juego “compensaciones” y “blindajes” que significan ir reduciendo cada vez más el espacio de decisión de los ciudadanos. El intento de ciertos partidos de frenar su declinación electoral, maximizando sus posibilidades a través de la negociación de cupos parlamentarios “protegidos” en desmedro de la competencia democrática, conduce indefectiblemente a una mayor deslegitimación y escepticismo ciudadano sobre la actividad política.

LA ELITE CHILENA: ENSIMISMADA Y ENDOGÁMICA

El tema de la falta de representación del sistema político, del bloqueo de nuevas dinámicas sociales y de las dificultades para una rotación y renovación de las elites, no sólo es un fenómeno que se circunscribe a la esfera propiamente política, sino que es una realidad que se extiende hacia el conjunto del sistema de poder en Chile.

En efecto, recientes estudios vienen a demostrar hasta qué punto la elite en nuestro país –entendida de manera amplia como el grupo dirigente que detenta el poder en distintas esferas de la sociedad– tiene una escasa rotación y constituye un grupo cerrado que se reproduce por vínculos sociales y familiares que resultan impenetrables para quienes están fuera de dichos espacios y códigos.

El reciente informe del PNUD, *El poder: ¿para qué y para quién?*,² permite adentrarse más en este tema. Algunos datos al respecto que conviene consignar y retener son los siguientes:

- Se constata que el 65% de la elite en Chile tiene un padre de origen socioeconómico alto y sólo un 3% proviene del grupo socioeconómico bajo.³

² PNUD, *Desarrollo humano en Chile. El poder: ¿para qué y para quién?* (Santiago: PNUD, 2004).

³ Según lo hace ver el propio informe del PNUD, esto contrasta con otros países, como Alemania, donde el 35% de quienes forman parte de la elite provienen de un padre de origen socioeconómico bajo.

- Un 65% de los hijos de la elite encuestados en el informe del PNUD estudian hoy en colegios privados (lo que contrasta con la situación del 39% de sus padres y del 16% de sus abuelos). Este dato es especialmente relevante, en términos de que hacia el futuro se hará aun más difícil la incorporación a la elite de sectores socioeconómicos bajos, por las barreras económicas que impiden acceder a una educación particular pagada. Asimismo, desaparecerá una educación pública de calidad, gratuita o de bajo costo, a través de la cual pudieran incorporarse a la elite los sectores socioeconómicos bajos y medios.
- Otro dato interesante (y preocupante) es la autopercepción de superioridad que tiene de sí la elite: cerca de un 80% de sus integrantes está “muy de acuerdo” o “de acuerdo” en que ellos son personas que tienen “gustos más cultivados y refinados que el común de las personas”. Ello plantea otra barrera de acceso para quienes no comparten estos códigos de “distinción”.

Lo anterior refleja que el bloqueo para el ciudadano común en su acceso al poder en alguna de sus formas es un tema mucho más amplio, que incluye el sistema político, pero también que se proyecta al conjunto de las esferas económicas, sociales y culturales. Esto acentúa la creciente distancia entre una elite que se mira a sí misma con complacencia y autosuficiencia, y una ciudadanía mayoritaria que observa y va internalizando el aprendizaje de que su acceso a esos espacios no es factible.

En términos sociológicos, este fenómeno de endogamia de la elite en Chile va a comenzar a enfrentarse con la emergencia de nuevas capas medias que hoy están surgiendo al amparo de la expansión del sistema de educación postsecundaria (y que en los próximos años continuará de manera creciente),⁴ lo cual va a ir generando nuevos grupos sociales con aspiraciones de liderazgo y de participación en el poder. La elite irá usando entonces sus tradicionales métodos de exclusión y cooptación, pero puede verse sobrepasada por la masividad del fenómeno.

⁴ Hoy, siete de cada diez jóvenes que siguen una carrera en la educación superior, en alguna de sus modalidades, constituye la primera generación dentro de sus familias.

LA OPACIDAD DEL PODER EN CHILE: UN SISTEMA
DE TOMA DE DECISIONES INVISIBLE AL CIUDADANO

Un hecho que es propio de las sociedades contemporáneas, pero que en Chile se encuentra exacerbado, dice relación con el grado de opacidad y “secretismo” con que discurren, a los ojos del ciudadano, trascendentes decisiones de índole política, económica, social y cultural. En las sociedades modernas, y Chile es paradigmático en ese sentido, se constituyen redes informales o circuitos extrainstitucionales en los cuales se toman decisiones relevantes, y que no están bajo la mirada ni la capacidad de decisión de los ciudadanos y muchas veces ni siquiera de sus representantes.⁵

En el lenguaje popular se designa este tema como “los poderes fácticos”, pero en realidad se trata de un asunto mucho más amplio y estructural, que resulta relevante de abordar en este trabajo, dado el significado que tiene para lo que hemos venido identificando como este hiato entre la ciudadanía, por un lado, y el sistema político, las elites y la forma como se toman las decisiones, por otro.

El tema es vasto, pero quisiéramos llamar la atención, brevemente, sobre ciertos aspectos y fenómenos, que en parte explican la creación de estos circuitos extrainstitucionales de poder y de toma de decisiones.

- a. Debilitamiento del rol del Estado y privatización de diversos asuntos de índole pública: la disminución de la influencia del Estado y el traspaso hacia el ámbito privado de diversas esferas de interés público –servicios básicos, previsión, salud, educación, entre otros–, han dejado fuera de los espacios institucionales generados democráticamente materias de gran importancia para las personas.
- b. Creciente complejización de las decisiones de gobierno y nuevo poder de la tecnoburocracia: las tareas de gobierno tienen una objetiva dificultad y los “lenguajes expertos” se instalan en diversas esferas que son de interés ciudadano; sin embargo, los ciudadanos no logran acceder a ellas (ni tampoco muchas veces los políticos). Esto ha redundado en un creciente poder de la tecnoburocracia estatal, la cual ha ampliado su ámbito de decisión e injerencia.

⁵ El tema de la conformación de circuitos extrainstitucionales del poder y la opacidad del sistema de decisiones relevantes en Chile ha sido abordado extensamente por Antonio Cortés Terzi en su libro *El circuito extrainstitucional del poder* (Santiago: América-Cesoc, 2000).

- c. Globalización y transferencias de poder de lo nacional hacia estructuras supranacionales: el fenómeno de globalización ha significado el traspaso de importantes ámbitos de decisión hacia los países hegemónicos y a los organismos internacionales, frente a los cuales no sólo los ciudadanos sino los Estados nacionales se ven, muchas veces, excluidos de decisiones que los atañen. No son pocas las resoluciones relevantes de consecuencias domésticas que se toman o se condicionan hoy en día desde el FMI, el BM o la OMC.
- d. Articulación del poder económico con la política, los medios de comunicación y el conocimiento: en Chile existe una articulación excesiva entre los grandes poderes económicos y la política a través del financiamiento de las campañas electorales (estudios recientes indican que el gasto en campañas oscila entre 34 y 84 millones de dólares en cada convocatoria);⁶ entre el poder económico y los medios de comunicación, a través de la propiedad directa de estos; y entre dicho poder y el campo de la cultura y de la producción de conocimiento, a través de diversas instituciones académicas, corporaciones culturales y centros de estudios.
- e. Influencia excesiva del poder militar y religioso: en Chile sigue siendo desmesurado el poder político que ejercen las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica. Es probable que se camine hacia una cierta normalización de la situación de estos poderes –particularmente en el caso de las Fuerzas Armadas–, pero de todas maneras su ámbito de influencia y decisión trasciende lo razonable. El influjo de la Iglesia en materias valóricas, de salud pública y en el ámbito de las políticas educacionales, excede lo que es propio dentro de un Estado y una sociedad laicos.

Las condiciones arriba descritas configuran una circunstancia en la cual importantes decisiones se toman al margen de las instituciones y de los representantes que genera la soberanía democrática, cuando no es esa propia institucionalidad política la que aparece articulada o cooptada por redes extrainstitucionales de poder. Lo anterior redundando en una creciente disfuncionalidad del sistema político. De acuerdo a Cortés Terzi:

Esta crisis de funcionalidad se debería a que: a) en sus formas conceptuales y operativas actuales la institucionalidad democrática no resuel-

⁶ S. Valdés; X. Hinzpeter, "Cuánto cuesta una campaña electoral. Los candidatos al parlamento en 1997 en Chile". En: *Estudios Públicos* 79 (Invierno, 2000), Centro de Estudios Públicos. Citados por Claissac, J. *Limitar el gasto electoral: un imperativo democrático* (2ª parte). www.asuntospublicos.cl.

ve –ni puede resolver– por sí sola y a plenitud todas las cuestiones que atañen a lo público, y b) tales carencias facilitan la intervención de decisores externos a la institucionalidad en la definición de determinadas políticas públicas, sin disponer de mecanismos institucionales para ello y sin que esa intervención tenga transparencia y legitimidad social (...) La extensión y recurrencia del fenómeno va interrogando la funcionalidad de las instituciones democráticas y acentuando desconfianzas hacia ella. (184)

A todo lo ya dicho se debe agregar lo señalado en el apartado precedente relativo a la elite, a su endogamia y ensimismamiento, lo cual potencia la configuración y reproducción de estas redes informales y extrainstitucionales de decisión. La elite se articula a través de lazos familiares, amicales y por medio de la sociabilidad común que se establece al compartir esta los mismos espacios urbanos, colegios, cumpleaños, almuerzos dominicales, etcétera.

EL DESPERTAR DE LA CIUDADANÍA EN CHILE

Como contrapartida a esta realidad de bloqueo institucional, de circuitos extrainstitucionales y de elites endogámicas, lo que se observa en la sociedad chilena es un creciente despertar de la ciudadanía.

Aunque resulta difícil cuantificar y afirmar con precisión cuál es el grado de extensión de este fenómeno, se observa un mayor grado de conciencia en los chilenos y chilenas de ser sujetos de derechos, y la configuración de una sociedad civil –entendida como aquellas formas de organización, acción y comunicación que no pertenecen a la esfera del Estado ni del mercado– mucho más activa y organizada.

Por un lado, sorprende el grado de participación en organizaciones de la sociedad civil que muestran ciertos estudios, y que está dando cuenta de una red o tejido asociativo mucho más denso y extendido de lo que se supone comúnmente. Se trata de agrupaciones de intereses y objetivos diversos, con escaso poder político y mediático, pero que representan una base material significativa para el desarrollo de actores sociales con mayor presencia en las decisiones públicas. Según datos aportados por el PNUD, el año 2000 había alrededor de 83.386 organizaciones sociales, lo que significaba que un 55% de la población tenía algún grado de involucramiento y participación en una organización de tipo comunitaria o social.⁷

⁷ PNUD 219.

En segundo término, se debe considerar, como parte de este proceso de despertar de la ciudadanía, la caída de los miedos que cruzaron la sociedad chilena durante la transición y que significó la desarticulación de muchos actores sociales. El miedo al conflicto y la inhibición de toda acción que pudiese considerarse fuera del consenso sobre el que se fundó el proceso de transición en Chile, ha sido uno de los rasgos político-culturales más representativo de la sociedad chilena desde el retorno de la democracia. La caída de estas barreras e inhibiciones explica también la mayor asertividad con que hoy se plantean los ciudadanos y los colectivos sociales.

En tercer término, se observa la configuración de una "esfera de opinión pública" —medios de comunicación, universidades, centros académicos, nuevas propuestas artísticas, proyectos editoriales autónomos, entre otros—, que constituye una parte dinámica de esta nueva sociedad civil, y que plantea discursos políticos y estéticos críticos, que no circulan ni están legitimados por el sistema político y que van configurando nuevos estados de opinión en la sociedad chilena.

En cuarto lugar, el avance de las tecnologías de la información y comunicación ha masificado y acercado formas de vida diversas, y ha favorecido el desarrollo de nuevos canales de expresión y comunicación por parte de diversos colectivos. El desarrollo y masificación de estas tecnologías ha permitido aumentar la reflexividad de la sociedad, y ha significado la constitución y coordinación de diversas identidades sociales y ciudadanas.

En quinto lugar, se advierten nuevas formas de organización social, mucho más asociadas a tareas y demandas concretas. Estas canalizan una forma de acción social menos ideologizada que antaño y son capaces de aglutinar y movilizar a importantes contingentes ciudadanos. Entre ellas se pueden mencionar diversas iniciativas de voluntariado.⁸

Probablemente, aquello que presenta menos dinamismo, y cuyo futuro encierra un gran signo de interrogación, es lo que ocurre con los movimientos sociales tradicionales, en particular con el movimiento sindical. No se visualizan allí procesos de renovación y adecuación significativos a las nuevas realidades. Sin embargo, la inercia y crisis

⁸ El reciente informe del PNUD llama la atención sobre organizaciones de nuevo tipo, como "Un techo para Chile", la cual moviliza a alrededor de 30 mil personas, todas voluntarias y en su gran mayoría jóvenes.

de los actores sociales tradicionales no debe confundirse con un alejamiento general de la sociedad civil, la cual –como hemos sostenido– pasa por un importante renacer y activismo.

CRISIS DE FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA POLÍTICO: ¿HACIA UNA CRISIS DE LEGITIMIDAD O LA EMERGENCIA DE CANALES ALTERNATIVOS DE GENERACIÓN DE LIDERAZGOS?

A nuestro juicio, el desacoplamiento que se ha venido produciendo se expresa en grados importantes en la pérdida de legitimidad del sistema político, de sus instituciones y actores, pero, a la vez, en el surgimiento de canales nuevos e “informales” de conformación de liderazgos políticos y de intentos de renovación de las elites.

Probablemente, esto último plantea una realidad más interesante y novedosa, pero aún en ciernes, y que por lo mismo se debe considerar más bien como una hipótesis de trabajo, que como una realidad plenamente definida y consolidada. La expresión más clara de ello sería el surgimiento del liderazgo de Michelle Bachelet (y en menor medida, en su momento, de Joaquín Lavín).

Lo que aquí quisiéramos destacar es la manera como la ciudadanía se las ha ingeniado, por decirlo de alguna manera, para soslayar la institucionalidad política y sus elites, y así configurar un liderazgo político que se sale de las rutinas de construcción y reproducción de los liderazgos políticos en Chile.

Si tuviésemos que describir lo ocurrido diríamos que aquí ha operado un uso por parte de los ciudadanos de los medios de comunicación y de las encuestas de opinión para expresar una opción crítica y para prescindir de las estructuras clásicas de toma de decisión del sistema político. Podríamos afirmar que los ciudadanos han encontrado el canal para constituirse a su vez en un “poder fáctico”, capaz de expresar de manera “extrainstitucional” sus propios deseos y preferencias.

Se podrá decir y escribir muchas cosas sobre la “encuestolatría” en que ha caído la política chilena, y muchas de las críticas y aprensiones de esos análisis contienen no poco de verdad y de justo alegato; sin embargo, y a su vez, es necesario reconocer que sin las “encuestas de opinión”, operando como un nuevo actor político relevante, no hubiese sido posible el surgimiento del liderazgo de Bachelet ni las promesas de renovación y oxigenación política que ella encarna.

El futuro del liderazgo de Bachelet y de su eventual gobierno está aún por escribirse, pero lo que quedará como fenómeno, probable-

mente más permanente, es el aprendizaje ciudadano de que a través de una alianza con este actor político que son las “encuestas de opinión” (y en menor medida con los propios medios de comunicación, aunque estos a diferencia de las encuestas son más expresivos de la elite) ha sido posible configurar un canal distinto para la emergencia y proyección de nuevos liderazgos políticos.

Lo que sostenemos es que de no mediar cambios más estructurales que permitan el desbloqueo del sistema político-institucional, y un mayor grado de rotación y renovación de las elites, estos mecanismos alternativos pueden llegar a consolidarse y a transformarse en un dato relevante, de orden estructural, del sistema político chileno.

RECONECTAR LA INSTITUCIONALIDAD POLÍTICA CON LA CIUDADANÍA

No obstante lo anterior, es indudable que a lo que se debe propender es a una renovación y reforma de la institucionalidad democrática, en busca de que sea esta, y no mecanismos alternativos e informales a los cuales tenga que recurrir subsidiariamente la ciudadanía, la que canalice las funciones de participación y representación de lo social en la esfera de lo político.

A continuación, señalamos algunas medidas y acciones que contribuirían a este proceso de ajuste entre el sistema político y el mayor activismo ciudadano observado, dejando como una interrogante abierta si ello se producirá sobre la base de una crisis de legitimidad del sistema político o de la consolidación de nuevos canales y mecanismos de expresión ciudadana y de construcción y legitimación de los liderazgos políticos. Entre estas acciones y medidas se pueden señalar las siguientes:

- a. Otorgar una real prioridad política a la reforma del sistema electoral binominal. El tema probablemente no merece mayor fundamentación que lo ya señalado, pero darle efectiva prioridad en la agenda política pasa por un real convencimiento de que el sistema binominal genera una distorsión en el juego de mayorías y minorías, dificulta hasta hacer imposible la representación de las nuevas dinámicas sociales en la esfera política y genera una elite anquilosada. Cierta adhesión no confesada que el binominalismo encuentra en sectores de la elite de la Concertación –los que se han persuadido de que este genera “estabilidad institucional”– conspira con la posibilidad de un cambio en el sistema electoral. Existen diversos sistemas electorales proporcionales que contienen en sí los incentivos necesarios para constituir

- gobiernos de mayorías, sin la distorsión a la representación que conlleva el sistema binominal.
- b. Fortalecer los mecanismos de participación política-institucional de la ciudadanía. Esto pasa por un conjunto de medidas que signifiquen aumentar la capacidad de fiscalización ciudadana sobre los actos de gobierno y del Parlamento; la posibilidad de revocación popular de los mandatos; la cuenta periódica a los electores y la transparencia y difusión pública de las votaciones de los parlamentarios en sala y particularmente en comisiones; y la participación ciudadana más directa en las legislaturas a través de mecanismos como la iniciativa popular de ley.
 - c. Limitar y acortar los mandatos de los representantes de elección popular. Delimitar los mandatos de los parlamentarios, alcaldes y dirigentes partidarios evitará las tendencias a la oligarquización y concentración creciente de los recursos de poder en pocas manos, y contrarrestará, aunque sea en parte, la conformación de una “clase política” que se va autonomizando de sus representantes y autoperpetuando a través de redes clientelares, constituyéndose en un grupo con intereses particulares y corporativos. Se debiera limitar a un máximo de tres períodos la elección de diputados y alcaldes, y reducir a cuatro años el mandato de los senadores, limitando también su reelección a tres períodos.
 - d. Renovar los mecanismos de construcción de políticas públicas. Es probable que un gran desafío teórico y práctico para un eventual gobierno de Bachelet será construir un modo de ejercicio del gobierno que signifique un mayor involucramiento ciudadano. Construir mecanismos de diálogo social, estrategias de consultas públicas, trabajo común entre expertos y colectivos ciudadanos, y otros, abrirá paso a un ejercicio del gobierno de nuevo tipo, bajo fórmulas participativas y eficientes que permitan producir un “giro ciudadano” a la acción del gobierno.⁹
 - e. Fortalecer la autonomía económica del sistema político. Resulta clave persistir en el esfuerzo de dar financiamiento público a la actividad política y de hacer más eficiente el control de los gastos de campaña. Junto con ello se deben fortalecer las capacidades técnicas de los parlamentarios y de los partidos políticos, aportando recursos públicos para el funcionamiento de los centros de estudios y de los equipos de asesores, de modo que se permita

⁹ Ver E. Díaz-Tendero, “El giro ciudadano. Elementos de base para la definición de una estrategia,” *Avances* 38 (dic. 2000): 25-30.

equilibrar los niveles de información y la capacidad de propuestas que hoy presenta la estructura de gobierno, así como ciertos empresarios y grupos económicos. La mayor tecnificación de los partidos políticos y del poder legislativo constituye un sano equilibrio dentro de los poderes públicos, e implica un fortalecimiento del rol mediador, de representación y de agregación de demandas que estos realizan.

- f. Instituir mecanismos que favorezcan una pluralidad de medios de expresión y comunicación. Desarrollar la dimensión deliberativa de la democracia, y avanzar hacia formas más simétricas en la capacidad de expresión y opinión de los distintos actores sociales y políticos, constituye una acción imprescindible en el proceso de revinculación entre lo político y lo ciudadano. Probablemente la dimensión deliberativa en las democracias modernas ha pasado a ser tanto o más importante que sus dimensiones participativa y representativa.
- g. Ampliar nuestro concepto de ciudadanía. En esta nueva etapa conviene revisar el concepto de ciudadanía con el que tradicionalmente se ha trabajado, extendiéndolo hacia ámbitos, derechos y responsabilidades que trasciendan lo estrictamente político. Hoy se puede ejercer ciudadanía en el ámbito del espacio civil, en torno a un trabajo o profesión, como consumidor, empresario o actuando a favor de causas sociales, culturales, medioambientales, de género, etcétera. Se trata del ciudadano entendido como aquel sujeto preocupado de los problemas del gobierno de la "ciudad", en su más amplia acepción, lo cual plantea múltiples espacios desde donde desplegar responsabilidades y compromisos con los otros, la comunidad y la nación.

En la dirección anterior la filósofa española Adela Cortina ha **propuesto** distinguir entre una ciudadanía política, económica, social, civil, intercultural y cosmopolita.¹⁰ Esta "ampliación" del concepto de ciudadanía favorece una mayor inclusión y cercanía de lo político con los distintos ámbitos de motivación e identidad con que las personas buscan hoy definir su participación en la sociedad y en el ámbito de lo público.

En definitiva, la sociedad chilena vive en la actualidad el desafío de superar este abismo que se ha abierto —particularmente a través

¹⁰ A. Cortina, *Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía* (Madrid: Alianza, 1997).

del largo y controlado proceso de transición política vivida por Chile-, entre un sistema político bloqueado y desensibilizado frente a las nuevas realidades y actores sociales, y la mayor activación y presión ciudadana por el reconocimiento y respeto de los derechos básicos. Dentro de una sociedad que se moderniza, que eleva el nivel educativo de su población, y de individuos y ciudadanos más informados y reflexivos, se potencia la demanda por una mayor participación en las esferas del poder, y se estrechan los márgenes para que siga operando la facticidad del poder tradicional y los mecanismos cerrados y excluyentes de conformación y reproducción de las elites.

De no producirse este reencuentro entre la institucionalidad democrática y esta mayor conciencia y actitud ciudadana de los chilenos, probablemente se profundizará el descrédito de la política y de sus instituciones, lo cual puede derivar en una crisis de legitimidad del sistema político, y/o en lo que observamos hoy como el establecimiento de mecanismos informales y alternativos, relativamente eficientes, que la ciudadanía ha ido identificando y desarrollando, para expresar su malestar, sus preferencias y para erigir nuevos liderazgos.

**ACTORES SOCIALES:
IDENTIDADES Y PROPOSICIONES**

EUGENIO TIRONI

Doctor en sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, París; investigador de Cieplan; profesor del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de las escuelas de Gobierno y de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es miembro del consejo superior de la Universidad Alberto Hurtado. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos. Fue fundador y director de SUR y director de comunicación del gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994). Es presidente de la consultora en comunicación estratégica TIRONI | Asociados, director de empresas y asesor y director de diversas fundaciones sin fines de lucro. Fue durante cuatro años columnista de la revista *Qué Pasa* y es actualmente columnista regular del diario *El Mercurio*. Es autor o coautor de 15 libros, entre los que figuran *Los silencios de la revolución: Chile, la otra cara de la modernización* (1988); *Pobladores. Luites Sociales et Democratie au Chili* (con François Dubet, Vicente Espinoza y Eduardo Valenzuela, 1989); *Autoritarismo, modernización y marginalidad* (1990); *El régimen autoritario: para una sociología de Pinochet* (1998); *La irrupción de las masas y el malestar de las elites* (1999); *El cambio está aquí* (2002); *Comunicación estratégica. Vivir en un mundo de señales* (con Ascanio Cavallo, 2004); y *El sueño chileno. Comunidad, familia y nación en el Bicentenario* (2005).

LA CUARTA RUPTURA

REFLEXIONES SOBRE COMUNIDAD, PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO EN EL CHILE DE HOY

EUGENIO TIRONI

SINTESIS

Este artículo presenta someramente las “tres rupturas” que han dado forma al Chile moderno, y reflexiona acerca de sus efectos sobre los modos de representación y participación ciudadanas. Enseguida se plantea que lo que hoy surge es una demanda comunitaria que se expresa en la búsqueda de un nuevo tipo de liderazgo en diversos ámbitos de la vida social, incluyendo el político.

El artículo se basa en un libro del autor de reciente aparición: *El sueño chileno. Comunidad, familia y nación en el Bicentenario* (Santiago: Taurus, 2005).

I. TRES RUPTURAS

De aquí a medio siglo más, por ahí por el año 2055, el día en que un historiador extranjero se proponga evaluar estas últimas dos décadas de la historia de Chile, es probable que identifique tres rupturas históricas, de aquellas que dejan huellas permanentes en una sociedad. Tres, sólo tres. La tercera es la que se produjo en los últimos años, durante el gobierno de Ricardo Lagos.

Ruptura del orden burocrático

La primera ruptura fue la que se introdujo en la segunda mitad de los años setenta, pero que recién vino a madurar a mediados de los ochenta. Se trata del quiebre con el orden económico burocrático; un sistema articulado en torno al Estado, con grupos corporativos poderosos y altamente politizados, orientados a ejercer presión sobre el fisco, y un mercado reciamente regulado y férreamente protegido de la competencia externa.

El gran protagonista de esta ruptura fue Augusto Pinochet, con la aplicación de métodos que llevaron a la supresión de las libertades

básicas y la violación masiva de los derechos humanos. Pinochet fue quien introdujo un modelo económico basado en mercados libres, en la apertura comercial, en el rol subsidiario del Estado y en el papel central de la empresa privada, incluso en campos que parecían prohibidos, tales como la previsión, salud, educación, telecomunicaciones y energía, entre otros.

El efecto sociológico de esta ruptura fue la consolidación paulatina de una sociedad donde las “normas, actitudes y expectativas se conforman en los mecanismos del mercado”, según la definición del recordado Norbert Lechner.¹

En la sociedad de mercado, la condición de consumidor se impone por sobre la del ciudadano –aunque no la anula, desde luego–; la construcción de la biografía e identidad individual toma autonomía de la pertenencia a grupos o corporaciones; la energía se destina a defender los derechos e intereses individuales, antes que en promover causas o fines colectivos, y se reclama por la falta de transparencia del mercado antes que por la injusta distribución de beneficios por parte del Estado. Es una sociedad donde el individuo sólo confía en su esfuerzo, del cual depende el triunfo como también la derrota; donde se asumen altos riesgos, pues de esto depende el éxito; donde la educación (en la que se invierte fuertemente, para uno mismo y su descendencia) es visualizada como la gran palanca del progreso; y donde sólo se cuenta con la familia como red de protección ante el fracaso.

Este modelo ha experimentado profundas mutaciones en el transcurso de los últimos veinte años, pero sus coordenadas básicas se han mantenido desde su instauración hasta ahora.

Ruptura del orden autoritario

La segunda ruptura es aquella que tuvo lugar entre 1988 y 1990. Se trata del quiebre del orden político autoritario. En este caso, el quiebre tomó una forma pacífica, institucional, negociada, lo que evitó traumas como los que creó la ruptura anterior.

Quien simbolizará la transición a un orden democrático será, sin duda, Patricio Aylwin –con un Pinochet actuando renuientemente, pero no en forma disruptiva. Aylwin es y será recordado por ello, por haber sabido manejar las enormes tensiones y expectativas de esa

¹ Norbert Lechner, “The Transformations of Politics”, en Felipe Agüero y Jeffrey Stark (eds.), *Fault Lines of Democracy in Post-Transition Latin America* (Miami: University of Miami, North-South Center Press, 1998).

época –en especial por los efectos de la violación a los derechos humanos en el período previo–, y, al mismo tiempo, legitimar, expandir y proyectar el orden socioeconómico resultante de la primera ruptura, de mediados de los ochenta.

El orden político inaugurado en 1990 ha revelado mucho más solidez de la que se esperaba de él. Ya no está sostenido únicamente en una institucionalidad creada bajo dictadura, sino en una cultura política nueva, que es heredera más bien de las lecciones de la experiencia de 1973. Esta cultura ha conducido a una actitud más proclive al acuerdo pragmático que a la confrontación ideológica que precedió el colapso de la democracia en los setenta.

El nuevo orden político tiene como rasgo central una estructura bipartidista, basada en dos bloques políticos, uno de centro-izquierda (la Concertación) y otro de centro-derecha (lo que hoy se conoce como la Alianza). Este escenario, en vez de diluirse con los años, se ha acentuado al punto de que ha dejado un espacio muy estrecho para una tercera fuerza. Es un sistema que ha sido criticado por concentrar la representación política en sólo dos bloques, pero que ha permitido configurar sólidas mayorías de gobierno, lo que le ha dado gran estabilidad al país.

A partir de 1999, sin embargo, se ha producido un mayor equilibrio de fuerzas. Se inauguró una democracia realmente competitiva. Pero esto no ha polarizado ideológicamente al sistema político ni ha tenido efectos disruptivos sobre la gobernabilidad, pues, contraviniendo la experiencia de la democracia chilena previa a 1973, la capacidad de alcanzar acuerdos no se ha resentido.

Hoy nadie sabe qué coalición ganará las elecciones que vienen –una incertidumbre que denota una democracia que realmente funciona. Lo que sí se sabe es que el resultado está íntimamente asociado –como en todas las democracias maduras del mundo– a los atributos y personalidades de los candidatos, y de la aptitud de estos para conquistar apoyo en la estrecha pero decisiva franja de los votantes más volátiles o indecisos.

La segunda ruptura, en suma, es aquella que fundó la democracia chilena moderna. Como se ve, esta ha dejado atrás muchos de los rasgos de la vieja democracia chilena de tipo “europeo” (partidos y liderazgos ideológicos, campañas programáticas e impersonales, electores fieles), y ha tomado en cambio una fisonomía que la aproxima a una democracia de tipo “norteamericano”: partidos pragmáticos, liderazgos personalizados, campañas mediáticas, electores volátiles, y así por delante.

Ruptura del orden conservador

Ahora bien, ¿cuál es la tercera ruptura a la que hará mención el historiador imaginario antes mencionado? Con seguridad será la que Chile ha protagonizado en los últimos cuatro años. Se trata del quiebre del orden cultural oligárquico-conservador. Este se las había ingeniado hasta ahora para sobrevivir a la modernización en curso, en particular a la extensión del mercado y de la apertura exterior y a la democratización del sistema político.

Una aclaración conceptual. El término oligarquía despierta muchos fantasmas, seguramente porque fue empleado inmisericordemente en la época de mayor polarización en Chile, en los años sesenta y setenta del siglo pasado. Aquí, sin embargo, se lo usa en la acepción clásica de Robert Michels, uno de los grandes sociólogos de todos los tiempos. Específicamente, Michels emplea el concepto oligarquía para referirse a una minoría que es reconocida como superior, que ejerce sin contrapeso su poder e influencia política, que se emancipa del control de sus representados para atender sólo sus propios intereses y que se protege a sí misma replegándose en organizaciones cada vez más impermeables a las demandas de la sociedad.

De otra parte, cuando aquí se hace referencia al orden conservador, se hace mención al tipo de sistema descrito por Anthony Giddens, basado en "leyes naturales" y costumbres que no admiten ser modificadas, una jerarquía social rígida y opaca, con privilegios que nacen del linaje y no del mérito de las personas, con redes de poder de tipo aristocrático y con un grupo dirigente que se relaciona hacia el resto de la sociedad con un estilo paternalista.

Lo más probable es que la ruptura cultural con el orden conservador-oligárquico sea el hilo invisible que une muchos de los episodios tan dispersos como los que han sido mencionados precedentemente.

La inesperada acogida que se prodigó a Spencer Tunick; la fuerte conmoción pública que provocaron las irregularidades descubiertas en la administración pública; también el sorprendente y vasto debate que se produjo en torno a los *reality-shows*, con su espontaneidad, romanticismo y erotismo; el nuevo estatus que adquirió la cuestión de los derechos humanos, despojada de las connotaciones políticas de antaño; la voluntad de incorporar el pasado en la memoria de la nación, como se vio a propósito de los treinta años del golpe de Estado el 2003, y, más recientemente, con el escalofriante Informe de la Comisión Valech sobre la prisión política y la tortura durante el pe-

riodo de la dictadura; la aprobación, después de largo debate, de una moderna ley de divorcio; desde luego, el tono lúdico y la crudeza de los medios de comunicación, y la discusión en torno a la frontera de lo íntimo o privado; la irrupción en las pantallas de la TV –y en el centro de la agenda pública– de cuestiones como la opción sexual; y, finalmente, la atención prestada a zonas oscuras de la sociedad, como la pornografía infantil y el abuso de menores; en fin, la desacralización de las elites, que conduce a una evaluación cada vez más inquisidora de estas por parte de los medios de comunicación. Todos esos acontecimientos, aparentemente desvinculados entre sí, apuntan en una y clara dirección: la emergencia de una sociedad más transparente, más horizontal. Una sociedad que está ya en condiciones de sacar del armario sus fantasmas acumulados, que se levanta dispuesta a enfrentar conflictos que hasta ahora había evitado, que enjuicia con severidad las conductas de sus grupos dirigentes y sus celebridades, sin que amenazas autoritarias o invocaciones morales puedan evitarlo. Un país que, en el plano institucional, termina con la censura, restablece la supremacía civil sobre las Fuerzas Armadas y elimina de su Constitución Política los últimos resabios no democráticos. En todo este proceso –como se indicó– los medios de comunicación han tenido un protagonismo fundamental, lo que ha provocado una curiosa unanimidad en su contra en la clase dirigente.

No se está insinuando aquí, para nada, que la ruptura con el orden cultural oligárquico-conservador pueda darse por concluida. Ni, menos aun, que esta sea una sociedad enteramente moderna –si algo así realmente existe–, emancipada de la tradición, basada en la autonomía y el mérito de las personas, en la transparencia de sus procedimientos, en el control o *accountability* de sus autoridades, que descansa exclusivamente en las conjeturas y la experiencia, y no en verdades naturales o reveladas. No, nada de esto.

Como se aprendió de las rupturas anteriores, la del orden burocrático y la del orden autoritario, este tipo de quiebres no se consuman de un día para otro, sino que tienen un ritmo histórico lento, gradual. Pero lo que está claro, sin embargo, es que ha comenzado su declinación aquella cultura –tan chilena– acostumbrada a reprimir o endulzar la verdad, a ocultar o maquillar los conflictos, a premiar la hipocresía y castigar la sinceridad, y a obedecer –sea por reverencia o por temor– a una pequeña oligarquía intocable que se sentía, no sin motivo, con el privilegio de manejar todos los hilos del poder.

Lagos histórico

Ahora bien, ¿quién será rememorado como líder de esta tercera ruptura?

Como se decía antes, el quiebre que condujo a las reformas económicas de los ochenta está inevitablemente asociado a la figura de Pinochet, como la ruptura con el autoritarismo lo está con la figura de Aylwin. Pues bien, del mismo modo, el quiebre con el orden conservador-oligárquico estará ineludiblemente asociado a una figura: la de Ricardo Lagos.

En el período de Lagos, el proceso de modernización, que había estado concentrado principalmente en las áreas socioeconómicas primero, y político-institucionales después, irrumpe en la cultura y pone en jaque a la tradición. Como señalara David Gallagher, “Chile necesitaba una liberalización cultural”, y este es el papel histórico que cumple Lagos, quien se yergue en el símbolo de este fenómeno; esto es lo que explica que alcance una adhesión ciudadana sin precedentes.²

Este rol histórico no es algo que estuviera previsto, ni por Lagos ni por sus partidarios. Ellos pensaban, seguramente, que su gestión sería recordada por logros sociales, económicos o institucionales. Tampoco Pinochet debe haber imaginado jamás que sería celebrado por el modelo económico que instauró y execrado por lo que en su tiempo más lo enorgullecía: haber dado la guerra a muerte al comunismo. Pero la historia es así: es ella quien fija los roles de sus personajes... y no al revés.

La gestión de Lagos ha descansado sobre la historia precedente, sobre instituciones más fuertes, que “funcionan”, y sobre una sociedad más madura, que figonea y debate. Esto le ha permitido practicar un nuevo estilo de gobierno sin el cual este quiebre cultural no habría tenido lugar. Hay, en efecto, una invisible pero estrecha relación entre la atmósfera de apertura y confianza que se respira en la sociedad chilena de hoy, y ciertos gestos del Presidente Lagos: abrir La Moneda o la puerta de Morandé 80; exigir el retiro anticipado de un almirante-candidato y de un mando militar acusado de participar en la violación a los derechos humanos; encarar de una forma estrictamente institucional las irregularidades en el sector público.

² David Gallagher, entrevista en diario *La Tercera*, 28 de noviembre de 2004. Al momento de ir a imprenta *El sueño chileno. Comunidad, familia y nación en el Bicentenario* (Santiago: Taurus, 2005), la popularidad del Presidente Ricardo Lagos, según las encuestas disponibles, superaba el 60%.

A lo anterior hay que agregar la decisión del Presidente Lagos –contra todos los que le sugerían “no remover los hechos del pasado”– de enfrentar el drama silenciado de los torturados, para entregarles una reparación afectiva, simbólica y material. Esto probablemente permitirá entrar a la etapa final del duelo social de Chile y, como señala Ricardo Capponi, “nos permitirá mirar el futuro sin lastres y, por tanto, más confiados”.³

Por todo esto, aquel flemático historiador ya mencionado, a cincuenta años de hoy, es improbable que consigne a Lagos meramente como “el tercer gobernante de la Concertación”. Lo presumible es que le asigne un carácter más fundacional. Lagos seguramente será registrado más bien como el primer Presidente de un Chile que empieza a ser menos tradicional y más reflexivo, menos opaco y más transparente, menos oligárquico y más democrático, menos conservador y más liberal.

2. A MÍ, ¿QUIÉN ME REPRESENTA?

Tal pregunta carecía de sentido en el tipo de sociedad chilena previa a 1973 y, en cierto modo, en aquella que brotó a comienzos de los noventa. Porque la respuesta parecía obvia: quienes representan a la ciudadanía son los partidos políticos. Hoy, sin embargo, la respuesta no es tan obvia, y de ahí que la interrogante sea pertinente.

Lo que se vive actualmente, después de las tres rupturas antes descritas, es una crisis de la representación. ¿Tendrá esta su origen en un déficit de los partidos políticos? Sí, desde luego. Pero esto no agota el problema. Aceptar esta respuesta es quedarse dando vueltas en torno al pozo. Es más: el hecho de que la ciudadanía no esté representada por los partidos políticos no obedece exclusiva ni principalmente a una carencia de estos últimos; obedece más bien a un cambio de la sociedad.

Los partidos no son lo que eran

Cuando los chilenos vivían en una sociedad de corte más tradicional, las cosas eran más fáciles para los partidos y su función representativa.

La gente nacía y vivía en *un país, una región, una clase social, una religión*. Tenía una identidad clara y estable, que heredaba de sus

³ Ricardo Capponi, “El duelo social en Chile”, en *La Tercera*, 4 de diciembre de 2004.

progenitores y de alguna manera transmitía a sus hijos. Esta identidad, a su vez, se proyectaba en un partido, al que uno pertenecía irreflexivamente, por simple tradición y generalmente de por vida.

De otra parte, en ese tipo de sociedad el Estado era el actor central. Él era la gran fuente de proyectos, decisiones y recursos, y por sí mismo copaba el espacio de lo público. La suerte de cada uno dependía del Estado, y el acceso a este dependía de la capacidad de presión política y corporativa de grupos organizados. Los partidos, en alianza con sindicatos y gremios, tenían en efecto un rol prácticamente monopólico como canales de acceso al Estado. De su éxito en vehiculizar sus demandas dependía directamente el bienestar de los individuos. A estos les interesaba vitalmente, por lo tanto, lo que aconteciera con los partidos.

Pues bien, hoy se vive en un nuevo mundo.

Los partidos ya no ejercen el rol de antaño y no volverán a ejercerlo ni aunque hagan esfuerzos sobrehumanos. El problema no está en sus dirigentes ni en sus programas ni en su organización; radica en un tipo de sociedad donde ninguna institución, llámese partido, Iglesia, sindicato, gremio o como sea, puede aspirar a tener el monopolio de la representación de individuos que, por lo demás, andan a tientas construyendo permanentemente sus propias identidades.

El quiebre más obvio dice relación con la pérdida de la centralidad del Estado. Este ya no tiene el monopolio de lo público y perdió su protagonismo en la generación del bienestar del individuo. En cambio ha emergido una pluralidad de actores e instituciones entre los cuales este debe moverse para construir su propio bienestar. El individuo, por lo demás, ha asumido personalmente la responsabilidad frente al riesgo, el reconocimiento ante el éxito y también la culpa frente al fracaso.

Vivir su propia vida

Pero hay una transformación que va de la mano de la anterior. Esta dice relación con la destradicionalización —como la llama Giddens— y con la aceleración del proceso de individuación.

Con la modernidad, las “leyes naturales”, las costumbres, la tradición, la jerarquía social rígida articulada en torno a redes de tipo aristocrático, los privilegios que nacen del linaje y no del mérito de las personas, se hacen cada vez menos eficaces. La gente ya no pertenece, de una vez y para siempre, a un país, una región, una clase social, y desde luego tampoco a un partido. La identidad de cada cual se transforma en una construcción individual y permanente, en lo que Giddens llama un “proceso reflexivo”.

“El personaje central de nuestro tiempo –señala Ulrich Beck– es el ser humano capaz de escoger, decidir y crear, que aspira a ser autor de su propia vida, creador de una identidad individual.”⁴ Pues bien, este individuo no busca integrarse a la sociedad, sino “vivir su propia vida”. A la sociedad no se pertenece; ella es un espacio por el que se navega en función de la realización de proyectos propios, individuales.

Las fuentes tradicionales de identidad colectiva, como la de clase, pierden peso. Los individuos no “son”, de una vez y para siempre, trabajadores o empresarios, como tampoco intelectuales, ecologistas, liberales. Nadie es naturalmente de un país, de una clase, de una religión, ni siquiera de un género: esto se escoge, y no una vez sino varias veces.

El individuo tampoco está asentado en una sola lógica de acción. Más bien salta entre ellas sin solución de continuidad. Es sucesiva o simultáneamente ciudadano y consumidor, contribuyente y beneficiario, socialista y capitalista, conservador y liberal, ecologista y desarrollista, nacionalista y cosmopolita, local y global. Aquella visión unilateral, que opone las diferentes lógicas de acción o las presenta como excluyentes, no tiene asidero en la sociedad de hoy.

En suma, el individuo moderno no cuenta ni anda en la búsqueda de una identidad que lo estructure por completo, ni de una vida marcada por la congruencia. Él va más bien cambiando y eligiendo su identidad en una vida que no siempre tiene continuidad. En palabras de Michel Maffesoli, “la identidad única deja su lugar a una serie de identidades sucesivas”.⁵

Los individuos son actores, pero a la vez directores y malabaristas de sus vidas, pues ellos mismos van construyendo sus identidades, y estas son muchas veces identidades híbridas, que nacen de la intersección y combinación. A lo largo de sus vidas –agrega Beck–, los individuos construyen sus propias biografías y arman sus redes sociales de apoyo. Cambian de identidad casi tantas veces como se cambia de vestuario, aunque, por cierto, con más desgarró y más dolor.

Así, no sólo vivimos un nuevo mundo; tampoco nosotros somos los mismos.

⁴ Ulrich Beck, “Vivir nuestra propia vida en un mundo desbocado: individualización, globalización y política”, *En el límite. La vida en el capitalismo global*, eds. Anthony Giddens y Will Hutton (Barcelona: Tusquets, 2001): 201.

⁵ Michel Maffesoli, *La contemplation du monde* (Paris: Grasset, 1993): 104.

Fin del monopolio

En este “mundo desbocado” –como lo llama Giddens–, los partidos ya no pueden ser lo que fueron. Ellos no agotan la representación de la identidad del individuo, pues esta es múltiple y cambiante. Menos aun pueden pretender el monopolio de su representación.

Como efecto de los procesos de individuación, los partidos han cambiado su naturaleza. Como plantea Beck, “no se puede dar por supuesto ni que los ciudadanos son miembros de un partido y los miembros del partido son soldados, ni que los partidos (...) son capaces de lograr el consenso, porque las organizaciones de gran tamaño también son plurales en sus contenidos”.⁶

¿Significa todo esto que los partidos están destinados a desaparecer? No, en absoluto. Ellos siguen siendo indispensables al menos en cuatro sentidos: primero, como instituciones de representación –no las únicas, por supuesto– de los individuos y de ciertos grupos sociales ante el Estado; segundo, como soportes de la identidad de las personas (de hecho uno puede sentirse de la UDI, del PDC o del PS, y sentirse reafirmado con ello); tercero, como entidades que confeccionan la agenda pública y construyen consensos o acuerdos en torno a sus temas; y cuarto, como organismos encargados de seleccionar a los candidatos que serán votados para los cargos de representación popular. Lo que sí no pueden ni deben es aspirar al monopolio en ninguna de estas dimensiones.

Lo anterior significa que los partidos deben asumir que lo público trasciende con mucho al Estado (hay actores no estatales –por ejemplo, las ONG– que influyen decisivamente en la agenda pública). También que los canales para llegar al mundo público y al propio Estado se han diversificado (basta ver el papel de los medios de comunicación para confirmarlo). Y, por último, deben asumir también que se han diversificado las fuentes de identidad de las personas (ya nadie se conforma con identificarse a través de la mera pertenencia a un partido). En suma, los partidos tienen que convivir con otras instituciones que han invadido un campo donde en el pasado pastaban sin competencia.

En relación a los medios de comunicación es un cliché decir que ellos no se sustituyen unos a otros; simplemente se superponen y complementan, como lo hizo la radio frente a la prensa escrita o la TV ante la radio. Lo mismo se podría decir respecto de las formas de

⁶ Beck 243.

representación. Nunca más volverá el monopolio de los partidos, pero esto no significa que desaparezcan. Mas ellos deberán convivir –y hasta cierto punto competir– con otros canales de identificación y representación, como son las ONG, los grupos corporativos, los liderazgos personales y, por cierto, los medios de comunicación.

Subirse al escenario

Pedro Morandé decía que en la sociedad actual las instituciones han sido sustituidas por el escenario, pues la vida pública adquiere las características de un espectáculo montado por y para los medios de comunicación.⁷ Tiene en parte razón. Los medios de comunicación se han transformado en un canal muy relevante de representación de los individuos en el espacio público y en un instrumento clave para influir sobre este. Es lo que le permite expandir sus propios códigos, los códigos del espectáculo, al campo de la política, lo que ha conducido a la llamada “farandulización” de la misma.

Esto es más fuerte por un hecho que destacara Richard Sennet: que el mundo íntimo, aquel regido por los sentimientos, adquiere cada vez mayor relevancia social, mientras la esfera pública clásica, abocada a la búsqueda del bien común mediante la discusión racional y el consenso, es abandonada y vaciada. Esto implica necesariamente un desplazamiento de los partidos por los medios de comunicación –en particular la televisión–, que tienen la aptitud de penetrar en esas esferas de lo que antes se consideraba la vida privada de las autoridades.

En Chile esta invasión comenzó con las figuras del espectáculo. A la inversa del pasado, cuando se trataba de mostrarles como una especie diferente a las personas corrientes, ahora lo que interesa (y gusta) es exponerlas en actividades propias de la gente ordinaria. Desacralizarlas, desnudando su vida íntima, se transformó para las masas en algo fascinante. Pero, como era de suponer, el movimiento siguió avanzando desde el mundo del espectáculo hacia el campo de la política, del gobierno, de las Fuerzas Armadas, de las iglesias. La gente comienza a descubrir, con una mezcla de curiosidad y asombro (y, por qué no decirlo, también alivio), que las élites no son ni más altruistas ni menos vulnerables que ella misma.

La democracia actual se expresa no sólo en el funcionamiento de las instituciones; ella se expresa asimismo en la manera como se rela-

⁷ Comunicación en un seminario de generación empresarial. Santiago, 20 de enero de 2004.

ciona cotidianamente la gente con las clases dirigentes. Esto es típico en las democracias de masas. La ciudadanía aspira a más información acerca de los líderes políticos, a más congruencia entre discursos públicos y conductas privadas, en la ilusión de que por esta vía ejercerán más control sobre quienes la conducen. La demanda por más transparencia es un sucedáneo de la demanda clásica por más participación. Este proceso necesita de los medios de comunicación, que son sometidos a un cambio radical: deben dedicarse ahora a mostrar el aspecto ordinario del poder, no sólo a ensalzar su dimensión sagrada.

Todo esto es bastante angustiante para los núcleos dirigentes, pero eleva enormemente la autoestima de la gente de a pie.

Liderazgo carismático

La función de identificación y representación de los líderes es algo conocido. Gustave Le Bon decía a comienzos del siglo pasado que las masas sienten la necesidad de subordinarse a un líder. Este no se impone ni por la razón ni por la fuerza, sino que las seduce por su prestigio, el cual puede tener un origen funcional (títulos, castas, familias) o simplemente personal (heroísmo, talento). Como el hipnotizador, el líder tiene la facultad de sugestionar a una masa, de dictarle su voluntad y transmitirle sus ideas. El talento de un líder está en presentarles a las multitudes una realidad mejor, más próxima a sus esperanzas; en transformar los fines colectivos en imágenes golpeadoras y atractivas; en transportar a la masa desde el universo de la razón al universo de la imaginación. Más tarde, Freud desarrollaría su propia teoría sobre la importancia del liderazgo en el gobierno de las masas.⁸

La declinación de los partidos, unida a la centralidad de los medios de comunicación —en especial de la TV, con sus códigos eminentemente emocionales—, más la emergencia de grupos corporativos que actualizan la amenaza de la fragmentación, llevan a las sociedades a poner como nunca su vista en los líderes. No hay, en efecto, un antídoto de acción más rápido contra la atomización que la autoridad de un líder.

Se suma a lo anterior el hecho de que la TV tiene espacio sólo para los rostros y las emociones, no para las instituciones ni las ideas. Esto desplaza automáticamente a los partidos por los personajes, a las doctrinas o programas por los lemas o las “cuñas”, y a los partidos

⁸ Al respecto se puede consultar la excelente obra de Serge Moscovici, *L'Age des foules: un traité historique de psychologie des masse* (Paris: Fayard, 1981).

por los líderes. De ahí que fenómenos como la personalización de la política mediante liderazgos carismáticos, lo que parecía un signo de anacronismo, es una tendencia que cruza hoy a todas las sociedades modernas.⁹

En el caso de Chile, los ejemplos están a la vista. Entre ellos, Ricardo Lagos y Joaquín Lavín. Ambas son figuras que no surgen de los partidos ni los representan; ambos se han preocupado de establecer un canal de comunicación propio con la ciudadanía y gozan ambos de una popularidad muy superior a sus coaliciones, lo que les ha permitido imponerse sobre aquellas. Recientemente, la emergencia y consolidación de figuras como Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Soledad Alvear responden exactamente a la misma lógica, aquella donde la opinión pública tiene la primacía por sobre los partidos.

3. VOLUNTARIOS

La crisis de la representación a la que se hizo referencia no va a ser resuelta simplemente con la apelación a liderazgos carismáticos, sean estos de tipo patriarcal o maternal.

Esa crisis tiene causas profundas. Gilles Lipovetsky plantea que es nada menos que un asunto de civilización. Con el paso a lo que denomina la civilización del bienestar consumista, se ha enterrado definitivamente la ideología gloriosa del deber. La lógica del consumo de masas ha disuelto el universo de las homilias moralizadoras, erradicado los imperativos rigoristas y engendrado una cultura en la cual la felicidad predomina sobre el mandato moral, los placeres sobre la prohibición, la seducción sobre la obligación, los placeres íntimos y los sueños de la felicidad privada sobre la santificación de los ideales colectivos.

En esta nueva sociedad las exigencias hacia los demás también cambian. No se ha deslegitimado el principio de ayudar al prójimo; lo que ha perdido apoyo es la idea de vivir *para* el prójimo. La generosidad no ha muerto, pero a condición de que no esté acompañada de una renuncia a la primacía del ego. La ética de la solidaridad es ahora mínima e intermitente. A esto responde el auge del voluntariado, un fenómeno que se observa en todas las sociedades modernas.

⁹ Este tema es tratado extensamente en Eugenio Tironi y Ascanio Cavallo, *Comunicación estratégica. Vivir en un mundo de señales* (Santiago: Taurus, 2004), especialmente en los capítulos 1, 3, 13 y 14.

Ética del posdeber

Lipovetsky plantea que en la actualidad la sociedad ha transitado hacia una era posmoralista en la cual se repudia la retórica del deber austero, integral, religioso y, paralelamente, se coronan los derechos individuales a la autonomía, al deseo, a la felicidad.

Esto da lugar a una nueva ética, la ética del posdeber, la que se diferencia tanto de la antigua ética religiosa como de la total ausencia de valores morales. Es una ética coherente con el individualismo reinante. Ella no se ajusta a las morales religiosas tradicionales ni tampoco a las modernas del deber laico, rigorista y categórico. Aboga por causas inteligentes y aplicadas, se preocupa menos de las intenciones puras que de los resultados; en fin, es una ética menos idealista que reformadora, menos adepta a lo absoluto que a los cambios realistas, menos conminatoria pero no menos responsable.

La ética del posdeber se sustenta en la apelación a las responsabilidades de los individuos hacia la comunidad, sin que esto implique que estos pierdan su individualidad ni que comprometan en ello todos los ámbitos de su vida. Como dice Lipovetsky, “apelamos a la responsabilidad, no a la obligación de consagrar íntegramente la vida al prójimo, a la familia o a la nación. (...) Queremos el respeto de la ética sin mutilación de nosotros mismos y sin obligación difícil: el espíritu de responsabilidad, no el deber incondicional”.¹⁰

La sociedad del posdeber, por ende, no es sinónimo de una sociedad permisiva que sólo aspira a la ampliación de los derechos individualistas. El posdeber conduce más bien a democracias duales: produce al mismo tiempo más normalización y más anomia, más integración y más exclusión, más autovigilancia y más autodestrucción, más horror a la violencia y más trivialización de la delincuencia.

La motivación del voluntario

El voluntariado es un fenómeno que surge con fuerza en la sociedad del posdeber. En este caso, a través de la solidaridad con el otro el individuo se encuentra a sí mismo y participa, al mismo tiempo, de una experiencia comunitaria.

El nuevo voluntariado se caracteriza por salir de la esfera doméstica dedicada a la ayuda caritativa aislada, para transformarse en una fuerza que aspira a modelar las relaciones sociales a una escala mayor.

¹⁰ Gilles Lipovetsky, *El crepúsculo del deber: la ética indolora de los nuevos tiempos* (Barcelona: Anagrama, 1994): 48.

Sin desconocer las responsabilidades estatales y del sector privado, el voluntariado busca hacer frente a los problemas públicos movilizándolo al átomo más básico de la sociedad: el individuo. Reivindica las responsabilidades personales hacia los otros; apela al compromiso individual hacia el resto de la comunidad en aras de la solidaridad.

El voluntariado no está incontaminado de aquellos rasgos característicos de la época en la que surge. Lleva en su seno, por lo mismo, los gérmenes del individualismo. Es más, para Lipovetsky el voluntariado constituye una figura típica de la nueva era. Aparentemente se guía por valores contrarios a los valores dominantes en las sociedades del posdeber, como es la ayuda mutua y la gratuidad. Pero esto no es así. En rigor, el voluntariado está en una búsqueda individualista. En su trabajo hacia el otro, lo que el voluntario persigue es encontrarse a sí mismo, alcanzar una mayor valorización social, reafirmar su propia identidad, invertir su tiempo libre; todo lo cual confirma la centralidad de un ego que no se disuelve en el prójimo.

En la cultura política tradicional los individuos son representados por instituciones y participan sólo a través del voto, lo que conduce a una ciudadanía eminentemente pasiva. Este es quizás el cambio cultural más significativo del voluntariado: promueve una ciudadanía activa y motivada por la eficacia, lo que adquiere gran importancia en una época en la que las comunidades tradicionales se están debilitando. La expansión del voluntariado, por ende, es una buena medida del volumen de capital social de una sociedad.

A fines de los ochenta, Peter Drucker afirmaba que las instituciones de voluntarios en Norteamérica se estaban convirtiendo rápidamente en creadoras de nuevos vínculos de comunidad y en un puente sobre el ancho abismo de diferencias que creaba la naciente sociedad del conocimiento. No estaba descaminado en su pronóstico.

Voluntariado en Chile

El voluntariado es hoy algo cercano a las nuevas generaciones de chilenos. Es visualizado como parte de su formación, pues contribuye al desarrollo de la personalidad, a entablar redes, a aprender a trabajar en equipo, a realizar una práctica profesional anticipada, etcétera.

A diferencia de la generación de los sesenta, que vivió el voluntariado desde una óptica idealista o de contestación política al "sistema", los jóvenes actuales se han aproximado al voluntariado desde una perspectiva profesional y de desarrollo personal, con una menta-

lidad efectista que busca que sus intervenciones tengan resultados pequeños pero concretos. Por otro lado, a diferencia de la generación que fue joven durante la dictadura, los jóvenes actuales se encuentran con una sociedad abierta, dispuesta a incentivar y recibir el trabajo voluntario en colegios, universidades, gobierno, inclusive en la empresa privada.

En Chile, según un estudio de Adimark y Participa realizado el 2003, 41% de las personas participa en organizaciones de beneficencia o voluntariado –contra 2,5% que declara tomar parte en organizaciones políticas. De hecho, numerosas organizaciones dedicadas al voluntariado cuentan con una fuerte participación de jóvenes y profesionales. Es el caso de organizaciones como Un Techo Para Chile, Emprendamos, Hogar de Cristo, En Todo Amar y Servir, Trabajo para un Hermano, o la misma Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza, con sus programas Servicio País y Adopta un Hermano. Todas estas iniciativas han demostrado que es posible motivar a miles de jóvenes voluntarios tras proyectos que tengan los rasgos descritos más arriba, y que el voluntariado es una alternativa real para superar problemas sociales más allá de lo que hagan el Estado o el sector privado.

Uno de los ejemplos más exitosos es Un Techo para Chile. Esta organización parte con metas muy prudentes, pero a corto andar pasa a convertirse en una organización experta en un tema específico (extrema pobreza y vivienda) y, al mismo tiempo, comienza a diversificarse y a proponerse sobre la marcha nuevas metas. Por ejemplo, desarrolla programas de capacitación, da créditos a microempresarios y ha constituido una organización especial (Un Techo para mi País) dedicada a expandir su experiencia a otros países de América Latina. Este tipo de dinamismo y flexibilidad organizacional es pocas veces visto en el sector público o, incluso, en el privado.

En menos de una década, Un Techo para Chile se ha convertido en una institución muy cercana a los más pobres de Chile, con una capacidad para movilizar a decenas de miles de jóvenes y de profesionales en todo el país. Esto la transforma en la principal proveedora de soluciones habitacionales de emergencia. Y, lo que es tanto o más importante, en un referente para los jóvenes y en una voz capaz de plantear el problema de la extrema pobreza en el debate nacional y presionar para la búsqueda de soluciones.

4. LIDERAZGO COMUNITARIO

En un episodio de la serie de televisión "Los Soprano", Svetlana, una mujer inmigrante de origen ruso que tiene que sobreponerse a un serio defecto físico, después de un lance amoroso con Tony Soprano, tiene que soportar, como es habitual, el relato de sus tribulaciones cotidianas: su trabajo, sus amigos, su familia. De pronto, ella lo interrumpe con un comentario que parece estar dirigido a sí misma: "el problema de ustedes, los americanos, es que tienen todo demasiado resuelto, lo que les da demasiado tiempo para pensar acerca de ustedes mismos". Este comentario da una clave esencial cuando se trata de entender a Estados Unidos. Pero ilumina también una dimensión clave de la sociedad chilena –y en general, de toda sociedad–: cómo funcionan sus elites.

La elite chilena

La elite chilena –y esto incluye a políticos, empresarios, intelectuales, periodistas, artistas– es un núcleo pequeño, centralizado en Santiago, con una trayectoria social y educacional uniforme, que mantiene entre sí un estrecho vínculo y que ejerce un dominio incontestado sobre las preocupaciones, las conductas y los ritmos de la sociedad nacional en su conjunto. Pues bien, a este núcleo le calza a la perfección la reflexión de Svetlana, pero en un sentido opuesto: "tiene demasiado resuelto lo que le atañe a su vida privada, lo que le da demasiado tiempo para pensar acerca de la vida pública".

La pasión de las elites chilenas por crear Historia, y el tiempo y los recursos que disponen para ello, terminan por abrumar a los millones de chilenos y chilenas para los cuales la vida es tanto más prosaica e imperturbable.

Desde luego Chile necesita a su elite; pero una elite genuinamente moderna destina menos tiempo a la cosa pública. Esto se logra por un solo camino: ocupando más energía en la vida doméstica. Vale decir, a las cosas simples que hacen la vida de la gente corriente: cocinar, limpiar la casa, ayudar a los hijos en sus tareas, hacer las compras. Todo aquello que hace que la vida –incluyendo su dimensión pública– realmente funcione. Todo aquello que la elite chilena no hace.

La elite chilena, en efecto, presta escasa atención a la vida doméstica. Para ella la reproducción material de su vida personal y familiar es algo invisible. Ocurre automáticamente gracias a las esposas (en algunos casos), pero sobre todo gracias a la disposición de un servicio

doméstico relativamente barato y abundante. El machismo y/o las “nanas” (que es su extensión, así como la expresión más patente de las desigualdades sociales que imperan en Chile) es lo que permite a las elites locales volcarse sin límite ni remordimiento a la vida pública –hasta un punto en que la sociedad llega a sentirse acosada por la intensidad de sus iniciativas y disputas.

En esto la elite chilena difiere radicalmente de aquellas del mundo desarrollado. Por razones culturales, y también de recursos, esta tiende a hacerse cargo ella misma de la reproducción de su vida doméstica, con una distribución de la carga más igualitaria entre hombres y mujeres. Esto –en buena hora– les resta tiempo y energía para dedicarse a lo público, pero a su vez acerca a esa elite a la experiencia vital de la gente común. El saldo es beneficioso por partida doble.

Digámoslo así: lo que marca el límite entre una sociedad desarrollada y otra que no lo es, es el tiempo que sus elites le deben destinar a la vida doméstica. Cuanto más le destinan, mayor es su nivel de desarrollo.

Chile cuenta con una elite perfectamente cosmopolita en su capacidad empresarial, en su agenda política, en su reflexión cultural; pero en lo que se refiere al manejo de su vida privada, ella descansa sobre instituciones arcaicas, como es el trabajo doméstico encargado a esposas y/o “nanas”. En su caso, la modernidad es como una máscara que en los iluminados espacios públicos luce bien; pero cuando se entra al espacio claroscuro del hogar, debajo de esa máscara asoma el rostro real, el que presenta rasgos bastante primitivos.

Hasta ahora, el esfuerzo principal de la modernización chilena ha recaído en la gente común, que ha debido adaptarse al mercado, a la privatización de los servicios sociales, a las incertidumbres de la globalización. Ahora corresponde dar el salto a las elites. Son estas las que deben modernizarse. Esto pasa fundamentalmente por hacerse cargo ellas mismas de su vida doméstica. Con eso, automáticamente, lo público perderá –ya era hora– algo de su ancestral dimensión sagrada. Y con ello, la sociedad se volverá más abierta, más horizontal, más estable y más democrática.

Mujeres

Algo nuevo está sucediendo en Chile en esta materia. Lo ilustra el hecho de que dos mujeres, Soledad Alvear y Michelle Bachelet, hayan logrado ocupar los primeros lugares de popularidad entre las personalidades públicas, y que Bachelet se empine hoy en la opi-

nión pública como favorita para ocupar la Presidencia de la República.

¿Qué indica aquello? ¿Por qué los chilenos y chilenas han vuelto su mirada hacia las mujeres en el mundo de la política, dominado tradicionalmente por hombres? ¿Qué revela la mayor centralidad que están ocupando las mujeres en las empresas, en los sindicatos, en la actividad académica, en la sociedad civil?

La respuesta no es simple, y es probable que tenga al menos dos vertientes.

De una parte esto tiene que ver con los efectos silenciosos pero imparables de la progresiva inserción de Chile en los procesos de modernización y globalización. Como señala Anthony Giddens, "la globalización no tiene que ver sólo con lo que hay 'ahí fuera', remoto y alejado del individuo. Es también un fenómeno de 'aquí dentro', que influye en los aspectos íntimos y personales de nuestras vidas. (...) Los sistemas familiares tradicionales están transformándose, o en tensión, en muchas zonas del mundo, sobre todo al exigir las mujeres una mayor igualdad. (...) Esta es una revolución verdaderamente global en la vida diaria, cuyas consecuencias se están sintiendo en todo el mundo, en ámbitos que van desde el trabajo a la política".¹¹ Pues bien, Chile no está resultando una excepción en esta materia.

De otra parte, el auge de las mujeres dirigentes en los más diversos ámbitos de la sociedad chilena puede estar revelando que la población comienza a estar harta con el tipo de liderazgo que le ofrecen sus elites actuales, compuestas básicamente por hombres volcados obsesivamente a la cosa pública y disociados de la vida doméstica. Así, en organizaciones de la más variada naturaleza se está buscando un nuevo tipo de liderazgo; un liderazgo menos utópico y más cotidiano, menos dirigista y más acogedor, menos estructurante y más compasivo; en fin, un liderazgo comunitario, un liderazgo de tipo femenino.

Dos patrones de liderazgo

La literatura señala que hay una diferencia fundamental entre los patrones masculino y femenino de liderazgo. Conste que se habla de patrones de liderazgo, no de hombres o mujeres, pues cualquiera de ellos puede encarnar un tipo de liderazgo u otro.

¹¹ Anthony Giddens, *Un mundo desbocado, los efectos de la globalización en nuestras vidas*. (Madrid: Taurus, 2000): 24-25.

El primero, el masculino, tiende a ser racional, asertivo, instrumental. Se orienta a fines y objetivos definidos, se organiza en estructuras jerárquicas de poder y prestigio, se estructura a base de relaciones de transacción sustentadas en premios y castigos, y presenta como cualidades la agresividad, la ambición y el dominio, de una parte, y la independencia, la autonomía y la autosuficiencia de la otra.

El patrón femenino, en cambio, es más emocional, empático, comunitario. Menos instrumental y jerárquico, presta más atención al bienestar de las personas que conforman la organización que al funcionamiento de las estructuras. Tiende a compartir el poder, y por ello se esfuerza en incrementar la autoestima de los demás y en promover su participación. Es un liderazgo que presenta como cualidades el afecto, la voluntad de suavizar las experiencias dolorosas, la preocupación por los sentimientos de los otros, la expresividad emocional.

Los líderes masculinos tienden a concebirse a sí mismos desplegando relaciones de transacción con sus subordinados, basadas en premios y castigos subordinados al desempeño. El liderazgo femenino, en cambio, se caracteriza por los intentos para promover la participación, compartir el poder, energizar e incrementar la autoestima a los demás. De aquí que se considere el liderazgo femenino como más empático, más interactivo, más transparente, más democrático.

El patrón de conducción femenino ha sido usualmente asociado al liderazgo comunitario. Esto se explica porque las mujeres han sido tradicionalmente el género más cercano a los problemas cotidianos o domésticos, al vínculo cara a cara. Ellas son portadoras de atributos como la calidez, la amabilidad, la empatía. Cuando la ciudadanía demanda un liderazgo con cualidades femeninas –independientemente del sexo de quien lo ejerza–, lo que busca es un liderazgo de tipo comunitario.

El liderazgo comunitario centra su atención en los afectos y manifiesta una vocación a la dedicación a los otros, a la entrega de ayuda, a la preocupación por no herir sentimientos y generar simpatía. Tiene la capacidad de percibir los sentimientos ajenos, y se orienta al desarrollo de la empatía y de la expresividad emocional. Las mujeres suelen identificarse más con estas cualidades. Esto, porque las cualidades comunitarias son importantes en el desempeño exitoso de las actividades domésticas, a las cuales las mujeres han estado volcadas

históricamente. De ahí que los líderes femeninos suelen caracterizarse por promover la participación, por compartir el poder y la energía, y por fortalecer la autovaloración de los demás; todo lo cual algunos denominan liderazgo "transformacional".

Como señalan Huddy y Terkildsen, el liderazgo comunitario se inclina por los temas compasivos (*compassive issues*), pues se centra en el bienestar de las demás personas.¹² Pone el énfasis en el desarrollo de temas como las necesidades mínimas (alimentación, vestido, hogar), la lucha contra la pobreza, el respeto de los derechos civiles, la promoción de la educación, el cuidado infantil y de los adultos mayores, las políticas de fortalecimiento de la familia, las políticas de salud pública, el control de drogas, el sida, el medio ambiente, el bienestar social y el desempleo. Todos estos temas pertenecen a dominios sociales que tradicionalmente han correspondido a las mujeres, por lo que tiene lógica que se recurra a su liderazgo para hacerse cargo de ellos. El liderazgo femenino, no obstante —señalan estos autores—, sería menos hábil en temas que exigen la visión instrumental usualmente asociada al género masculino: es el caso, por ejemplo, del manejo de temas de defensa, diplomacia, fuerzas militares, comercio exterior, agricultura, control de armas, negocios y asuntos económicos, entre otros.

La valorización del liderazgo comunitario es una novedad para la mujer. Hasta hace muy poco, al incorporarse al mundo público, ella debía renunciar a su identidad y asumir las cualidades masculinas, y desarrollarlas al máximo para ser aceptada como un igual. Si bien esto se sigue dando, hoy también se observa la tendencia opuesta, a saber, que los hombres que ejercen o aspiran a ejercer posiciones de liderazgo se vean obligados a asimilar elementos femeninos para poder responder a la demanda por un liderazgo más comunitario. Esto conduce a que en la política actual se produzca la inclinación a que los líderes (hombres y mujeres por igual) adopten elementos propios del liderazgo del otro sexo para complementar la imagen que proyectan.

¹² Huddy, Leonie & Nayda Terkildsen, "Gender stereotypes and the perceptions of male and female candidates", *American Journal of Political Science* Vol. 37, Issue 1 (1993): 119-147.

Nueva época, nuevo liderazgo

Desde siempre Chile ha contado con un tipo de liderazgo masculino. Esto ha traído consigo muchos beneficios para el país. Entre estos cabe mencionar la fortaleza de sus instituciones, la orientación hacia la disciplina o la disposición a emprender grandes transformaciones económicas, sociales y políticas –como las que han tenido lugar en las últimas décadas, por ejemplo. Pero hay signos de que los chilenos están cansados de este estilo, con sus inevitables efectos: predominio de las instituciones por sobre las personas, frialdad y opacidad en la vida pública, falta de atención hacia las pequeñas miserias de la vida doméstica.

Cada época histórica demanda un patrón o tipo de liderazgo. Chile viene saliendo de un largo período dominado por el sentido de epopeya: la revolución, la contrarrevolución, la transición, el crecimiento. El liderazgo ha estado enfocado a la transformación de las estructuras y la estabilización de las instituciones. Más preocupado del juicio de la historia que de los sentimientos de las personas. Quizá no podía ser de otro modo: el estilo de liderazgo predominante ha sido distante, frío, teatral, opaco.

Pero el país ha entrado ahora a una nueva época –lo que aquí se llamó la “cuarta ruptura”. En esta, la demanda básica es mejorar la convivencia, elevar el bienestar, crear un sentido de comunidad. El liderazgo que se reclama, por lo tanto, debe facilitar las interacciones, expandir la energía, elevar la autoestima de las personas, y no simplemente fijarles metas y objetivos. Debe ser capaz de ofrecer cariño, compañía, compasión, con un estilo afectivo, horizontal, transparente.

En otras palabras, los chilenos desean dejar atrás un liderazgo de tipo masculino, que tiene la vista puesta más en los deberes ante la historia que en las vulnerabilidades y temores cotidianos de las personas concretas que necesitan atención. Lo que buscan es un nuevo tipo de liderazgo para una nueva época: un liderazgo empático, hospitalario, acogedor; que atienda la fragilidad de las personas antes que el equilibrio de las instituciones; más obsesionado por lo doméstico que por lo utópico; de la gestión que de la reforma o el cambio del sistema.

Lo que los chilenos desean, en suma, es un liderazgo comunitario. Y es por esto –no por otra razón– que hoy vuelcan su vista hacia un liderazgo femenino en los más diversos ámbitos de la vida social.

5. LA CUARTA RUPTURA

Las tres rupturas descritas —la del orden económico burocrático, la del orden político autoritario y la del orden cultural conservador— responden a un solo proceso, que se ha desplegado con notable continuidad, pese a los cambios políticos acaecidos en los últimos treinta años: la modernización de la sociedad chilena.

Lo que Chile ha experimentado, en efecto, es una trayectoria típica, de aquellas que describen como modelo los libros de texto: la maduración de los cambios en los campos socioeconómicos fue seguida por la liberalización política, la que fue sucedida por profundas mutaciones en el plano cultural, que envuelven valores, actitudes y conductas. Esta última etapa es la que ha tenido lugar durante la administración del Presidente Lagos, y por la que este, presumiblemente, será recordado.

Ahora bien, ¿qué es lo que viene ahora?, ¿cuáles son las demandas básicas de esta nueva sociedad, ya completado un largo trecho en su proceso de modernización?

El quiebre con la tradición que promueve la modernidad debilita las defensas ante la inseguridad y la incertidumbre. La expansión del mercado, y su tendencia a la desregulación, a la flexibilidad, a la competencia y al cambio constante, erosiona los sentimientos de solidaridad y comunidad. Esto tiene efecto sobre las instituciones —entre otras la familia—, que se hacen más porosas y ofrecen por tanto un vínculo más débil y menos permanente, lo que conduce a un individuo aislado y desconfiado, cada vez más obsesionado por la búsqueda de protección ante un ambiente que percibe como amenazante. Esta búsqueda lo conduce a recluirse en la intimidad y a rehuir los espacios públicos.

Nada de lo anterior, sin embargo, logra frenar el miedo ni poner coto a los sentimientos de desprotección, inseguridad e incertidumbre. Esto ha conducido, en las sociedades que ya han experimentado avanzados procesos de modernización, a la revalorización de los vínculos comunitarios; esto es, de aquellas redes que unen a los individuos a partir de un conjunto compartido de valores, normas y significados, dando lugar a una historia y a una identidad comunes. El resurgimiento de los temas ligados a la familia y a la nación, a la responsabilidad de la empresa, al sentido moral de la educación, en fin, a la refundación de las bases éticas de la convivencia, ilustran esta nueva tendencia comunitaria.

Lo anterior parece darle la razón a Amitai Etzioni, cuando señala que después de un largo período en el cual “la celebración de sí mismo (*self*) se transformó en una virtud”, ha llegado el tiempo en el que el péndulo vuelve atrás. “El tiempo llama –señala Etzioni– a una era de reconstrucción, en donde pongamos un nuevo énfasis en el ‘nosotros’, en los valores que compartimos, en el espíritu de comunidad.”¹³

Tímidamente todavía, la sociedad chilena de hoy parece haber entrado a este nuevo tiempo, donde el péndulo vuelve atrás. Después de las rupturas con el orden burocrático en los ochenta, con el orden autoritario en los noventa y con el orden conservador a comienzos de los dos mil, en el seno de la sociedad chilena se está engendrando una cuarta ruptura: la ruptura con el orden individualista-mercantilista.

Esa cuarta ruptura no está dirigida contra la modernización, el mercado o la individuación, pero sí contra el individualismo mercantilista, que es algo así como la perversión por exceso de la modernización, pues socava los valores, certidumbres y proyectos comunes en los que se funda cualquier orden social. La trascendencia de esta ruptura no será menor que la de las tres precedentes. De hecho, hay numerosas evidencias de que la sociedad chilena anda en búsqueda de vínculos comunitarios que le provean de más calor humano. Esto es lo que revela la expansión del voluntariado o la emergencia de liderazgos femeninos, como el de Michelle Bachelet.

En su último estudio, dedicado al poder, el PNUD señala que hoy los chilenos “quieren ser protagonistas (...) no meros espectadores o beneficiarios”. En otras palabras, lo que quieren son más comisiones donde se les escuche, no más decisiones impuestas desde arriba. Por esto les gusta Bachelet, porque es como un espejo que devuelve el poder a las personas, con un liderazgo interactivo, horizontal, que en vez de fijar metas y objetivos hace crecer la autovaloración y la energía de los demás.

Pero la cuarta ruptura se manifestará más profunda y extensivamente en los años que vienen. El nuevo período se caracterizará por una nueva demanda comunitaria, orientada a conseguir protec-

¹³ Amitai Etzioni, *The Spirit of Community: The Reinvention of American Society* (New York: Touchstone, 1993): 25.

ción y certidumbre frente al frenesí del mercado, y donde lo que se busca ya no es el aislamiento individualista sino el vínculo afectivo y asociativo.

MARCEL THEZÁ

Magister y doctor en ciencia política de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Posee un diplomado en política comparada y relaciones internacionales de la misma universidad. Actualmente es jefe del Departamento de Coordinación Intersectorial del Instituto Nacional de la Juventud y profesor de la Universidad Católica de Valparaíso. Fue presidente de la Federación de Estudiantes de dicha universidad porteña.

LISANDRA MUÑOZ

Profesora de castellano e investigadora en temas vinculados a jóvenes y transformaciones culturales en el Instituto de la Juventud.

EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO: NUEVAS Y CLÁSICAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN

MARCEL THEZÁ
LISANDRA MUÑOZ

INTRODUCCIÓN

Reflexionar sobre la importancia del movimiento estudiantil chileno en el marco de las transformaciones que tanto nuestro país como la política han experimentado en los últimos años, nos invita a revisar la antigua forma de entender la relación entre universidad, elite y sociedad.

En rigor, han cambiado los movimientos y sus actores, ha cambiado la noción de temporalidad —tan asociada a ciertas escatologías que otorgaban carácter de proyecto a las demandas de los estudiantes—, han cambiado los procesos de formación y reclutamiento de la política, pero también ha cambiado el papel de la universidad como tradicional y nítido espacio republicano de formación de ideas y de agentes responsables de llevarlas a cabo.

Se entenderá, entonces, el hecho de que no resulte fácil traducir, en un breve artículo, un conjunto de factores que dan sentido y explican las características de un nuevo movimiento estudiantil, cuyas lógicas de articulación se alejan y diferencian de aquellas a las que estuvimos acostumbrados durante décadas. Por ello, intentaremos más bien explicar un cierto tránsito que el mundo estudiantil universitario ha vivido en los últimos años, poniendo un especial acento en el contexto en el cual hoy le corresponde articular su relato y también en las dificultades y tensiones que determinan los desafíos que deberá afrontar a futuro.

En una entrevista efectuada por Ana Tironi y Eduardo Valenzuela a Felipe Herrera, importante exponente de la generación de los años cuarenta en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, él afirmaba lo siguiente:

nosotros estábamos en una posición más provinciana, si se quiere, pero más convencidos de que íbamos hacia un mundo mejor, y que se daban

en Chile las condiciones para que ese mundo fuera mejor. Estábamos ciertos, también, de que cuando llegáramos a la edad adulta –y eso es lo importante– estaríamos capacitados para ser hombres de cierta proyección personal. Eso no quiere decir que buscáramos –como hoy en día lo hace un gran porcentaje de personas– “el enriquecimiento”. ¡No!, yo me atrevería a decir –y esa encuesta la hacíamos entre los compañeros de curso– que los que aspiraban a enriquecerse no eran más de un diez o veinte por ciento. El resto aspirábamos a que en el futuro, una vez recibidos de abogados y de profesores, pudiéramos dedicarnos a la vida académica, a la política, a escribir o, en general, a desarrollar una función social.¹

El testimonio de Felipe Herrera pone en evidencia el optimismo proyectivo desbordante que tenía una generación, cuyas certezas de la consistencia de sus proyectos y de su inclusión futura en la vida política del país los ponía en un escenario de enorme privilegio. Por una parte, representaban a una cierta elite cuya formación universitaria se distinguía con creces de la media de escolaridad de la población de la época y, por otra, nutrían los cuadros militantes de los partidos que dibujaban y caracterizarían por largo tiempo el sistema político chileno.

Por el momento, quedémonos con la idea de que la generación que hoy nos corresponde analizar más en detalle no tiene la posibilidad de vivir esas convicciones: desde la perspectiva societal, la bien o mal llamada posmodernidad impregna la vida de un sentimiento de riesgo y de una incapacidad de administrar el futuro; la explosión de la cobertura educacional –en especial de la educación superior– reconfigura y problematiza el carácter de elite de quienes se benefician de ella; y, consistente con estos fenómenos, la eventual participación en el movimiento estudiantil no es garantía absoluta de una iniciación propedéutica en la política militante.

GENERACIÓN DE LOS AÑOS 90: PROLEGÓMENOS DE LA TRANSFORMACIÓN DE UN NUEVO SIGLO

Correspondió a esta generación de dirigentes estudiantiles el desenvolverse en una etapa compleja de la realidad nacional: el país había recuperado el funcionamiento de sus instituciones democráticas y en

¹ Felipe Herrera, *Experiencias universitarias: escenarios nacionales e internacionales* (Santiago: Pehuén, 1985): 27-28.

el ambiente país se apreciaba como muy latente un conjunto de expectativas, anhelos y demandas acumuladas durante el régimen militar. Este fenómeno también alcanzó a la población universitaria que se había convertido en un actor relevante y fundamental en la conducción de la lucha política contra el general Pinochet.

En estos años, tres fueron los elementos que tuvieron una incidencia directa sobre el movimiento estudiantil:

- Primero, se expresa una fuerte demanda de los estudiantes que buscan, de manera rápida, respuestas del gobierno frente a la situación general del sistema universitario, en relación a cuestiones que iban desde definiciones del rol de la universidad en una nueva sociedad democrática hasta aspectos más vinculados a la administración institucional y al sistema de financiamiento asociado. Como los estudiantes universitarios habían confiado en la conducción de la Concertación de Partidos por la Democracia –lo que se apreciaba en la composición de las federaciones de estudiantes–, los plazos para exigir el cumplimiento de los compromisos efectuados serían inobjetablemente breves.
- Segundo, esta realidad se enfrentó a una fuerte legitimidad del gobierno que en aquellos años tuvo la capacidad de disminuir el conflicto social sólo sobre la base de la imposición de la autoridad. Nos referimos a un momento en el cual tanto los actores políticos como una gama variada de dirigentes sociales no tenían la intención de provocar complicaciones a un gobierno que después de diecisiete años reiniciaba con normales dificultades estructurales el camino del reencuentro democrático y de la normalización institucional. Este aspecto no es menos relevante, debido a que se constituyó en una variable que impuso tensiones al interior de los dirigentes estudiantiles, en su gran mayoría militantes de partidos de la Concertación. Surge, por lo tanto, un punto de fricción esencial referido a la naturaleza, sentido y alcance del concepto de lealtad en su dimensión gremial y en su dimensión política. Este quiebre fue muy recurrente en aquellos años y es todavía difícil poder analizar objetivamente los efectos que las posiciones que se fueron adoptando tuvieron en relación a la continuidad de los referentes políticos tradicionales en la conducción del movimiento estudiantil.
- Tercero, se apreció una deliberada y consistente delegación de la representatividad política a los actores tradicionales y formales; nos referimos sobre todo a aquellos que son parte de la diada gobierno-Parlamento. La sociedad confiere la responsabilidad de

administrar los asuntos públicos a aquellas personas que asumieron funciones parlamentarias o de gobierno. Este fenómeno implicó un claro decaimiento general de los procesos de participación. En Chile se inició la recuperación democrática a través del "No"; se eligió Presidente a Patricio Aylwin, normalizando la historia política de nuestro país; pero, como elemento negativo, se delegó casi en exclusividad en los mandatarios la responsabilidad de administrar restrictivamente el funcionamiento de la democracia. Este aspecto también tuvo efectos concretos sobre el desarrollo y visibilidad pública de los dirigentes estudiantiles, puesto que la condición de tales no constituyó ninguna garantía de privilegio al interior de la actividad partidaria. Muy por el contrario, lo que se apreció en los primeros años de advenimiento democrático fue un regreso orgánico y corporativo de antiguas generaciones que ocuparon los espacios de visibilidad que la política ofrecía. Al reflexionar sobre la generación de dirigentes inmediatamente anterior, en su artículo "Problemas y desafíos en la participación política de los jóvenes",² Manuel Antonio Garretón señala:

Asociado al carácter represivo del régimen militar, está el profundo cambio al interior del movimiento estudiantil universitario. Si en épocas anteriores este tenía asegurado un puesto en la elite dirigente del país y sus dirigentes eran futuros miembros de la clase política, bajo el régimen militar el dirigente pasa a ser un paria o marginal de la sociedad, siendo su futuro más probable el ser exiliado, relegado, preso o simplemente expulsado. Y el estudiante universitario común pasa a tener un horizonte incierto en el campo laboral o profesional, rasgo que caracteriza hasta hoy la condición estudiantil. (8)

Los factores que hemos descrito dan origen a un nuevo fenómeno que caracterizó los primeros años de la década de los noventa: nos referimos a "la corporativización" del discurso estudiantil. De esta manera, el relato, antes eminentemente político, comienza a dar paso a un lenguaje cada vez más lleno de contenidos de orden gremial.

La estrategia que entre los años 82 y 87 había puesto el acento en el desafío de contribuir desde la universidad a la derrota del régimen militar, poco a poco empieza a articular un mosaico de microdemandas recogidas al interior de la propia comunidad universitaria. Aquí no

² M.A. Garretón, "Problemas y desafíos en la participación política de los jóvenes," *Serie Estudios Sociales 17, Documentos de Trabajo FLACSO* (1991).

hacemos referencia a un cambio radical y violento que hubiese alterado tanto la condición de militantes de partidos políticos de la gran mayoría de los dirigentes estudiantiles; más bien aludimos a un momento en el cual comienzan a surgir en el discurso de los estudiantes los primeros pruritos de exigencias respecto a la compleja situación institucional que hasta el día de hoy vive gran parte de los planteles universitarios. Surgen entonces los debates sobre la calidad de la educación, su pertinencia, la dimensión curricular, el sistema de financiamiento; todos, elementos asociados fundamentalmente a las fronteras internas de los planteles de educación superior.

Bajo ningún aspecto podríamos afirmar con esto que dichos temas no hayan estado presentes en generaciones anteriores, sino más bien podemos clarificar que, en particular a partir de fines de la década de los ochenta, estos factores surgen como connaturales de los respectivos programas de gobierno estudiantil. Pareciera, por lo tanto, que este elemento no es un detalle, ya que comienza a configurar y definir lo que con posterioridad se conocerá como "candidaturas gremiales", "candidaturas independientes", "candidaturas alternativas a los partidos", entre otras denominaciones.

De la misma forma, ya es evidente que a partir de los años noventa la percepción de los jóvenes hacia la política y sus instituciones había cambiado. Los proyectos personales configuran una nueva asimetría respecto de los proyectos de orden más colectivo; de igual forma, y utilizando la terminología de Norbert Lechner, comienza el fin del "primado de la política".³

Hasta fines de la década del noventa, gran cantidad de jóvenes al interior de las universidades había asumido una relación de activa participación junto a sus orgánicas estudiantiles; esto, todavía bajo la percepción de que la derrota de la dictadura militar implicaba una cierta epopeya frente a la cual no se podía ser indiferentes, cuestión que dotaba de heroísmo al mundo estudiantil. Este cuadro se altera y la relación estudiantes-institucionalidad estudiantil adquiere una dimensión más funcional, que es coherente con un fenómeno donde el "proyecto personal" empieza a concentrar las prioridades del sujeto⁴

³ Ver Lechner Norbert, "Ética y política: hacia una relación conflictiva," *Documentos ILADES* 14 (1993).

⁴ Resulta interesante el comentario del ex ministro de Justicia de la administración Aylwin, Francisco Cumplido, quien, en una charla ofrecida en aquellos años a estudiantes a través de la Corporación Justicia y Democracia, señaló, a modo de anécdota, que en su calidad de profesor universitario había constatado

y donde el interés por las formas clásicas de organización –junto a sus instituciones– comienza a cambiar drásticamente.

TRANSFORMACIONES DE UN NUEVO SIGLO: EL IMPACTO
SOBRE EL MUNDO JUVENIL

El cambio en la sociedad

Vivimos en un mundo afectado por cambios sociales, estructurales y culturales profundos y múltiples; la llamada globalización ha afectado no sólo las relaciones sociales económicas y de producción, sino también el campo de las comunicaciones, los mensajes (información, redes virtuales, medios de comunicación de masas, entre otras) y las relaciones de los individuos con su propia biografía y con la sociedad.

En efecto, los grandes problemas vitales de nuestras sociedades están permanentemente afectados por estas mutaciones y uno de ellos es precisamente la tensión que se genera entre el “mundo vivido” y el “sistema”, el divorcio relativo entre el individuo concreto y la sociedad en que vive. La legitimidad de la competencia y del consumo tienden a hacer creer que (casi) todo está permitido: llamado a la libertad, a la elección, al libre arbitrio, a la autonomía, a la creatividad, a la pluralidad de los modos de vida, a la realización personal, al placer, al goce, al hedonismo. Pero los informes y estadísticas de desarrollo de las sociedades reportan lo contrario, y así se anida la sensación de que (casi) nada es posible: ascenso de las desigualdades y de la exclusión social, cesantía, peligros ecológicos, inseguridad, racismo, amenazas de guerra, sida, destrucción de las solidaridades, soledad.⁵

En su camino hacia la modernización, el sistema económico provoca precariedad y exclusión más rápidamente que las políticas sociales dispuestas para la inclusión de los sectores más pobres. Para aquellos que no poseen los llamados “capitales sociales” (relaciones, dinero, diplomas, habilidades sociales, acceso a bienes y servicios, cultura, y otras) acomodarse a estos cambios y a la incertidumbre

que muchos estudiantes no permitían que sus compañeros les copiasen en las pruebas y exámenes. Según él, esto no se estaría produciendo por una consideración ética, sino por la convicción de que en la medida en que “si a mi compañero de curso le va mal en sus exámenes, mayores posibilidades de éxito tengo yo en el futuro”. Cumplido ponía énfasis en un fenómeno que, a su juicio –y a base de su experiencia como docente–, era emergente.

⁵ Sobre este tema, ver Guy Bajoit, *Le changement social: approche sociologique des sociétés occidentales contemporaines* (Paris: Armand Colin ed., 2003).

que ellos generan es mucho más difícil. De ahí la tensión en el sistema social en general y en los campos que lo conforman.

Por otro lado —y como cada vez se afirma más intensamente—, se convoca a las personas a una ciudadanía más activa, participativa y descentralizada, fundada sobre el derecho de los individuos a la autonomía y a ser sujetos de su existencia; no obstante, este llamado entra en contradicción con un sistema político tradicional, en extremo subordinado a la esfera funcional de la economía y caracterizado por partidos que convocan cada vez a menos personas; esto lo observamos en especial en el comportamiento de la población más joven (el 85% de los jóvenes chilenos no reconoce ningún tipo de identificación con un partido político).⁶

Así, en este contexto de nuevas referencias socioculturales, constituye un elemento clave la identificación de estrategias para el acceso a recursos y la inclusión social. En esta búsqueda, la actualización de los vínculos sociales (familia, vecinos, barrio, amigos, pares, comunidad) ofrece una oportunidad de desarrollo importante. Ellos generan relaciones de protección y apoyo basados en las estrategias de intercambio con los otros. De allí la aparición de nuevas formas de acción y de actores colectivos, los cuales operan bajo parámetros que suponen altos niveles de autonomía y con una acentuada relación de interdependencia y solidaridad entre ellos.

LOS NUEVOS ACTORES JUVENILES Y LAS NUEVAS FORMAS DE ACCIÓN COLECTIVA EN LOS JÓVENES CHILENOS

Si bien es cierto que el sentimiento de incertidumbre junto a las tensiones que generan las nuevas transformaciones sociales y culturales afecta a todas las edades, es a los y las jóvenes a quienes parece afectar con mayor intensidad; lo anterior, ya sea en la manera de reaccionar frente a aquellas o en las múltiples formas de administrar dichas tensiones. Esto, porque es en la juventud donde se produce con mayor intensidad la interacción entre las tendencias individuales, las adquisiciones psicosociales, las metas socialmente disponibles y las fortalezas o amenazas del entorno.

En efecto, la presencia masiva e interventiva de los medios de comunicación, que se constituyen en privilegiadas agencias de socia-

⁶ Cuarta Encuesta Nacional de Juventud, "La integración social de los jóvenes en Chile 1994-2003" del Instituto Nacional de la Juventud (Santiago, 2004).

lización juvenil; las nuevas herramientas tecnológicas de información, que cumplen un rol fundamental en la comunicación individual y colectiva de los jóvenes; las lógicas hedonistas y el apego al espacio privado, que se traduce en el *carpe diem* y el bienestar afectivo y emocional; el llamado al éxito y la autorrealización traducido en la búsqueda por hacerse un lugar en la sociedad; el rechazo al valor intrínseco de las normas y la desconfianza hacia el mundo adulto, predominando por sobre estos la preocupación por ser “uno mismo/a” y “ser libres”; la amenaza de la exclusión, el estigma y la discriminación de sectores populares, traducida en el desarrollo de diversas acciones autogestionadas en pos de la visibilidad y transformación social; todos estos factores van a afectar e influir directamente en el despliegue de las nuevas identidades individuales y colectivas.

En este sentido, asistimos a un nuevo paradigma de participación juvenil,⁷ totalmente distinto al tradicional. Mientras que en la década de los ochenta los referentes colectivos y actores sociales se vinculaban al mundo del trabajo y la producción en torno a códigos ideológico-políticos, ahora se construyen en torno a espacios de acción relacionados con la vida cotidiana y la actualización de los vínculos sociales (familia, vecinos, comunidad); mientras que en la década de los ochenta los contenidos reivindicativos se relacionaban con la mejora de las condiciones de vida, ahora se estructuran en torno al ejercicio de los derechos (en la educación, la sexualidad, el desarrollo personal, etcétera); y mientras que en el pasado los valores predominantes tenían una impronta mesiánica y global, hoy están más vinculados con el aquí y el ahora; mientras que en el pasado la participación era altamente institucionalizada y jerárquica, hoy se reivindican los espacios de participación horizontales y las redes como estructuras sociales informales de comunicación y organización, más flexibles y temporales.

LOS NUEVOS ACTORES JUVENILES EN LOS MOVIMIENTOS SOCIALES ACTUALES

Habiendo señalado anteriormente que los niveles de participación de los jóvenes en el movimiento estudiantil han descendido, este fenómeno tiene además como correlato una clara fragmentación tanto de los grupos de representación del movimiento estudiantil como de

⁷ Leslie Serna, “Globalización y participación juvenil,” *Revista de Estudios sobre Juventud-Jóvenes* Cuarta Época Año 5 (1998).

los intereses que ellos comienzan a articular. No se aprecia, en ese escenario, un conjunto nítido y articulado de demandas que otorguen homogeneidad corporativa a las exigencias estudiantiles. La antigua "discursividad" estudiantil de "la universidad por la reforma", "universidad para todos", "arancel diferenciado", "universidad por la democracia", entre otros lemas, da paso a un abanico actual mucho más amplio y fragmentado de demandas estudiantiles.

Según Boaventura de Sousa Santos, la novedad más grande de los nuevos movimientos sociales reside justamente en que constituyen tanto una crítica de la regulación social capitalista como una crítica de la emancipación social socialista, tal como fue definida por el marxismo. Al identificar nuevas formas de opresión que sobrepasan las relaciones de producción y ni siquiera son específicas de ellas —como la guerra, los derechos, la polución, el machismo, el racismo o el productivismo—, y al abogar por un nuevo e indefinido paradigma social menos basado en la riqueza y en el bienestar material, se denuncian, con una radicalidad mayor, los excesos de regulación de la modernidad. Tales excesos alcanzan no sólo el modo como se trabaja y produce, sino también el modo como se descansa y vive; la pobreza y las asimetrías de las relaciones sociales son la otra fase de la alienación y del desequilibrio interior de los individuos; finalmente, esas formas de opresión no alcanzan específicamente a una clase social y sí a grupos sociales transclasistas o incluso a la sociedad en su conjunto.⁸

La organización de la acción colectiva ya no responde, por lo tanto, a una mera articulación clásica entre Estado y sociedad (Estado como interlocutor y referente de las demandas sociales), ni tampoco está necesariamente orientada a proyectos de cambio social globales, donde predomina la dimensión estructural por sobre el actor y la acción. Por el contrario, las nuevas organizaciones y actores sociales tienden a configurarse en torno a la explosión de identidades adscriptivas o comunitaristas basadas en el sexo, la edad, la religión, las etnias, el género, la ecología, el antirracismo, los derechos humanos, etcétera.

Dentro de este contexto se da la composición de los nuevos movimientos juveniles de nuestro país, articulados más bien en demandas o temáticas específicas y en el establecimiento de microrredes flexibles que suponen la cooperación voluntaria y las estrategias de intercambio con los otros a base de intereses culturales o bien identitarios.

⁸ Boaventura de Sousa Santos, "Los nuevos movimientos sociales," OSAL 5 (sep. 2001).

La acción social

Emergen nuevos repertorios de acciones sociales, descentralizadas, impulsadas y coordinadas espontáneamente, articuladas principalmente en momentos de coyuntura. Su eje articulador está en el sentido que asume dicha acción y la mayor parte de las veces esas acciones sociales están centradas en demandas específicas y formas de protesta instrumentales. A diferencia de aquellos tipos societales tradicionales que se vinculaban en el pasado a grandes proyectos político-ideológicos, los nuevos movimientos juveniles redefinen su historicidad al incorporar la lucha cultural para construir identidades colectivas mediante la articulación de nuevos escenarios y proyectos, sin que necesariamente participen corrientes políticas e ideológicas.

Formas de organización

Las nuevas estructuras y dinámicas organizacionales son horizontales y antiburocráticas, y su liderazgo es rotativo y circunstancial. Su instrumento de participación es la asamblea y su sistema de liderazgo es el de múltiples voceros públicos.

De la protesta ocentera a la expresividad cultural juvenil

Las manifestaciones masivas de los estudiantes son representadas por prácticas de resistencia que interrelacionan prácticas de la lucha callejera de la década de los ochenta (barricadas, tomas de los establecimientos, discursos encendidos sobre la educación pública) y nuevas formas de acción donde se muestra la creatividad juvenil a través de diversas expresiones artístico-culturales: marchas-carnavales, fiestas, “funerales de la institucionalidad”, “marcha de los excluidos”, estrategias comunicacionales de alto impacto público, discursos sociales irónicos, performances de ridiculización de la política tradicional, eventos musicales, bailes y otras actividades culturales.

Las tecnologías de la información y la comunicación

Tales son herramientas fundamentales que vienen a modificar los espacios temporales y espaciales en donde se construye el movimiento juvenil. Dichas tecnologías son las que articulan y conforman el entramado de la comunicación horizontal y las funciones de las relaciones simbólicas para la organización del movimiento y las acciones masivas. Facilitan los contactos interactivos entre las diversas redes heterogéneas y democratizan las decisiones (chat, foros, comunidades virtuales, et-

cétera), transformando las modalidades de acción colectiva y, por tanto, la configuración de las identidades sociales y comunitarias.

TRANSFORMACIONES SOBRE LA UNIVERSIDAD:
UN NUEVO ESCENARIO INSTITUCIONAL

Nos hemos referido a las transformaciones experimentadas por la sociedad, transformaciones que han sido de una gran intensidad, en particular durante las últimas dos décadas. No obstante aquello, este análisis no sería completo si no efectuásemos también alguna referencia a las modificaciones que ha vivido el mundo de la educación superior, cuestión que contribuye a dar una lógica y un sentido al cambio de paradigma que experimenta el mundo estudiantil.

Si por muchos años se hizo referencia a un mundo universitario, fundamentalmente asociado a la educación pública, formador de elites, con presencia –a lo menos simbólica– en la vida nacional, hoy se aprecian mutaciones que bajo ningún aspecto son inocuas.

Al relatar una cierta transitología en la historia del sistema universitario en Chile, Agustín Squella⁹ nos habla de una universidad tradicional pública que, siendo “sobreprotegida” en la década de los años sesenta y anteriores, gozó de los privilegios de un Estado que, proporcionando todos los recursos para su funcionamiento, no solicitaba mayor cuenta ni de sus usos ni de los resultados obtenidos.

Con posterioridad se vivió la experiencia de una universidad que a través de los procesos de la reforma y lo que sigue a ella fue “utilizada” por los partidos como un espacio estratégico de medición de fuerzas y como un barómetro de la adhesión de los conglomerados y coaliciones. Al respecto, recurrente fue el mito de que la elección de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile tenía la capacidad de anticipar los procesos políticos que se desarrollarían en el país.

Mientras durante la dictadura militar la universidad fue un espacio “intervenido”, hoy más bien se presenta como un sector “desasistido”, puesto que objetivamente en los últimos años muy pocos podrían afirmar que haya existido por parte del Estado la intención de disponer de los instrumentos jurídicos y financieros requeridos para su pleno desarrollo y normalización.

⁹ Ver Agustín Squella, “Universidades: en busca del escepticismo vital”, intervención en el Programa Escuela de Líderes Generación Bicentenario, Fundación Chile XXI (Santiago, junio de 2003).

Independiente de la connotación que le demos a esta realidad, y de los efectos positivos y negativos que esto pueda implicar, vale la pena detenerse en ciertos aspectos que –siendo consecuencia de este cuadro general que hemos descrito– están absolutamente asociados al tema que da sentido a este artículo:

- La universidad, tradicionalmente llamada a ser “conciencia crítica de la sociedad”, hoy pareciera tener, en forma objetiva, otras preocupaciones. La exigencia de la buena administración y de una rápida incorporación a la lógica de la competencia de mercado, la ha volcado a la “reflexión” y resolución de sus propios puntos críticos más que a la colaboración –así sea retórica o normativa– de lo que se denomina de manera grandilocuente un “proyecto de sociedad”. La universidad actual no es la misma que la que existía hace tres o dos décadas en el país y lo lógico es que ello tenga efectos sobre el movimiento estudiantil.
- Coherente con lo anterior, y puesto que en la actualidad la universidad se asocia más a una idea de inversión relativa al desarrollo de un proyecto personal, aumenta la convicción de que a la universidad se va a estudiar y que sólo eso es lo importante. Las externalidades en relación con la construcción de vivencias, el fortalecimiento de una noción de *ethos*, la observación de la realidad, la socialización política, entre otras experiencias, empiezan a perder importancia.
- Otro aspecto importante es la consecuencia del fuerte aumento de la cobertura educacional, en especial de la educación superior. Si en 1994 el 24% de la población joven entre 18 y 24 años acudía a establecimientos de educación superior, hoy esa cifra se eleva a más del 37%.¹⁰ Este fenómeno, por lo demás, releva la paradoja de que, a pesar del acceso de los jóvenes a los establecimientos de educación superior, ello –a diferencia de las generaciones precedentes– no es garantía efectiva de su inclusión en el mundo laboral.¹¹ Se tiene más educación, pero eso no es garantía lógica de materialización de un proyecto personal plenamente estable y seguro.

¹⁰ Datos CASEN 2003, Mideplan.

¹¹ Ver “La juventud en Iberoamérica: tendencias y urgencias,” CEPAL-OIJ (Santiago, 2004).

REFLEXIONES SOBRE ALGUNOS DESAFÍOS DEL
MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

Lo expuesto anteriormente permite empezar a configurar un conjunto de tensiones que este artículo no tiene la pretensión de presentar como una pauta exclusiva y excluyente de aspectos que el movimiento estudiantil debiese resolver; más bien, contribuye a dotar de cierta perspectiva de análisis los procesos y formas de participación que los jóvenes se están dando en la educación superior:

1. *Relación entre grupo estudiantil y actor estudiantil*: Si aceptamos la definición clásica de que actor es tanto el individuo o la colectividad organizada capaz de desarrollar acciones para construir su historia o para adaptarse a las circunstancias, y que, a la vez, el actor es identificable en la medida en que se distingue de los otros y en cuanto posee una cohesión interna suficiente para poder hablar a partir de un "yo" o de un "nosotros", correspondería –en el caso del movimiento estudiantil– hacer una distinción entre lo que es actor propiamente tal y lo que más bien serían grupos de estudiantes. Nuestra impresión es que, en particular en el caso del mundo estudiantil –cuestión que por lo demás es debatible para el conjunto de la sociedad dada su baja densidad participativa–, lo que apreciamos son grupos de estudiantes que se organizan sobre la base de algunos intereses similares –aunque diversos y heterogéneos dependiendo de los grupos–, pero que están desprovistos en cuanto tales de una capacidad de acción que les permita tener un mayor impacto sobre la sociedad. Se abre entonces la interrogante de si en el actual esquema de organización más funcional y más fragmentado, el mundo estudiantil podrá constituirse en un actor, entendido como forma más institucionalizada de un grupo o de grupos, capaz de construir un discurso de orden más político y con un impacto claro en la sociedad. A lo menos queda planteada esa interrogante.
2. *Relación entre la asociatividad juvenil v/s la asociatividad juvenil universitaria*: Habiendo sido el espacio universitario un campo de formación y de experimentación de la política tradicional –lo que contribuyó a dotar de una cierta identidad al funcionamiento del movimiento estudiantil como tal–, hoy más bien se aprecia una especie de homologación de las formas de participación que los jóvenes se están dando en distintos niveles, sean estos universitarios o no. Las características que hemos descrito y que tienen que ver con los repertorios de las acciones sociales, con las formas de

organización, con la emergencia de nuevas expresividades culturales y con el uso de nuevos instrumentos de comunicación, parecieran estar provocando un acelerado debilitamiento de la distinción entre los modos de asociatividad universitaria y la asociatividad juvenil, en términos más universales. Luego, un aspecto a definir por los actores del movimiento estudiantil es la posibilidad de una efectiva reconstrucción de una identidad más propia que le caracterice y le brinde una dimensión más corporativa.

3. *Relación entre dirigentes orgánicos y dirigentes gremiales:* Como lo hemos afirmado, el surgimiento de un discurso de orden más corporativo tiene ya sus primeros antecedentes a fines de la década de los ochenta. Sin embargo, pareciera que estos componentes se han ido acrecentando sin que ello tenga consecuencias en la profundización de esa dimensión gremial. Nace y se desarrolla un nuevo tipo de dirigente estudiantil más pragmático que debe administrar un conjunto diverso de intereses de orden más funcional y transitorio; intereses que, si bien no borran absolutamente los planteamientos de orden más general, no logran construir un cuerpo ordenado de ideas permanentes en el tiempo. En este escenario, las tradicionales juventudes políticas experimentan serias dificultades para lograr equilibrar un relato atractivo que pueda incorporar estos “nuevos intereses”, articulándolos con aquellos que son propios de una propuesta programática partidaria. La interrogante en este punto es si desde el mundo de los partidos políticos existirá la voluntad y la capacidad para construir un planteamiento hacia el mundo universitario y de qué manera ello podrá expresarse a través del discurso de sus dirigentes. Si este planteamiento no es capaz de responder a aspectos que derivan de las transformaciones de la identidad juvenil en nuestro país, lo más previsible es que se profundice esta diferenciación entre dirigente político clásico y dirigente gremial emergente.
4. *Relación entre política y universidad:* No sólo la sociedad se ha despolitizado, la universidad también. La política ha desplazado sus intereses hacia otros campos y eso también tiene incidencia en la configuración del movimiento estudiantil. Es un hecho que la política hoy no recluta preferentemente en el mundo universitario, ni tampoco ofrece un espacio de desarrollo a aquellos militantes que ejercen su actividad en ese medio. Surge, por lo tanto, esta gran interrogante entre el discurso político tradicional y las nuevas dinámicas de funcionamiento de la asociatividad juvenil.

Luego, un fenómeno a evaluar es si de esa relación podrá surgir una nueva politicidad que dote de un nuevo sentido y contenido al movimiento estudiantil.

5. *Relación entre universidad y sociedad: el problema de la ciudadanía:* Como lo hemos afirmado anteriormente, la llamada posmodernidad ha provocado en el sujeto un fenómeno de individuación donde la autoafirmación identitaria irrumpe como nuevo mecanismo de instalación en lo público. A esto también se suma una mayor diferenciación social que pone en el centro del debate los temas relativos a la diferencia y a la diversidad. Luego, las demandas dejan de ser únicas, homogéneas y sólo centradas en la clásica relación entre el individuo y el Estado.

¿Cómo podría, entonces, enfrentar la universidad, y más específicamente el mundo estudiantil, este fenómeno? Sin lugar a dudas, la respuesta no es sencilla, puesto que en esta articulación se combinan instituciones con historia, fenómenos que son recientes y que no han sido debidamente descifrados, y definiciones de orden institucional que sin fracturar totalmente la relación entre la universidad y su entorno, incorporan signos de interrogante cuando evaluamos la pertinencia y la oportunidad con que ellas responden a cambios que se orientan en diversas direcciones.

Quizás un elemento que pudiese provocar y promover los puntos de conexión es precisamente el desafío de construcción de ciudadanía. A pesar de todas las transformaciones que la universidad ha experimentado en las últimas décadas, ella aún constituye un espacio posible para el acceso y adquisición de mecanismos simbólicos y funcionales de ejercicio de la participación. Como lo afirma Agustín Squella, la universidad es una institución vieja y resistente, capaz de combinar tradición y cambio.

Pensamos que en la redefinición de los desafíos de fortalecimiento de la ciudadanía, el movimiento estudiantil puede encontrar un espacio que permita modificar la imagen de los estudiantes como exclusivos destinatarios del proceso educativo para convertirlos en actores estratégicos del mismo, orientando este proceso a la modernización económica, social y política de la sociedad. Esto debiese implicar el mejorar la imagen de los movimientos estudiantiles en los medios de comunicación, en la incorporación efectiva de las organizaciones estudiantiles a los procesos de participación institucional universitaria y el aumentar la presencia juvenil en los campos relativos a la toma de decisiones de los asuntos de orden público.

JOSÉ BENGOA

Profesor de la Escuela de Antropología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, en Santiago de Chile. Es especialista en cuestiones indígenas, de minorías y asuntos culturales. Dirige el proyecto Fondecyt, "Identidad e identidades, la construcción de la diversidad en Chile". Actualmente es el presidente del Grupo de Trabajo de las Minorías de la Organización de Naciones Unidas. En los últimos años ha sido profesor e investigador invitado, entre otras, de la Universidad de Indiana, Bloomington; de la Universidad de Cambridge, Inglaterra; de la Universidad de París (Cátedra Pablo Neruda), y de la Universidad Complutense de Madrid. Ha escrito numerosos libros, entre los que se encuentran *Historia del pueblo mapuche* (Lom ediciones), *Historia de un conflicto* (Planeta), *La emergencia indígena en América Latina* (Fondo de Cultura Económica) y *Los antiguos mapuches del sur* (Catalonia).

INDÍGENAS, INSTITUCIONALIDAD Y RELACIONES INTERÉTNICAS EN CHILE

JOSÉ BENGOA

En este artículo tratamos de explicar el proceso de cambios culturales, políticos y sociales que vive en Chile el mundo indígena, principalmente mapuche, en los últimos quince años, conocido como la "emergencia indígena", y los consecuentes cambios que se han producido en las relaciones interétnicas. Señalamos como hipótesis comprensiva que el Estado chileno no ha sido capaz de reaccionar frente a esta situación emergente. El resultado ha sido una creciente contradicción entre un mundo en ebullición, el indígena, y las miradas y los discursos tradicionales por parte de la sociedad y el Estado chileno. El rechazo en el Congreso durante quince años del "Reconocimiento Constitucional de los Pueblos Indígenas" vendría a ser la expresión simbólica de la incapacidad de la sociedad y del Estado chileno de asumir a los pueblos indígenas del país en la modernidad, y de tener con ellos una relación moderna, digna y respetuosa. Esta incapacidad obedece a la existencia de fuertes estereotipos en la sociedad chilena no indígena, muchos de ellos de abierto carácter racial y discriminatorio. La institucionalidad se ha ido viendo afectada por esta situación, debilitándose enormemente y abriendo espacios, o tentaciones, para llevar a cabo acciones fuera de ella o en la ilegalidad. La baja legitimidad de las instituciones encargadas de procesar las demandas indígenas, resolver los conflictos y promover su desarrollo, ponen al Estado en una situación abiertamente oprobiosa, esto es, la de manejar las relaciones interétnicas con los aparatos represivos, judicializando el conflicto social y étnico, lo cual es un camino de enormes riesgos políticos y el peor escenario para la democracia. Si a ello se agrega la existencia de un Estado desarrollista y relativamente rico y generoso, que entrega bienes a los "beneficiarios indígenas", la política frente al sector se sustentaría exclusivamente en una combinación, hartamente conocida y tristemente acuñada, de "garrote y zanahoria".

1. DEL SAN JUAN AL WE TRIPANTU

Escribo este texto los días del año nuevo mapuche, el We Tripantu, esto es, lo que se conocía y conoce como el día de San Juan, el día más corto del año o el de la noche más larga, 24 de junio, por lo general. En Europa, el Año Nuevo se unió al solsticio de invierno que, como es lógico, es el fin de un ciclo y el comienzo de otro. El sol parece que en ese momento se va a alejar definitivamente de los humanos. Sin embargo, fruto de los ritos y sacrificios que allí se producen, va a comenzar lentamente a renacer. Cada día será un poco más largo, el frío se irá y llegará el tiempo del verano y la plenitud del sol. Los americanos conocieron, al igual que todos los pueblos del mundo, el mismo fenómeno. Nosotros, dominados por el calendario europeo, celebramos el Año Nuevo al revés. Lo deberíamos celebrar el día más frío y corto del año, cuando la naturaleza pareciera haber muerto y se requiere de la fuerza espiritual y ritual de los humanos para volver a empezar. Este año me ha llamado la atención la cantidad de ceremonias, reuniones y celebraciones de todo tipo realizadas con motivo del We Tripantu –en la lengua de los mapuches, we es nuevo y tripantu, año.

En el campo este festejo es hasta hoy denominado el San Juan. Es una gran fiesta celebrada en las casas y familias mapuches rurales. Quizá sea la fiesta más importante, sobre todo si hay algún miembro de la familia llamado Juan. Es una fiesta llena de significados, pequeñas ceremonias, juegos, comidas sabrosas, en fin, sorpresas. Se juntan allí sin duda las tradiciones españolas del día de San Juan, que es al revés, pues es el día más largo con la noche más corta, pero más cálida, más hermosa para pasear, para no acostarse a dormir, ya que se oscurece muy tarde y el sol se levanta muy temprano. Es la noche de San Juan. Más al norte, en Europa, ese día no hay siquiera noche, y la gente sale a los parques a bailar. Es una noche llena de encantos y misterios. El nombre hispánico se impuso en el mundo mapuche vaya a saber desde cuándo, por decenas o centenas de años o más. Incluso no conozco registros que hablen de una festividad denominada We Tripantu, pero me puedo equivocar.

El San Juan se celebraba combinando de modo sincrético las costumbres que provenían del mundo indígena, el Año Nuevo, y las del hispánico y católico, el San Juan. Al observador le podían llamar la atención algunos rituales y confundir su procedencia. Por ejemplo, hace ya algunos años pude participar en un San Juan en que a medianoche bajaban los asistentes al río, estero no muy lejano, a lavarse,

tirarse agua, y todo esto en medio de risas y alegría. Podría especularse que ese ritual, al parecer bastante generalizado en las comunidades rurales, provendría de una conjunción de los más diversos orígenes. Alguien podría decir que justamente recordaba el baño de la noche de San Juan en las calurosas noches peninsulares, y que quedó como un remanente de los recuerdos de las cautivas y cautivos que llenaron la Araucanía. Otro podría decir, y las hipótesis no son más que especulaciones, que efectivamente se remonta a la más pura tradición ribereña de los antiguos mapuches, que tenían con las aguas una relación reverencial. La machi Juanita de Paicaví se metía entera al arroyo de agua, en medio de la noche fría, y con su *cultrún* cantaba misteriosas palabras que nadie estaba en condiciones de comprender. ¿Y no tendrá que ver también con una herencia cristiana que hace del agua el espacio ritual del paso de un momento vital a otro, el del invierno al comienzo del renacer de la naturaleza, el de las impurezas a la pureza del espíritu invadido por el Creador? Casi nada podemos saber.

No cabe duda de que las interpretaciones de los rituales son apasionantes. En una costumbre aparentemente ingenua se puede encontrar condensada buena parte de la simbología e historia de la humanidad. Las costumbres rituales se desplazan de manera infinita por caminos las más veces desconocidos. Pero, ¿a qué viene este juego etnográfico? Porque lo interesante del asunto es que el San Juan, que así se lo denominaba en el mundo mapuche, se ha ido transformando en el We Tripantu. Se ha ido "indigenizando", podríamos decir, la costumbre ancestral, que estaba llena de fragmentos diferentes, mestizajes, fruto de cuatro siglos y más de contactos, préstamos culturales, vecindades y conflictos. Vengo llegando del sur de Chile y me contaron en lago Budi que se había reunido un grupo de personas sabias a hablar del tema y que todas ellas reconocían la festividad de San Juan, pero no tenían ningún recuerdo de que se hablara o celebrara el We Tripantu, aunque podían reconocer que era lo mismo o podía ser lo mismo. A ninguna le parecía en todo caso mal que se transformase el San Juan en We Tripantu. Muchos recordaban que sus padres iban al lago en esta fecha, en medio de la noche.

Al parecer, todo comenzó hace unos quince años en Temuco. Un grupo de estudiantes mapuches decidió celebrar el Año Nuevo mapuche y lo tradujo, en forma directa, como We Tripantu. El movimiento de reivindicación étnica, que en ese momento comenzaba a fraguarse, requería de una fecha, de una fiesta simbólica, del todo diferente a las festividades chilenas u occidentales. Qué mejor y evi-

dente que el solsticio de invierno, que expresa en forma nítida nuestra pertenencia al hemisferio contrario, nuestra "americanidad". La influencia había venido sin duda de más al norte. En Perú y Bolivia había comenzado a celebrarse desde ya hacía unos años el Inti Raimi, fiesta equivalente, esto es, el nacimiento del sol. Al parecer esa fue una ceremonia antigua que se había perdido absolutamente. Según la profesora Antoinette Molinié, que ha estudiado el asunto en detalle, pareciera que el renacimiento de la festividad fue en el período del general Velasco Alvarado, cuando se quería dignificar la cuestión indígena y se realizaron numerosos programas en su apoyo y organización. Se la concertó en el Cuzco, en las ruinas de Saksawamán, y si bien al principio parecía "inventada", hoy en día, dados su masividad y entusiasmo, nadie duda de que se trata de un asunto tradicional. En Bolivia, ese mismo día se celebra una enorme festividad en las ruinas de Tiawanaco, a la que concurren miles de personas, también indígenas, a esperar que salga el sol entre las piedras de esa hermosa ciudadela ubicada a más de cuatro mil metros de altura. La gente espera ansiosa la noche en medio de un frío que cala los huesos, hasta que aparece el sol entre los cerros.

Todas estas ceremonias ya son ancestrales, tradicionales, y parte de la costumbre, lo cual es del mayor interés. Son la expresión de la emergencia indígena en América Latina y, en este caso, en Chile. En menos de quince años han cambiado las percepciones sobre los indígenas y las de los indígenas sobre ellos mismos. En la noche de San Juan, fría y sin nubes, como todo "veranito de San Juan", complejo recuerdo de raigambres calientes de la Península, se ha celebrado este año el We Tripantu. Numerosas personas han pasado la noche en el Cerro Blanco de Santiago, haciendo fogatas, conversando, bebiendo y esperando que amanezca. El cerro Blanco, ubicado en la comuna de Recoleta, ha sido solicitado por los indígenas como un espacio sagrado donde realizar sus ceremonias en la ciudad, en la capital de Chile. Sin duda, otros miles en el sur de Chile han hecho lo mismo. Posiblemente en los lugares más profundos de la Araucanía, los más viejitos sólo celebren San Juan. Aún no se han apercebido de los cambios que vienen galopando.

Hay un evidente proceso de resignificación por parte de los indígenas y en particular en este caso por los mapuches, que es el tema de este trabajo. Son quizá los mapuches jóvenes, la mayor parte de ellos migrantes, con estudios incluso universitarios, quienes sienten la necesidad de resignificar su cultura. Es un proceso complejo de ruptura con el mestizaje generalizado, de profundizar en la diversidad. Se

trata de establecer un espacio de distinción con la sociedad chilena, necesario y fundamental para sobrevivir. Y sin duda que está teniendo éxito. Es probable que durante siglos la presencia de la Iglesia, la dominación cultural y tantos otros motivos condujeran a ocultarse en el San Juan. Al principio posiblemente se trató sólo de una "traducción" y se quedó escondido el significado auténtico. Con el curso de los años y las generaciones se perdió ese secreto oculto y quedó únicamente el hecho puro de la dominación cultural: San Juan. La retroversión cultural que se produce ante nuestros ojos en los últimos años es valorable y compleja. Se desmonta en sus partes el rito, se lo replantea a sus supuestos orígenes y se lo lee desde una perspectiva mapuche. Los mismos ritos del agua, del fuego donde se calientan los congregados, de las palabras que se dicen, pierden su carácter sincrético y se purifican en una nueva dimensión marcada por la emergencia étnica.

Se celebra el comienzo del año en las antípodas de Occidente. Es un símbolo extremadamente fuerte frente al cual la sociedad chilena aún no toma conciencia. La apuesta mapuche, en este caso, y se podría generalizar como indígena también, va en la línea de la distinción absoluta. Es lo que ha ocurrido en estos quince años. El discurso de la emergencia indígena ha ido penetrando de modo profundo las diferentes capas de su propia cultura, transformándose en una cultura recuperada, muchas veces a partir de fragmentos. Una gran excepción de esto, en el caso mapuche, es que la lengua se mantiene prácticamente intacta en muchas zonas del país. La lengua es la argamasa de la cultura y por tanto los fragmentos parciales que pueda haber se integran fácilmente en el lenguaje. Se podrá discutir si se trata de *We Tripantu* u otras denominaciones, como sostienen muchos mapuches, pero hay un marco común que permite "desanjuanizar" el ritual, reapropiarlo, en fin, reproducir en forma independiente la cultura.

No cabe duda de que este fenómeno acá descrito de reapropiación cultural se produce también en otros ámbitos de la vida social y cultural, y también de la vida política. Eso es lo que vamos a analizar en este artículo.

2. ESTEREOTIPOS Y RELACIONES INTERÉTNICAS

Me han solicitado participar en este libro con una opinión que refleje la situación en que se encontraría hoy en día en Chile la cuestión indígena. Se señala en la invitación que estos temas son poco conocidos por parte de los sectores políticos del país y que por tanto valdría

la pena realizar una suerte de balance o “estado del arte” de lo que ocurre en este sector. La tarea no es fácil, ya que se levantan muchas o demasiadas pasiones al enfrentar este tema de por sí complejo. Pasiones y sobre todo estereotipos.

Por lo general se dice que se conoce poco este sector de la población, aunque se habla mucho de él y la prensa informa o desinforma profusamente. Pero lo que ocurre es que cada cual, como señala la hermenéutica moderna, lee lo que quiere leer y muy pocas veces las informaciones o análisis rompen con los estereotipos previamente establecidos. A pesar de que se habla mucho de este tema, se tiene la impresión de que se sabe muy poco en Chile de la cuestión indígena.

Es la pregunta que siempre se nos hace. Y esto de los indígenas ¿es un asunto nuevo? Se hace la pregunta con una maravillosa cara de ingenuidad o sabiduría profunda según sea el caso. La respuesta no puede sustraerse a la ironía. ¿Qué es nuevo para usted? Por ejemplo, a don Pedro de Valdivia ¿usted lo considera nuevo o viejo? Porque convengamos en que los indígenas han sido personajes permanentes de la historia de Chile, desde su mismo comienzo hasta hoy, y siguen siendo ignorados, siguen apareciendo como un asunto que es nuevo, que antes no se conocía.

El “antes” es el ensombrecido mundo de los estereotipos que ha tratado de negar la existencia indígena en nuestro país, nuestra rai-gambre india, el mestizaje, y que finalmente ha propuesto la herencia occidental como ejemplo y orgullo vanidoso de la patria. El “antes” no es un anterior histórico, temporal, sino un anterior cognitivo. Es por ello que aparece siempre este tema como poco conocido o recién descubierto. Se lo descubre cuando se percibe la existencia del otro, de los indígenas como diferencia, de los mapuches, por ejemplo, como cultura, diversidad y derecho.

No es asunto sólo de estudiarlo más en los liceos y escuelas. Hoy se estudia en detalle a los diversos pueblos indígenas que habitaban en el actual territorio que forma Chile. Incluso el especialista es sorprendido sin respuestas por algún niño que le pregunta acerca de las diferencias entre chonos y kawashkares. Los planes y programas de estudio han incorporado mucha información sobre los pueblos indígenas del país, lo que es muy positivo. Sin embargo, dudo que se haya reemplazado la matriz cognitiva. Es por ello que en forma reiterada aparece la cuestión indígena como un asunto pasado y muerto. O si aparece viva se la infantiliza de tal suerte que aparece ligada a un culto new age de la naturaleza, relacionada con pajaritos y espiritualidades de dudosa prosapia. No es casualidad que una gran mayoría

de los jardines infantiles en Chile lleven un nombre indígena y que allí se enseñe a contar en mapudungun, a dibujar el mito del Kai Kai y Tren Tren, en fin, a conocer la cultura, supuestamente ancestral del país, pero infantilizada y transformada en resorte de juegos y espiritualidades. No he realizado la investigación empírica, pero es probable que en muchos jardines infantiles de clase media en Santiago se haya realizado una fiesta de We Tripantu y los niños se hayan disfrazado de "indios".

Estos son cambios importantes, sin duda. La cuestión indígena aparece a lo largo de la historia chilena de diversa manera. Aparece con signos positivos y negativos, es ambigua y ambivalente. La sociedad chilena ha observado siempre a los indígenas en una suerte de mirada contradictoria.

Los mapuches aparecen especialmente en ciertos momentos de la historia como la expresión máxima de la valentía, del orgullo en defensa de la tierra, de la patria, como los "jamás vencidos". El estereotipo patriótico, la "sangre araucana", ha marcado muchos períodos históricos y no pocas veces ha "invisibilizado" a los mapuches de carne y hueso, a los que en su vida cotidiana no tienen por qué ejercer el rol de héroes.

Los mapuches y los indígenas, en general, en muchos períodos históricos marcados por la crítica a la modernidad, aparecen como portadores de la pureza natural. Un cierto rousseauismo ha recorrido las miradas de los sectores hastiados de modernidad, que ven en el "buen salvaje" un ideal utópico por cierto inalcanzable. Las vertientes modernas de este estereotipo son el new age y cierto medioambientalismo infantil, en que los animales son la expresión máxima de la perfección fruto de su inconsciencia, enfrentados a humanos indignos de pertenecer a la especie animal.

No son pocos los indígenas que recuperan y releen sus pasados desde estas lecturas estereotipadas. Los estereotipos tienen esa función, establecen puentes cognitivos que permiten comprenderse mutuamente. Como señalaba Paul Ricoeur, "así como me ven, me miro, y como me miro me comporto". Es por ello que existe una relectura cultural desde el "heroico araucano" y otra desde "el buen salvaje". Ambas tienen fragmentos absolutamente verdaderos y empíricamente demostrables, pero en su esquematización es donde se produce la deformación.

Por cierto que existen los estereotipos abiertamente negativos y racistas. Son los más abundantes y los más invisibles. "Indio flojo, ladrón, borracho..." está en la boca de muchos que tratan de separarse

de ese sector social mediante un corte racial. Se puede valorar al “buen salvaje” en el jardín infantil de manera romántica y abstracta y tener horror a que un hijo tenga un fuerte fenotipo indígena. El racismo larvado por lo general de la sociedad chilena se abre en momentos de crisis, en momentos de conflicto.

El estereotipo moderno ha sido enmarcar a los indígenas en la categoría de “pobre”. Es una manera también de nacionalizarlos. Pobre es el carente y en Chile son muchos los que tienen carencia, los indígenas son una subclase de pobres. La mirada de los indígenas desde la pobreza enfatiza, como todo estereotipo, un aspecto real, pero niega los aspectos diferenciadores, la historia de esa comunidad. Los pobres son objeto de la caridad, de la acción generosa o no del Estado, son “beneficiarios”. “¿Qué quieren los pobres?”, se preguntan los candidatos cuando recorren el país. Caminos, hospitales, seguridad, educación, en fin, quieren “las cosas que yo tengo”, piensa para sus adentros el candidato. “Quieren llegar a ser lo que yo soy”, se dice orgulloso. Eso es integración. Es también democracia, podría decir. No es mucho más lo que se dice y se hace. ¿Qué pueden decir los indígenas cuando se los ha clasificado como pobres sino actuar como tales? ¿Qué pueden pedir de la lista de ofertas si se los ha clasificado como carentes? Es un juego diabólico de espejos cruzados conducente a que muchos territorios indígenas hayan dejado de ser tales y se hayan transformado en áreas de extrema pobreza, como los campamentos o poblaciones callampas de Santiago. Se cercena la historia, las memorias, las capacidades, la dignidad, y se lo focaliza, como se dice hoy día, por lo que no tiene.

3. ESTEREOTIPOS Y CONFLICTO

Estos estereotipos están jugando de manera secreta pero evidente en la coyuntura. El estereotipo del guerrero muchas veces en la historia chilena ha cegado a unos y otros. Es cierto que los mapuches han sido guerreros, quién puede negarlo. Pero no cabe duda de que en su guerrar se combinaron diversos elementos. La guerra y la paz fueron permanentes y mucho más lo fueron los períodos de paz, como lo ha demostrado el premio nacional de Historia, don Sergio Villalobos, en sus múltiples y difundidos trabajos. En efecto, allí reside un aporte de la mayor importancia de este historiador. Largos períodos de paz, diplomacia, parlamentos, aperturas, sincretismos, en fin, compenetración de culturas. Es indudable que la resistencia mapuche existió en el núcleo duro de su cultura. La defensa del *mapu*, de la tierra. La

persistencia de algunas de sus costumbres, como la religión que hasta hoy se mantiene incólume en torno al shamanismo. La pertinacia a no perder la lengua. El estereotipo guerrero, sin embargo, lleva a unos y otros a no mirar estos aspectos más complejos. ¿Con qué preconceptos, nos podemos preguntar, analizan las informaciones acerca de la violencia en el sur el o los encargados del Ministerio del Interior?, ¿cuál es el marco interpretativo que conduce a los mandatarios a ir o no ir, con temor y preocupación, a una reunión con los mapuches en el sur de Chile?, Vale decir, ¿cuáles son los marcos precognitivos en que se producen las relaciones interétnicas en Chile?, y por el otro lado podríamos preguntar lo mismo: ¿a quiénes o a quién están representando los jóvenes mapuches que se autoasumen como siguiendo la senda de los antiguos guerreros?

En estos días del We Tripantu, ex San Juan, se realiza un gran juicio contra un grupo de dirigentes mapuches de la región de la Araucanía. Es un juicio por terrorismo. Todos los chilenos sabemos lo que significa terrorismo, terrorismo de Estado, terrorismo privado, y nadie tiene ni un "pixel" valorativo sobre ese concepto. La sociedad chilena quedó traumatizada con la violencia y es evidente que no quiere volver a ningún tipo de violencia ni menos a una violencia terrorista. Hubo un primer juicio en Angol, en que el autor de estas líneas fue citado como perito, ocasión en que se acusó a dos *lonkos*, esto es, dirigentes de sus comunidades, de terrorismo o de "amenazas terroristas" por un incendio cometido en el predio del ex ministro de Agricultura, señor Juan Agustín Figueroa. El primer juicio culminó con la absolución de los inculpados y su libertad, ya que a los jueces les pareció evidente que se trataba de un largo, antiguo y reiterado conflicto entre vecinos, una comunidad y un dueño de fundo. Como toda persona que ha leído un poco de literatura indigenista latinoamericana sabe, estos conflictos son de común ocurrencia y le suceden a mucha gente. Mala vecindad, apropiación indebida de tierras, viejas querellas, en fin, el bien conocido conflicto rural local. Unos y otros sin embargo han resignificado el conflicto, como ya el lector podrá ir comprendiendo, a partir de lo que señalamos. El abogado, profesor de derecho de la Universidad de Chile y miembro del Tribunal Constitucional del Estado de Chile, y además patrón del fundo vecino, logró que la Corte Suprema "anulara" el juicio ya sentenciado y cambiara el Tribunal. Se realizó un segundo juicio, caratulado esta vez solamente como "amenazas terroristas", y se condenó a severas penas a los dos dirigentes de la comunidad. "Amenazas terroristas" es un asunto complejo. Uno podría en estricta lógica señalar que se es

terrorista o no se es terrorista. Esto significa, ni más ni menos, que se emplea el terror como medio de acción política —y así se dice y señala en los principios del movimiento u organización— o no se lo utiliza. Amenaza terrorista sería aquella que profiere un grupo político que predica “Por la razón o la fuerza”, como tan elocuentemente dice nuestro escudo nacional. Es difícil comprender que mediante la prueba de haber encontrado unos bidones con bencina en casa de los dirigentes, prueba dada por testigos sin rostro, se los acusara y condenara de “amenaza terrorista”. En las áreas forestales es evidente que las personas tienen bencina para sus motosierras y otros fines agrícolas necesarios. ¿Qué vieron los unos y qué vieron los otros? El poder estereotipado se les vino encima con toda su fuerza a estos dirigentes, quienes ya están condenados.

Los juicios de estos días contra la organización denominada Coordinadora Arauco Malleco, sigue el mismo derrotero. Se realizó un primer juicio que absolvió a los dirigentes presos. Los jueces comprendieron que lo que se acusaba como “organización clandestina o ilegal” no era otra cosa que la organización social natural de las comunidades indígenas. Un acusador señaló que cada vez que había una movilización se reunían organizadamente y esa organización era ilegal y, por tanto, concluía rápidamente, de carácter terrorista. Poco ha cambiado la historia. Los españoles se aterraban cuando los así llamados araucanos se juntaban en sus grandes *cahuines* y bailaban al son de sus músicas. Nájera dice que los españoles temblaban al escuchar que tocaban las flautas fabricadas con las canillas de los soldados muertos. Fuera eso verdad o mentira, lo que importa es el terror que producía. Así, la palabra *cahuín* se tradujo al idioma castellano chileno cotidiano como una forma de conspiración. “¿Y ustedes qué están cahuineando?”, se suele decir. A eso se refería el fiscal al señalar que los mapuches estaban “cahuineando”, esto es, reuniéndose con propósitos inconfesables. El juicio absolvió a los dirigentes, pero se volvió a ir de queja a la Corte Suprema, la que anuló el juicio. Este juicio ha comenzado en estos días de We Tripantu, cuando escribo estas líneas.

La cuestión mapuche ha cambiado de carácter en los últimos quince años. La emergencia indígena del sur de Chile ha conducido, en particular, a distanciar cada vez más las miradas de quienes forman parte de la sociedad chilena (en especial de sus autoridades y de los mapuches y, entre estos, sobre todo de sus dirigentes). En la medida en que los dirigentes y la elite mapuche han ido construyendo un nuevo lenguaje para expresar sus reivindicaciones este se ha ido

alejando del lenguaje político tradicional de los partidos políticos chilenos. Tal era el marco reivindicativo del período anterior. La demanda indígena se procesaba a través del sistema político chileno: había dirigentes comunistas, socialistas, demócratacristianos, miristas, etc. A partir del proceso en que se ha ido construyendo un discurso reivindicativo, como un conjunto diferenciado de lo chileno, en cuanto se ha distinguido la cultura indígena del mestizaje generalizado, de la mirada sincrética, se ha ido produciendo un foso de incomprensión y también de desconfianza. Quizás, al igual que en los otros ámbitos de la cultura, esta se ha sincerado (o está en proceso de), y se ha explicitado un largo proceso de desconfianza que tal vez anteriormente estaba larvado, escondido o simplemente silenciado.

La afirmación indígena, su lenguaje a veces lleno de radicalismos, sus demandas de mayor protagonismo, la apelación a formas de autonomía política, son generalmente incomprendidas por la clase política chilena que conduce a la ausencia de lenguajes comunes, a plataformas cognitivas comunes. Los dirigentes indígenas hablan un lenguaje que suele ser ininteligible para las elites chilenas. Estas ven a los mapuches cargados con los estereotipos que hemos analizado.

4. EL ACUERDO DE NUEVA IMPERIAL Y EL DEBILITAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE MEDICIÓN

Las organizaciones indígenas mayoritariamente firmaron el año 1989 el Acuerdo de Nueva Imperial con el entonces candidato a la Presidencia de la República don Patricio Aylwin. Fue un acto solemne realizado en el teatro de esa ciudad, en el cual el gobierno se comprometía a preparar y enviar al Parlamento una nueva Ley Indígena, cuestión que así ocurrió, siendo promulgada el año 1993. Se comprometía también a enviar al Parlamento y obtener el Reconocimiento Constitucional de los Pueblos Indígenas de Chile. El Presidente Aylwin envió el proyecto de Reforma Constitucional y también el proyecto de ratificación del Convenio 169 de la OIT. El Congreso consideró que esos dos instrumentos, en particular el concepto de "pueblos indígenas" y sus consecuencias jurídicas, eran inadmisibles ya que vulneraban la Constitución de la República. A pesar de los informes de expertos en sentido contrario, la tramitación de estas reformas no prosperó. Durante el gobierno del Presidente Frei Ruiz-Tagle hubo otros intentos por aprobar estas reformas, las que fueron rechazadas o no aprobadas por falta de quórum, ya que algunos parlamentarios decidieron no participar en este asunto. Hace unos pocos meses,

durante 2005, un grupo de parlamentarios ha tratado de resolver el asunto cambiando las palabras y artículos donde va instalada esta reforma. Sin embargo, el remedio ha salido peor que la enfermedad, pues todas las organizaciones indígenas, y con razón, se oponen a lograr una Reforma Constitucional aprobada de manera oblicua, con conceptos inadecuados (por ejemplo se reconocen las “etnias indígenas”); en fin, una reforma vacía y sin sentido. Somos muchos quienes compartimos que la Reforma Constitucional debe ser un hito en que la sociedad y el Estado chileno reconocen solemnemente su pluriethnicidad y, por tanto, que las medidas que surgen de allí son eficaces y consecuentes. Una reforma que no tuviese esa implicancia no tendría sentido.

Es indudable que el hecho de que en quince años no se haya aprobado esta reforma a la Constitución de la República de Chile es sintomático y expresivo. Expresa de manera categórica el lugar que tiene la cuestión indígena en Chile, la falta de interés por parte de los parlamentarios, la creencia de que existe un peligro de división del Estado y la sociedad si se llegara a aprobar una reforma seria de esta naturaleza, y, en fin, surgen y se exponen los mitos y estereotipos de la sociedad chilena sobre los que hemos hablado antes.

Para los indígenas sin duda que estas negativas de la sociedad en términos de su reconocimiento implican un rechazo de la mayor importancia. Para ellos la sociedad chilena no está disponible a aceptar las consecuencias políticas que tiene la toma de conciencia que ha ocurrido en las comunidades indígenas del país. La sociedad y el Estado no parecieran dispuestos a aceptar la diversidad chilena y todo lo que se dice se limita a discursos vacíos de contenido.

El Acuerdo de Nueva Imperial planteaba por parte de las organizaciones indígenas que iban “a canalizar sus demandas por la vía institucional”. Esto significaba en buen castellano que no habría “acciones directas”, tales como “tomas de fundos” y otras fórmulas de presión que han sido tradicionales en las movilizaciones de comunidades indígenas, tanto en Chile como en todas partes de América Latina.

La canalización institucional de los conflictos depende siempre de la capacidad que tengan las instituciones de resolver los asuntos que se les plantean. Si la institucionalidad es débil e inoperante, no cabe duda de que ese camino o vía va a ser superado, vulnerado o limitado. Eso fue lo que, a nuestro modo de ver, sucedió en los años posteriores a la dictación de la Ley Indígena, 1993, y en particular tras la coordinación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, principal organismo institucional que debía haber canalizado

el conflicto y los problemas indígenas del país. La Conadi fue instalada en el año 1994 y mientras estaba en su período de organización tuvo que asumir responsabilidades que iban mucho más allá de sus capacidades y fuerzas. El conflicto con motivo de la construcción de la represa Ralco del Alto Biobío vino a poner a esta institución en el centro de las miradas del país. Resulta que la Ley Indígena había omitido todos los aspectos relativos a la construcción de megaproyectos y sus relaciones con las comunidades indígenas. Un asunto de tan alta importancia en muchas partes del mundo, y en Chile, no fue legislado, ya que los parlamentarios no estuvieron dispuestos a reglamentar el asunto y otorgar a las comunidades ubicadas en lugares de esa naturaleza derechos especiales. Al no ser aprobado el Convenio 169, que a lo menos establece ciertas exigencias, quedó un vacío jurídico y político. La ley había planteado un régimen de permutas, que no se había ideado para estos eventos sino para situaciones mucho más sencillas (por ejemplo, para el caso en que un propietario mapuche quisiera cambiar una tierra de una calidad por otra, siempre en su beneficio y de modo voluntario). Nunca se pensó que ese mecanismo de permutas iba a ser el sistema de compensaciones legales en proyectos hidroeléctricos, caminos y otros, en fin, para megaproyectos. En la medida en que el mecanismo exigía la aprobación de las permutas por parte del consejo de la Conadi, el asunto, nada más ni nada menos, de la construcción de la principal obra de electricidad del país, cayó en manos de los recién elegidos directivos de esa débil institución. El hilo se cortó por el borde más frágil y ante la negativa de un director de Conadi de aprobar las permutas, fue removido. Se hizo lo mismo con un segundo director y con los representantes del Presidente de la República en el consejo. Con estos movimientos se logró una mayoría a favor de las permutas, las que se aprobaron en un bochornoso consejo. Estas presiones indebidas sobre un organismo canalizador de las demandas y de defensa de las comunidades indígenas, condujeron al inmediato y progresivo desprestigio de la Conadi. El Estado y el gobierno no cuidaron de ese organismo, inhabilitándolo como intermediario y procesador de las demandas indígenas. Se produjo de ese modo un debilitamiento evidente de la así denominada vía institucional de resolución de los conflictos indígenas.

A estos elementos señalados es necesario agregar el juego de los estereotipos al que venimos haciendo referencia. Por primera vez en la historia, quizá, los indígenas se hacían cargo de un servicio público, con un patrimonio relativamente importante. Las suspicacias estereotipadas surgieron de inmediato y hubo numerosas voces que

anticiparon, como profecía autocumplida, que no iba a resultar el experimento. Ya en la dictación de los reglamentos de la Ley Indígena se vio a la Contraloría General de la República poniendo condiciones y problemas que desvirtuaban el mismo contenido de la ley. El funcionamiento complejo de Conadi comenzó a ser cuestionado. Se acusó por la prensa de situaciones oscuras y malversaciones, las que sin ser probadas fueron suficientes para crear la imagen de que se trataba, desde su inicio y creación, de una entidad corrupta e ineficiente. A esto hay que añadir la exigencia de los partidos políticos de cuotas y colocación de funcionarios, muchas veces sin ninguna experiencia en la materia y dueños de los mismos estereotipos, o más aun, que los del común de la población. En una entrevista que realizó un estudiante francés de doctorado a los abogados de la Conadi, le confesaron que no estaban de acuerdo con la Ley Indígena y su trato de las tierras, y que ellos abogaban por la libre compra y venta de estas propiedades. El desprestigio, quizás explícita o implícitamente buscado, afirmado con los estereotipos que ya hemos señalado, finalmente se obtuvo, con lo cual se ha debilitado mucho más el proceso institucional al que acá nos referimos.

Un análisis más detallado de los hechos y episodios ocurridos en los últimos años podría abundar en esta hipótesis del debilitamiento de las vías institucionales. Por ejemplo, frente a una cierta desesperación existente en algún momento por parte de las autoridades ante las movilizaciones del sur, se tendió a utilizar el Fondo de Tierras Indígenas, legalmente administrado por la Conadi, pero pasándola a llevar en sus decisiones, como instrumento de negociaciones, lo que es un evidente error. Un mecanismo claramente institucional de resolución objetiva de conflictos pasaba a ser instrumento de presiones y válvula de escape frente a tomas de terrenos o situaciones de hecho. Numerosos vaivenes de esta naturaleza condujeron a profundizar el debilitamiento de las instituciones.

Un argumento que se esgrime a menudo es el siguiente. Se señala que la Conadi sería una institución híbrida: ni un "servicio público", dependiente ciento por ciento del gobierno; ni un ente de representación de las comunidades indígenas. Es cierto y es así. Es un organismo público, en ese sentido, un "servicio público" que tiene un consejo en el que se representa a las comunidades. Pero además es un servicio público que tiene obligaciones en defensa de las comunidades, de sus recursos, de sus personas, de las culturas indígenas, etc. Esto no tiene nada de extraño. Surge de la convicción legal de que la existencia de estas comunidades y culturas (ya que se sacó de la ley el concepto de

“pueblo”, por no ser aprobado) es un valor patrimonial del país y la sociedad chilena. Por ello es un servicio público “pro indígena” y no puede por ley ser “ni antiindígena” ni neutral. Por ejemplo, tiene que defender las tierras de los indígenas por la ley misma. Es su obligación. En la mayor parte de las legislaciones del mundo las instituciones estatales indígenas de esta naturaleza tienen activa y preponderante participación indígena, normalmente están dirigidas por indígenas y expresan los deseos y demandas de los indígenas. Son entidades del Estado (todos formamos parte de la nación y el Estado) de mediación. Si no existe la disposición política, la buena fe, incluso, de aceptar la existencia de los pueblos indígenas, es evidente que este modelo participativo no tiene sentido. Los que critican con estos argumentos, por lo general están pensando en un “servicio público” que “aplique” las políticas del gobierno en ese sector y que en la práctica “manipule” los elementos del poder sin compartirlos ni negociarlos.

En definitiva, el Acuerdo de Nueva Imperial, que planteaba un camino institucional para la resolución de los problemas y demandas indígenas, se debilitó fuertemente. Por una parte, el Estado chileno —expresado en el Congreso— no ha tenido la voluntad política de avanzar hacia el reconocimiento, asunto de la mayor importancia simbólica y práctica, y por el otro lado se ha debilitado seriamente la institucionalidad, producto de acciones políticas concretas y directas.

En este contexto político, de debilitamiento de los mecanismos institucionales, se ha fortalecido la “tentación no institucional”, lo que se expresa en acciones directas e incluso en acciones delictivas, cuestión que no es siempre ni necesariamente lo mismo.

5. EL FRACASO DEL NUEVO TRATO

El Presidente Lagos convocó a una Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato para que le entregara un informe acerca del pasado indígena y de las políticas que deberían desarrollarse en el futuro. Esta comisión sesionó bajo la presidencia del ex Presidente de la República don Patricio Aylwin. Estaba formada por representantes de las comunidades y pueblos indígenas, y por personas no indígenas, del más diverso espectro social y político.

Tras varios años de deliberaciones se le entregó el informe al Presidente de la República que lo había solicitado, en medio de un cierto torbellino de opiniones en la prensa. En lo central, la comisión planteaba que había que avanzar hacia un reconocimiento de los pueblos

indígenas que tendría como consecuencia el implementar un sistema administrativo-político en el país, donde su presencia y opinión estuviera garantizada. Se planteaban diversas alternativas de modo de asegurar la participación indígena en “la formación de la voluntad general”, esto es, en la dictación de las leyes, etc. Para ello se veía que era necesario, por ejemplo, establecer algún tipo de cupos indígenas en el Parlamento, tal como existe en muchos países del mundo. Se planteaba también el problema de que, al no existir circunscripciones indígenas y al existir un sistema binominal, la representación indígena en el Parlamento es inexistente. En la historia política de Chile la situación no ha sido así, ya que desde los años veinte siempre hubo parlamentarios mapuches. Estos jugaron un papel muy importante en erigir relaciones institucionales para la demanda indígena tal como lo hemos señalado en este artículo.

Junto con estas medidas referidas a la formación de la voluntad general y a la participación en ella de los indígenas, cuestión no existente hoy en día, se planteaban formas mediante las cuales el Estado debía otorgar ciertos recursos administrativos especiales para que fuesen ejercidos por los propios indígenas en áreas o territorios determinados por la alta presencia de su población. A este tipo de autogestión se le ha denominado con diversas formulaciones y cae en lo que internacionalmente se conoce como las “autonomías relativas” o los “estatutos especiales”. No parecía demasiado audaz señalar que las municipalidades de alta densidad indígena debían tener, por ejemplo, en sus consejos, representación de las comunidades indígenas, y que estos alcaldes tuviesen un grado mayor de injerencia en la administración territorial.

La comisión entregó su informe en medio de una nube de vilipendios: que se trataba de un aventurerismo político, que quienes participaban no sabían nada del asunto, que era sólo un “gasto de papel y tinta”, que se pretendía crear un Estado dentro del Estado, que se trataba más bien de construir ghettos para la sola satisfacción de los antropólogos; en fin, una andanada en que nadie quedó bien parado. Los que habíamos participado en esa comisión aparecimos frente a la opinión pública como unos perfectos ignorantes. Lamentablemente, algunos de los miembros de la comisión hicieron reparos al informe final dando pábulo a estas críticas. Hubo quienes señalaron con todas sus letras que el informe no servía para mucho ya que no tocaba el problema de la pobreza indígena, y hubo otros, desde el lado indígena, que señalaron —en una resolución también de minoría— que el informe no establecía con claridad la plena autonomía y no satisfacía las demandas indígenas.

Es muy interesante el fenómeno ocurrido, pues el informe de la comisión quedó atrapado entre fuegos provenientes de las más diversas trincheras y cada una con sus estereotipos almenados, apercebidos sus arcabuces y flechas. Esto muestra lo que hemos tratado de señalar más atrás.

Para unos la cuestión indígena es y seguirá siendo un asunto de pobreza, de integración a la modernidad, de asimilación cultural paulatina; en fin, un asunto alejadísimo de las demandas políticas de los dirigentes indígenas. Por cierto que estos argumentos tienen o pueden tener base en la realidad de las situaciones. Qué duda cabe de que hay pobreza y extrema pobreza en las comunidades indígenas. Pero al no verse la relación entre esas condiciones de vida, la historia y trayectoria local, nacional, los procesos de discriminación, en fin, la cuestión étnica, no se ven y más bien se oscurecen sus causas. Al no verse las causas, las soluciones son parciales o inútiles, como se puede advertir en tantos programas llamados de desarrollo fracasados. La mirada de los indígenas desde las "carencias" no conduce a solucionar los asuntos a ellos relacionados y, por el contrario, solamente tiende a clasificarlos.

El otro lugar desde donde vinieron los fuegos era de la demanda política indígena. Es una demanda ciertamente aún poco constituida. Hay muchas organizaciones que plantean en términos generales un mayor protagonismo de los propios indígenas en el manejo de sus asuntos, de sus recursos, vale decir, un sistema de autogestión territorial, a lo que suele denominarse un "régimen de autonomía". Pero el debate está en pleno proceso. El periódico *Azquintuhue*, que se edita desde hace unos años en el sur de Chile y se distribuye públicamente, es un espacio privilegiado de debate de estos asuntos. Allí se congrega un conjunto de intelectuales y periodistas mapuches de la más alta calidad. Discuten con profundidad estos asuntos, en particular el carácter de la demanda. Para unos esta es un retorno a las formas tradicionales de las comunidades. Para otros ella debe pararse sobre la modernidad y desde allí retomar la memoria y la cultura. Estas perspectivas discutidas con brillantez intelectual no se consolidan todavía.

Finalmente, el informe fue desestimado por todos. Por algunos indígenas que desde el borde de la comisión lo rechazaron, por los miembros no indígenas relacionados con la derecha chilena, que también lo rechazaron, por las mismas razones que traían antes de ser instalada la comisión y que son tradicionales en ese sector, y por la prensa que hizo mofa de los resultados allí expuestos. El premio nacional de Historia, don Sergio Villalobos, fue quien encabezó la mofa, para lo cual tuvo mucha cobertura de prensa (una cita positiva y esta

segunda cita negativa, para mostrar la objetividad del autor de este artículo). El gobierno recibió el informe y prácticamente no tuvo espacio de maniobra para decir nada al respecto. De hecho, no pasó nada. Quizá la creación de dos comunas nuevas en el ámbito mapuche son las consecuencias prácticas del informe, aunque estas venían siendo discutidas por otras vías, de carácter regional y descentralizadoras. Es sin duda una decisión importante, pero limitada.

La evaluación de este proceso no puede ser más que evidente. Hay un enorme foso que separa las posiciones políticas en estas materias indígenas. Es un tema que produce una alta irascibilidad, pasiones y violencia, como lo pude comprobar en un foro organizado en la Universidad Finis Terrae. Allí participó un diputado de las zonas indígenas, que habló siempre de la Comisión de “Maltrato” y abogó por soluciones prácticas para la pobreza indígena, becas y créditos; señaló, al igual que otros participantes, que estos discursos de autonomías y carácter especial de los indígenas eran inventos internacionales, asuntos de antropólogos y desvaríos de algunos “cabezas calientes”. No fue esa la opinión del historiador Gonzalo Vial, quien argumentó la necesidad de abrirse frente a situaciones de hecho, como son la existencia irrefutable de una población de casi un millón de personas que tiene una historia, lengua, tradiciones y costumbres comunes y que además se ve a sí misma con particularidades específicas. No son muchas las personas que tienen un discurso reflexivo, tranquilo y dialogante sobre estas materias, por lo que vale la pena consignarlo.

No cabe duda de que el fracaso de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato ha debilitado aun más la institucionalidad interétnica en Chile. No hay, ni parece haber, mecanismos válidos de mediación. Este instrumento, instalado al más alto nivel del Estado por el Presidente de la República, al fracasar –por lo menos en este período, ya que nadie sabe si se retomarán posteriormente sus ideas propuestas– debilitó con más fuerza los espacios institucionales. Con el fracaso de la comisión quedó en evidencia la desconfianza, la incapacidad de avanzar en este terreno, la compleja variedad de intereses que están en juego. Por cierto que quedan desprovistos de vergüenza los *mecanismos represivos*, que suelen ser muy potentes en el fuerte y tradicionalmente colonial Estado de Chile y los *mecanismos de reparto caritativo*, que no son menores en medio de la bonanza económica existente en el país. Hacer una política indígena con “zanahoria y garrote”, por parte del Estado, es y sería una vergüenza democrática, una falta de respeto a la dignidad de los indígenas de Chile. Lamentablemente, en la medida en que se agotan y acortan los mecanismos institucionales, el Estado queda al desnudo.

Frente a la situación acá descrita, el movimiento indígena se ha dividido, como es fácil comprender, en diversas tendencias producto de la incertidumbre y complejidad del fenómeno institucional. Un cierto *continuum* va desde una mirada puramente institucional, que resta y existe, a una donde se desconfía de las instituciones en su capacidad de resolución de las demandas y conflictos interétnicos.

Quizás el primer fenómeno importante ocurrido en estos años de democratización del país ha sido el debilitamiento de los lazos políticos entre la militancia indígena y los partidos políticos nacionales. En el pasado existía una relación estrecha entre la militancia indígena y la política partidista. Es así que históricamente hay un fuerte núcleo mapuche comunista, que comprende que sus demandas indígenas van a ser satisfechas en la medida en que se logren los comunes objetivos del socialismo. Esas tendencias se van a dar de una u otra forma en casi todos los partidos políticos.

Es interesante señalar que los sectores históricamente más etnicistas, más autonomistas, en materias étnicas, se aliaron por lo general de modo instrumental con la derecha política, que los aceptaba en una actitud que consideraba más su peso y apoyo electoral que sus demandas y reivindicaciones. Es el caso del afamado diputado Venancio Coñoeacán Huenchual, quien estuvo aliado al Partido Conservador Unido durante largas décadas y terminó en el Partido Nacional, heredero político de este, en la década de los sesenta.

Esos lazos fuertes entre demandas indígenas e intermediación política institucional han flaqueado por el mismo debilitamiento de los partidos políticos como entes culturales de aglutinamiento y cohesión social, y también por esta separación creciente entre demanda indígena y sociedad nacional que venimos señalando. Hoy en día existe una relación instrumental entre demanda indígena, líderes y partidos políticos. Los líderes indígenas que quieren tener una expresión política institucional, ser elegidos para cargos públicos, acceder al sistema estatal, ser contratados en el aparato público, entre otros, no ven otra alternativa que pasar por una relación con los partidos políticos, dado el sistema imperante en Chile, tanto para la elección de candidatos, como para la selección de funcionarios. Es interesante comprender que esta relación instrumental no determina programáticamente las ideas acerca de la demanda indígena, ya que solamente establece un asunto de mecanismos. Un dirigente indígena ligado a un partido político determinado puede opinar sobre asuntos étnicos

tal como alguien que esté en otro partido, posiblemente incluso muy alejado ideológicamente, y opinar de un modo totalmente diferente con un compañero no indígena de su propio y mismo partido.

Este carácter instrumental de la institucionalidad ha sido comprendido de modo muy claro por un sector de la elite indígena, la que ha comenzado a desarrollar una estrategia en torno al uso de las instituciones del Estado. Expresión de ello es la importante cantidad de nuevos alcaldes de municipios de alta densidad y concentración indígena. Tanto en el norte del país como en el sur son ya muchos los gobiernos locales en que los indígenas ejercen las más altas responsabilidades. Hay allí una perspectiva de nuevo tipo institucional muy relevante y acorde con lo que ocurre en otros países latinoamericanos.

Por cierto, hay una demanda no canalizada institucionalmente. Se trata en especial de jóvenes, muchas veces ilustrados, que no perciben en ninguna de las institucionalidades existentes, ni en las propias del Estado para el servicio de las comunidades indígenas –como la Conadi, Proyecto Orígenes– ni en las generales de la administración del Estado –como las Municipalidades–, una alternativa viable y eficaz para la resolución de los históricos conflictos y demandas indígenas. Este escepticismo institucional es bien fundado y sin duda posee elementos argumentales de toda evidencia, como se ha tratado de explicar en estas breves líneas.

La tentación no institucional o de “acción directa” es evidente ante un cuadro como el que acá estamos señalando. Es indudable que en el ámbito de las “acciones delictuales”, como vías de acción directa, el camino no sólo está vedado jurídica y policialmente, sino que también está –a nuestro modo de ver–, vedado cultural y políticamente. El Estado tendrá el apoyo pleno de la opinión pública al reprimir hechos comprobados de violencia y sin duda esos hechos comprobados, insistimos que sean comprobados y fehacientes, no contarán con el apoyo ni de los más ardientes defensores de la causa indígena ni tampoco de la mayoría de los indígenas.

Una cosa diferente es considerar que cualquier movilización indígena es un “hecho delictual”, como lo señaló una autoridad regional, que prohibió incluso las marchas por las calles de Temuco y que se hablara el idioma mapuche en presencia de las autoridades, ya que estas no “lo comprendían”. Marchar por las calles en forma pacífica es un derecho ciudadano, lo mismo que expresar sus planteamientos en el idioma que le es propio y de la forma, pacífica, que le convenga a cada cual. La confusión que ocurre en los juicios por terrorismo de

estos días, donde la existencia de las comunidades indígenas, sus reuniones, deliberaciones y mandatos son catalogados como una suerte de “organización secreta que se reúne para delinquir” es sólo producto de la mala fe o del ancestral estereotipo al que nos hemos referido.

7. MIRADAS, DESCONFIANZA Y DIÁLOGO

Los conflictos indígenas, de minorías, étnicos, las denominadas relaciones interétnicas, son de una enorme complejidad en el mundo contemporáneo. No cabe duda de que parte de la actual modernidad es la reaparición de conflictos de raíces étnicas, que muchas veces estaban o parecían estar dormidos. Las reflexiones en torno a las identidades se ponen en el centro de los debates, según muestran los últimos dos libros best-seller del sociólogo Samuel Huntington. En su segundo libro, *Who are we?*, se interroga por la identidad norteamericana y la amenaza de los latinos.

Los desafíos del multiculturalismo en medio de la globalización acelerada son un debate necesario y evidente. Sobre todo en un país como Chile, que se abre al exterior y se quiere globalizar en todos sus terrenos. Nadie quisiera que existieran conflictos, ni menos este tipo de conflictos, pero están ahí y son parte del mundo llamado moderno y global en que vivimos. Más aun, a nuestro modo de ver son parte de la modernidad y no rémoras del pasado, como suelen creer y expresar algunas personas.

Los líderes indígenas, y el movimiento indígena en su conjunto, es parte ya de esta mirada moderna y globalizada. No solamente porque los líderes indígenas viajan por todo el mundo, participan de reuniones globales, están conectados cotidianamente en internet, poseen excelentes páginas y sitios web (de la más alta calidad tecnológica), sino también porque sus demandas son asimismo globalizadas. No es muy diferente a lo que aspira un mapuche del sur de Chile que lo que aspira un Sammi del norte de Noruega o un Inuit del Ártico canadiense. Hay un “panindigenismo” evidente hoy en día que se expresa en el lenguaje de la emergencia indígena, en los símbolos, en las demandas, en las legislaciones; en fin, en el conjunto de políticas que están regulando de manera moderna las relaciones interétnicas.

Los líderes indígenas saben esto. Saben que la “historia” camina a su favor. Que las opiniones existentes y mayoritarias en la sociedad chilena tienen todas las de perder. Son miradas marcadas por el pasado, por el racismo, por el desprecio y los estereotipos, como hemos reiterado en este trabajo.

En Chile ha surgido una nueva generación de indígenas. Son profesionales y muchos de ellos pasaron brillantemente por las universidades. Allí, no sólo no perdieron su conciencia indígena sino que la llenaron de contenidos. Es una nueva generación que tiene la capacidad de manejar sus asuntos, sus recursos, de establecer sus propias dinámicas. Es una generación que gracias a los medios de comunicación, al acortamiento de las distancias y a la modernización en general, es rural y urbana a la vez, maneja los códigos y experiencias urbanas, y vive y maneja los códigos rurales. La imagen del dirigente indígena ha cambiado en forma radical. Ya no es el señor de edad, por lo general con dificultades en la lectoescritura, hombre o mujer campesina, endurecido en la autosubsistencia.

Hoy se perfila una generación diferente, consecuencia también de las modernizaciones experimentadas en nuestro país en los últimos quince años, consecuencia también de los programas de becas de estudio que el propio Estado ha desarrollado. Delegar en esta nueva generación las responsabilidades pareciera ser la única vía para terminar con el paternalismo y la dependencia. El Estado tiene la obligación de abrir los espacios para que esta generación de dirigentes, profesionales y no profesionales, pueda establecer los nuevos horizontes de los indígenas en la modernidad. El asunto es de ellos, sin duda, a ellos les compete. Pero esa decisión, de la mayor importancia, pasa por el "reconocimiento" de esa realidad, la indígena, de sus capacidades, de sus propias características, en fin, de un grado de autonomía.

El Estado chileno y sus elites, con muy relevantes excepciones, visualizan sin embargo la temática interétnica con criterios, miradas y estereotipos por completo superados históricamente y, digamos también, muy poco modernos. En Chile, como se ha dicho muchas veces, se es moderno y globalizado en un cierto rango de asuntos (cuando conviene...) y se es muy tradicional, muy poco globalizado, cuando no conviene...

Las elites y la clase política chilena consideran que el principio que debe guiar todas las políticas indígenas es el de la "integración". Los indígenas deben finalmente "integrarse" a la sociedad, en igualdad de condiciones que el resto de la población. Explícita o implícitamente la clase política considera que es necesario "chilenizar" a las poblaciones indígenas e impedir que se perfilen con sus propias particularidades. Las especificidades culturales son aceptadas al nivel de las expresiones musicales, artísticas, en un terreno "folclórico", o en el suave mundo de las manifestaciones espirituales, en que toda persona tiene el derecho de hacer lo que quiera, ya que es un asunto privado.

Es por ello que predomina en la clase política un ambiente "asimilacionista" no superado. Cada vez que se proponen formas de relaciones interétnicas modernas, basadas en el reconocimiento mutuo, se producen las mismas reacciones: ¿acaso no somos todos chilenos? Reacciones que, dichas por la boca de personas con responsabilidades políticas, aparecen fuera de época e incluso sólo producto de un enorme provincialismo. A partir de esta mirada que no reconoce "al otro" se abre un escenario propicio para que vuelen todos los estereotipos y se juegue en un campo cada vez más fantasmagórico, como se ha tratado de describir en este trabajo.

El no reconocimiento es el primer paso de la discriminación, en todo orden de cosas. El no reconocimiento es una negación de la existencia o una disminución de su densidad. Si reconozco al otro como persona es diferente de si lo reconozco como colectivo, por ejemplo. Reconocer significa aceptar sus derechos, los derechos del otro. No reconocer significa someterlo a una clasificación arbitraria, como es la "c" de pobres y, por lo tanto, someterlos a un trato clientelar. Por cierto que ese trato de beneficiarios puede tener resultados de corto plazo: se forman las clientelas cautivas, se obtiene el voto —también cautivo, como enseña la ciencia política—, se reduce la demanda a la oferta ("lo que la gente quiere"), en fin, se niega al otro en su dinámica propia y se aceptan solamente sus aspectos dependientes.

Concluamos diciendo que en materia indígena existe en Chile uno de los pocos asuntos de derechos humanos criticados abiertamente por la comunidad internacional. El relator especial de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, el conocido maestro mexicano Rodolfo Stavenhagen, visitó Chile invitado por el gobierno del país, y emitió un duro informe. Se refería a muchos asuntos que acá hemos tocado. La reacción frente a esta crítica tan fundada ha sido débil, cuando no inexistente.

Digamos que en estos años se han perdido las confianzas entre el mundo indígena y el sistema político e institucional. La tesis que hemos desarrollado es que los canales institucionales han perdido su fortaleza, se han debilitado y no son capaces de canalizar la demanda indígena. Esto ha sido producto de numerosos hechos, algunos sobre los cuales hemos tratado en estas páginas. La superación de la cuestión indígena, a nuestro personal modo de ver, pasa por la recuperación de las confianzas, por el diálogo, entonces, entre autoridades, dirigentes y comunidades. Pasa por un proceso de reconstrucción de la institucionalidad capaz de procesar demandas, resolver conflictos y, finalmente, establecer un horizonte de respeto y dignidad.

MALVA ESPINOSA

Socióloga de la Universidad de Chile, posgrado de Maestría en Ciencias Sociales, FLACSO-Quito. Se ha desempeñado profesionalmente en Noruega, Ecuador y Chile. Actualmente es investigadora en el Departamento de Estudios de la Dirección del Trabajo; desde 1995 ha desarrollado diversas investigaciones laborales en dicha institución. En el ámbito de la colaboración con organismos internacionales, ha realizado (desde 1997 hasta la fecha) una serie de trabajos con la red de expertos laborales de América Latina, ex becarios de la Universidad de Bologna, Universidad de Castilla-La Mancha y OIT. Ha sido colaboradora externa de la OIT y de la Fundación Frederick Ebert, a través de la realización de varios documentos de trabajo y de artículos centrados en la problemática laboral y sindical, en el diálogo social y de género. Es autora de numerosas publicaciones vinculadas a sus trabajos de investigación.

SINDICALISMO EN CHILE: ACTORES DE AYER Y DE HOY EN LA INCANSABLE BÚSQUEDA DEL SUJETO

MALVA ESPINOSA

INTRODUCCIÓN

Una reflexión sobre el sindicalismo en el Chile actual no puede hacerse sino en el contexto de las diferentes transformaciones que ha vivido el país durante los últimos treinta años. Estas van desde el paso de la dictadura a la democracia; la inserción del país en el mundo globalizado con un nuevo modelo de acumulación capitalista, proceso que no sólo se da en los aspectos económicos, sino también en el espíritu de una época; y la transición desde una cultura política de representación popular hacia una oferta política más o menos indiferenciada que va instalando en la percepción ciudadana que centro, derecha e izquierda (y sus combinaciones de centro-derecha y centro-izquierda) ya no tienen importancia en el diseño de la política y de lo que se le ofrece al país, máxime cuando se está en periodos eleccionarios y las fronteras de la centro-izquierda se transgreden por un populismo de derecha. Este discurso se asienta justamente en los vacíos y las debilidades de las políticas democráticas progresistas durante la transición.

La tesis que queremos sostener en este trabajo es la siguiente: la debilidad sindical, tanto en lo que se refiere a las exiguas tasas de sindicalización como a la ausencia de un actor social fuerte en el escenario político y social, se debe no sólo a variables estructurales, tales como la inestabilidad y precarización del mercado de trabajo —que ciertamente influyen—, sino también y de manera muy decisiva a la insuficiencia de una política democrática hacia los trabajadores, en la que los gobiernos y los partidos de la Concertación tienen una cuota de responsabilidad. Ello, independientemente de que esta situación pueda explicarse por las especificidades de la transición y por la necesidad de estabilizar y dar gobernabilidad a la democracia recuperada. Parfraseando a Patricio Aylwin, quien en algún momento acuñó su famosa frase de "justicia dentro de lo posible" para el ámbito de los

derechos humanos, podríamos decir que en lo laboral la justicia social lograda –dentro de lo posible– deja un amplio margen e innumerables desafíos que deberán ser abordados en la postransición. El principal de ellos es la ausencia de un movimiento sindical fuerte, representativo, con presencia e incidencia en las decisiones de política económica y social que competen al mundo de los trabajadores y trabajadoras, es decir, a los seis millones de ciudadanos –hombres y mujeres–, que constituyen una mayoría silenciosa, atomizada, presa del temor y la incertidumbre, muy lejos de aquella figura histórica a la cual Allende dirigió sus últimas palabras: “trabajadores de mi patria tengo fe en Chile y su destino...”.

La debilidad sindical y las tensiones que vive el mundo laboral en general se asientan en procesos de diferente orden, tanto por las especificidades nacionales como por los procesos de alcance universal que se incuban en este cambio de época. Sin embargo, podemos pensar que un proyecto democrático de contenido progresista no sólo es posible, sino necesario para asegurar estabilidad y gobernabilidad democrática a nuestros países y, aun más, para recrear un proyecto de cambio que cumpla la promesa democrática de una sociedad mejor.

El Chile de la postransición requiere de un sistema democrático que vaya más allá de la institucionalidad política formal. Precisamos de una estabilidad democrática sobre un piso de justicia y equidad. Ello obliga a diseñar políticas de Estado que permitan un fortalecimiento de la sociedad civil con actores sociales legítimos y reconocidos en su condición de sujetos de la democracia. Esto requiere de un Estado de Derecho que sea garante de los derechos humanos en toda su extensión y plenitud –concebidos desde los derechos fundamentales inherentes a la persona, los derechos laborales específicos en el ámbito del trabajo, pasando por los derechos económicos y sociales, hasta los que se han llamado de tercera generación– y de los derechos ecológicos, planetarios, que atañen a la sobrevivencia de la humanidad. En suma, el desafío central es cómo hacer de la democracia una cultura de convivencia social más solidaria y equitativa para todos. Países viables, civilizados y con fuerzas sociales que permitan equilibrar, o al menos tener alguna respuesta, ante la concentración del poder económico y político, que sin contrapeso social se va imponiendo inexorablemente en el actual modelo de desarrollo capitalista globalizado.

Naturalmente, esto remite al tema de la correlación de fuerzas en el conflicto capital-trabajo. No habrá equidad en un país con las condiciones de trabajo y de ingreso, y con la capacidad organizativa laboral

desmedrada que presenta Chile.¹ Hoy en día, cuando la distribución del ingreso es un tema obligado, se la suele asociar a las políticas sociales redistributivas del Estado. Sin negar que estas ayudan a paliar los desequilibrios sociales, no debe olvidarse que la causa principal de la mala distribución del ingreso está en la distribución de los ingresos del trabajo y en las rentabilidades abusivas que presentan las grandes compañías responsables del 90% del PIB. Sin el progreso de los trabajadores –hombres y mujeres– no podrá haber un desarrollo de Chile, no importa cuán alto se esté en los índices de competitividad económica. Mejorar la situación laboral en Chile es uno de los más acuciantes desafíos de la posttransición. Mejorar la representatividad de los trabajadores, fortalecer sus organizaciones y hacerlos transitar desde una condición preciadana a una ciudadanía completa es una tarea esencialmente política. El gobierno, los partidos de la Concertación y el propio movimiento sindical requieren hacer un cambio estratégico fundamental: colocar el trabajo en la agenda democrática y en el imaginario social.

Esta reflexión sobre el sindicalismo actual y sus perspectivas en Chile se sitúa fundamentalmente en aquellos factores políticos, ideológicos y culturales que han incidido en la configuración del sindicalismo como actor sociopolítico, papel que con altibajos ha venido representando fundamentalmente la Central Única de Trabajadores (CUT).² La pregunta que hay detrás es qué lugar tiene el actor laboral organizado en el funcionamiento de la democracia y cuáles son los procesos que mayormente han incidido en su desdibujamiento. Ello, porque resulta indispensable pensar en un proyecto democrático para la posttransición donde las grandes mayorías asalariadas estén representadas por un actor social fuerte, con capacidad de negociación y que pueda ejercer un liderazgo movilizador y constitutivo de la ciudadanía.

¹ Sobre la situación laboral en Chile, abordada desde sus múltiples dimensiones y perspectivas disciplinarias, puede consultarse la extensa bibliografía del Departamento de Estudios de la Dirección del Trabajo en sus diferentes series de publicaciones: Temas Laborales, Cuadernos de Investigación, Aportes al Debate y las Encuestas Laborales (Encla 1998, 1999 y 2002). En www.direcciondeltrabajo.cl, sección Centro de Documentación y Estadísticas.

² La existencia de la Central Autónoma de Trabajadores, formada el año 2003, y del UNETE, grupo que se escindió de la Central Única de Trabajadores (CUT) en el último congreso el año 2004, abren una coyuntura nueva para el sindicalismo chileno de tercer nivel. Sin embargo, estas reflexiones están centradas fundamentalmente en la CUT, el actor más directamente vinculado con la tradición histórica, tanto por sus personeros como por su cultura.

1. EL CAMBIO DE ÉPOCA Y LAS PRESIONES SOBRE EL SUJETO LABORAL HISTÓRICO

El sindicalismo en Chile vive, como en todos los países del mundo, un momento de inflexión.³ La acción colectiva, los movimientos sociales, la respuesta social a la concentración del poder económico y político se han visto debilitados no sólo por este nuevo orden económico mundial –la globalización del capitalismo–, sino también por la ideología neoliberal que lo acompaña y que ha sido el pensamiento dominante en las pasadas dos décadas. Superar esta debilidad social y neutralizar el pensamiento político e ideológico que aboga por una economía sin sociedad y una democracia sin sujetos, deviene en uno de los grandes desafíos del siglo XXI.

Durante la era industrial, con todas sus especificidades para el centro y la periferia, las relaciones laborales estaban marcadas por una cierta legitimidad de la necesidad de producir un equilibrio de poder entre la parte laboral y empresarial. Esto cristalizaba en una creciente acumulación de normas nacionales e internacionales –los códigos laborales y la normativa OIT–, que propendían a la protección de los derechos laborales y a una ampliación hacia los derechos económicos y sociales. El sindicalismo era un actor relevante y legítimo para el logro de consensos sociales y políticos democráticos. Esto era consubstancial al fortalecimiento del mercado interno en la dimensión económica y a la ampliación de la democracia en la dimensión política. La máxima expresión histórica de congruencia entre la dimensión económica y la dimensión política y social fueron los Estados de bienestar que se impusieron en Europa hasta los años ochenta. Hoy en día este modelo está tensionado por la globalización. Primero, porque los Estados nacionales han diluido sus fronteras económicas y debilitado los consensos democráticos para la equidad. La apertura al flujo de capitales y a la circulación de bienes y servicios hace irrelevantes las políticas de protección, y ello afecta de manera particular a los mercados de trabajo. Según el pensamiento económico neoliberal, la competitividad internacional se funda en la movilidad de los capitales y en la desregulación de las normas protectoras al

³ Véase, Juan Manuel Sepúlveda, "El movimiento sindical: un actor en busca de su identidad". Oficina de Actividades para los trabajadores. Equipo Técnico Multidisciplinario para Centroamérica, Cuba, Haití, México, Panamá y República Dominicana. OIT. www.ilo.org.

trabajo. La inseguridad socioeconómica y el miedo a la incertidumbre del futuro, pampean en el mundo.

Situándonos en América Latina –que no ha tenido Estados de bienestar ni consolidación democrática–, el temor no es a perder derechos o a dismantelar consensos democráticos que nunca existieron, o que fueron en cualquier caso frágiles, sino, por el contrario, el temor es a no lograr ni siquiera como horizonte utópico una democracia más inclusiva basada en consensos sociales y políticos para un modelo de desarrollo con libertad y equidad. Esto es, una democracia plural, en que los intereses sociales estén representados, en donde las demandas sociales puedan ser procesadas por el sistema político, en donde existan canales de participación ciudadana en las materias que competen a la vida social y en la cual los trabajadores y sus sindicatos puedan hacer exigibles el derecho al trabajo en condiciones dignas y con una justa retribución. Una sociedad que sea capaz de ejercer algún control hacia las esferas de la economía de mercado y la política.

Aun aceptando que vivimos un cambio de época y que se instalan en el mundo procesos económicos y sociales que parecen incontrarrestables y de los cuales nuestro país forma parte, sostenemos que la crisis sindical o –si se quiere poner en términos más amplios– la ausencia de un tejido social plural que responda a las problemáticas de una sociedad diversa, es más política que económica y más cultural e ideológica que una consecuencia directa de los cambios estructurales en la manera de producir y de organizar la vida económica. Aunque indudablemente estos cambios estructurales influyen, no es menos cierto que el período de inmovilismo social está cambiando. Prueba de ello es la dinámica sindical internacional, en la que se propone la unión de las grandes organizaciones sindicales internacionales y la emergencia de estrategias conjuntas para reactivar no sólo la representación laboral en la dinámica del capitalismo mundial, sino también un paradigma de ordenamiento económico-social alternativo a la sociedad de mercado, la sociedad del trabajo, como premisa del desarrollo sustentable.⁴ También hay signos alentadores de recomposición de la acción colectiva en los movimientos antiglobalización y en el rotundo NO a la Constitución europea en la coyuntura reciente.

⁴ Véase del director del Instituto del Mundo del Trabajo, en Argentina, Julio Godio: "El paradigma de la 'sociedad del trabajo'". Estas ideas fueron adoptadas en el XVI Congreso Continental Ordinario de la CIOST/ORIT, en abril de 2005. Véase, ORIT info, Año 2, N° 04, en: www.cioslorit.org/congreso16/

Aun cuando entendamos que hoy en día los trabajadores y trabajadoras del mundo sufren procesos de deterioro del empleo y pierden derechos adquiridos, y en ese sentido ven resentida su condición ciudadana, no es menos cierto que el contexto económico y político adverso es el espacio natural en el cual se han debido desarrollar los movimientos sociales, y particularmente el sindicalismo. La situación actual desde el punto de vista de la atomización y de la heterogeneidad de los trabajadores, y de sus dificultades de organización y representación, no pueden ser en el siglo XXI peores que las que se debieron sortear en el largo itinerario de consolidación los trabajadores de otras épocas. Mal que mal, existe una experiencia histórica acumulada, un marco normativo protector que se expresa en los códigos laborales y un espacio democrático que aun siendo incompleto no se puede comparar con la falta de garantías que vivió Chile incluso antes del quiebre democrático o en la historia reciente bajo el régimen dictatorial.

En los albores de la industrialización, los trabajadores también eran una masa atomizada, heterogénea, excluida del conocimiento, despojada de derechos políticos, paupérrima y sometida a condiciones inhumanas de explotación. Sin ir más lejos, en nuestra propia historia, recién en 1968 los campesinos pudieron sindicalizarse, las mujeres hasta mediados del siglo XX no podían votar, los migrantes del campo a las ciudades no tenían un trabajo estable para toda la vida y, por el contrario, engrosaban los cinturones de miseria en las poblaciones callampa, trabajando al margen de toda ley protectora y de todo trabajo digno.

El sindicalismo histórico en Chile estaba ligado a la minería y a las grandes empresas públicas, productivas y de servicios, Enap, CAP, Correos de Chile, Ferrocarriles del Estado, Transportes del Estado, y a las nacientes industrias que surgían en el proceso de substitución de las importaciones y en ese sentido también estaban radicados en una minoría. La diferencia del sindicalismo histórico al actual no estaba tanto en su extensión y densidad organizativa o en la heterogeneidad de sus representados, sino en el papel de representación social y política que significaba la CUT.

Hoy en día también existe un activo sindical de alrededor de 680 mil afiliados (11,6% de los ocupados) y que como tasa se ha mantenido estable desde 1998.⁵ Este activo sindical se ubica en su mayoría

⁵ Véase "Compendio Estadístico", capítulo "Sindicalismo", en www.direcciondeltrabajo.cl, sección Centro de Documentación y Estadísticas.

en las grandes empresas y posiblemente la tasa de afiliación no pueda extenderse mucho más, debido a que el sindicalismo es viable cuando hay una concentración importante de trabajadores. Tomando en cuenta que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras se halla en las empresas pequeñas, donde las posibilidades de sindicalización son bajas, la representación necesariamente deberá radicarse en los niveles superiores, federaciones, confederaciones y centrales. De allí la importancia de tener un actor sociopolítico que pueda generar una agenda de mejoramiento y posicionamiento del mundo laboral en el escenario económico y sociopolítico. Sea por la vía de las negociaciones directas con el Estado, sea por la vía de los mecanismos de diálogo social con los empresarios y el gobierno, o sea incluso por la vía de la movilización social, mecanismo legítimo en democracia y que en el Chile de la transición ha sido estigmatizado como una amenaza a ella.

2. LA AUSENCIA DE UN HORIZONTE DE CAMBIO EN EL IMAGINARIO COLECTIVO

La CUT histórica era en el imaginario colectivo la voz y representante de los trabajadores. No importaba si se estaba afiliado o no a un sindicato. Su poder era político y social, y su influencia se extendía mucho más allá de los trabajadores sindicalizados. Tenía un liderazgo amplio en el que cabían las diferentes categorías de trabajadores, independientemente de su heterogeneidad de clase, de oficio o de cuán consolidado estuviera un sindicato, porque la convocatoria estaba en la existencia de un proyecto histórico de cambio, en la búsqueda de una sociedad mejor. La promesa de otra sociedad más justa y democrática estaba sugerida tanto desde la perspectiva social cristiana –la “revolución en libertad” de Frei– hasta la “vía chilena al socialismo” de Allende. Una sociedad en la que el pueblo sería protagonista.

Partidos y sindicatos compartían ese proyecto nacional popular, y lo social se constituía desde la política.⁶ Las identidades sociales y la acción colectiva de trabajadores, estudiantes, pobladores, campesinos, mujeres –especialmente de estas últimas con relación a sus derechos políticos–, estaban íntimamente imbricadas con la política. Un papel no menor en la constitución de estas identidades populares lo

⁶ Véase M. A. Garretón, *La sociedad en que vivi(re)mos* (Santiago: Lom, 2000). También véase, “A propósito del paro de la CUT: movimiento social y política”, FORO, septiembre de 2003.

jugaban sectores de la intelectualidad. Pensadores, artistas, científicos, profesionales, universitarios, se fundían en la categoría histórica de pueblo, en la que cabían prácticamente todas las categorías sociales con excepción de los dueños del capital. La épica de lo popular estaba legitimada por el pensamiento crítico que fundía la *intelligenza* con la justicia social, el mundo ilustrado con lo político, el cambio con el futuro.

Parte importante de esta fuerza ideológica movilizadora se mantuvo durante la lucha antidictatorial. El horizonte utópico allí estaba dado con la recuperación de la democracia. En ese período el sindicalismo mantuvo una fuerza de convocatoria cuando los partidos estaban proscritos. Fue la resistencia social la que permitió socavar el régimen de Pinochet. Sin una sociedad movilizadora, sin las denuncias de violaciones a los derechos humanos, sin las protestas en las calles, sin las mujeres proclamando democracia en el país y en la casa, no se habría ganado el plebiscito de octubre de 1988. La política de persecución y el terrorismo de Estado del régimen de Pinochet no fueron suficientes para destruir el tejido social, aun cuando en la actualidad esté debilitado.

La actual fragilidad de la sociedad civil en general y del sindicalismo en particular tiene más que ver con un proyecto de democracia incompleto, con una transición que sabemos cuándo empezó pero no cuándo va a terminar, y que ha ido divorciando lo social y lo político. Ha habido cambios fundamentales en el rol de los partidos políticos y su relación con la sociedad. Durante los años noventa, la categoría <pueblo> desapareció del horizonte semántico del discurso político (con excepción de la izquierda extraparlamentaria) y fue sustituida por la categoría <gente>, cuya representación es reclamada en el discurso político transversal, incluida la propia derecha. Este discurso político indiferenciado ha hecho desaparecer del horizonte social a los trabajadores y trabajadoras, e incluso a la propia problemática asociada al trabajo. Por poner sólo un ejemplo: durante la discusión de las reformas laborales, la gran argumentación colocada por la derecha (la cual fue también respondida por el gobierno) fue si las reformas eran pro o antiempleo, cuando en realidad de lo que se trataba era de fortalecer algunos derechos de los trabajadores, en particular las posibilidades de organización sindical.⁷ Esta situación, más allá de

⁷ Entrevistas realizadas a trabajadores, hombres y mujeres, después de aprobadas las reformas laborales mostraron que la gran mayoría no sabía cuáles normas se

ser un fenómeno comunicacional, es una señal que alude a un fenómeno político más profundo. El mundo político progresista de hoy no se organiza en torno a proyectos políticos sustantivos (como era el proyecto nacional popular previo al quiebre democrático de 1973 o como lo fue la propia lucha antidictatorial y la recuperación de la democracia, que prometía un cambio trascendente durante los años ochenta), sino que se ha venido organizando en torno a una oferta política más o menos indiferenciada que ofrece una gobernabilidad económica (administración del modelo) y una gobernabilidad política instrumental (aunque para ello deba renunciar a la profundización de la democracia). Esto permite que la derecha usurpe en forma permanente los ejes temáticos que corresponderían a las fuerzas políticas democráticas de la Concertación. Sucedió en la campaña electoral anterior con el eslogan del cambio y en la actual, con la igualdad, de Lavín, y aunque rara vez la derecha se refiera al pueblo o a los trabajadores, algunas insinuaciones podemos atisbar en su oportunismo, al pretender encarnar lo "popular".

3. EL PESO DE LA HERENCIA AUTORITARIA

La contrarrevolución conservadora y la ideología neoliberal tuvieron consecuencias devastadoras para la democracia en América Latina, incluyendo a Chile. Países que sin llegar a tener democracias maduras ni menos Estados de bienestar debieron sobrevivir a regímenes dictatoriales con su secuela de terror, violaciones a los derechos humanos y diseños institucionales autoritarios que siguieron penando inclusive después de recuperada la democracia. En el caso chileno, fue instalado el miedo, el control, la tutela sobre la política y la sociedad, y los pilares del modelo de acumulación que se fundaron bajo la dictadura y que se han mantenido durante largos procesos de transición que sabemos cuándo empezaron pero aún no sabemos cuándo terminan. Al menos en el caso chileno, varias veces se ha intentado decretar su fin... sin embargo, los porfiados hechos aún penan en la conciencia

habían aprobado y para qué les servían dichas reformas a los trabajadores. Sin embargo, tenían temor de que estas pudieran afectar el empleo, que era precisamente lo que se desprendía del discurso empresarial dominante en esa coyuntura. Véase, M. Espinosa y P. Morris, "Calidad de vida en el trabajo: percepciones de los trabajadores". Dirección del Trabajo, Cuaderno de investigación N° 16. En www.direcciondeltrabajo.cl, sección Centro de Documentación y Estadísticas.

democrática nacional. Un sistema electoral excluyente, un equilibrio de fuerzas forzado por el sistema binominal, el veto y el freno de la oposición a las políticas democráticas y reglas del juego tanto económicas como políticas que favorecen la concentración del poder.

También producto de las transformaciones del capitalismo globalizado, los trabajadores asalariados –el sujeto representado por el sindicalismo tradicional– han sufrido una serie de transformaciones que van desde cuestiones estructurales asociadas a la precarización del empleo, a la emergencia de empleos atípicos o figuras contractuales híbridas que muchas veces escapan de los mecanismos de protección y posibilidades de organización, hasta la emergencia de altos contingentes de desempleados, que por definición no han sido parte de los representados por el sindicalismo.⁸ La organización de la producción y los servicios en importantes cadenas de subcontratación van generando cambios radicales en los mercados de trabajo, por ejemplo, pocos empleos de calidad en los centros económicos gravitantes que, vía los encadenamientos productivos, trasladan costos a las unidades productivas más pequeñas. De esta manera se desplaza la precariedad hacia los sectores que cuantitativamente son significativos para los empleos: la pequeña y mediana empresa, donde como ya se dijo es más difícil la sindicalización y la negociación colectiva. La externalización de actividades productivas y de servicios, entre las cuales también se incluye la intermediación de trabajadores, genera trabajos inestables, de corta duración, con malas condiciones de trabajo y de salarios que no permiten a los trabajadores una proyección en el tiempo. Este contexto de inestabilidad produce una fuerte sensación de vulnerabilidad entre los asalariados y el temor a perder el empleo o a cuidarlo cuando se ha estado desempleado, desestimula la sindicalización y alimenta el escepticismo y la desafección de los trabajadores hacia la acción colectiva.

No menos importante en estos cambios es la revolución tecnológica, que se expande no sólo a las actividades económicas, sino que

⁸ Sólo a manera ilustrativa sobre la precarización y desprotección del empleo basten algunas cifras entregadas por el Seguro de Cesantía que son reveladoras de la inestabilidad, la rotación y los bajos salarios. Datos correspondientes al período octubre de 2002 y abril de 2004 sobre 2.658.331 afiliados (77% de la fuerza de trabajo) mostraron que el 64,8% de los contratos generados en el período fueron a plazo fijo u obra o faena, o sea, empleos temporales; el 50% de esos contratos duró menos de seis meses y el 90% menos de un año. La renta promedio para el conjunto de trabajadores afiliados fue de 184.288 pesos.

permea, vía las comunicaciones globalizadas, la propia percepción que tienen los trabajadores y trabajadoras de su inserción en la vida económica, política y social. Desde la sociología se ha tratado el tema como procesos de individuación o cambio en las identidades –quiénes son y cómo se ven a sí mismos– de los sujetos individuales y sociales, y cómo ellos se plantean frente a sus aspiraciones y demandas. Los sujetos laborales de hoy transitan solos en el contexto de la adversidad, porque no hay un “nosotros” como sujeto colectivo que permita transitar desde la insatisfacción individual a la demanda social que es, o debería ser, el sustento social de la participación.

Se suman a estos procesos estructurales y culturales factores ideológicos tales como la fuerte influencia de la ideología neoliberal en la manera que el empresariado concibe las relaciones laborales, abogando por el debilitamiento e incluso la desaparición de los sindicatos y la acción colectiva. El discurso antisindical es un reflejo de estructuras autoritarias en los centros de trabajo que inhiben no sólo la organización de los trabajadores, sino también la propia conciencia y la concepción de sí mismos como sujetos de derechos. Los trabajadores y trabajadoras tienen un nivel bajo de expectativas, incluso reclaman por cuestiones tan básicas como que quisieran que se les paguen sus salarios a tiempo y ser tratados con dignidad. Subordinan los derechos a la estabilidad, particularmente por los climas autoritarios que se viven en las empresas.⁹ Durante la transición ha sido recurrente el discurso antisindical, en particular cuando se han discutido en el Parlamento las reformas laborales. A diferencia de los trabajadores, el empresariado actúa en el sentido histórico de una clase: tiene proyecto, ideología, discurso, poder y presencia social, y el gran empresariado mantiene un liderazgo hacia el sector privado, independientemente de las diferencias de intereses y heterogeneidad de sus componentes. Esta constitución plena de actor social se la debe al régimen militar que le permitió adoptar un rol gravitante en el modelo económico y adquirir un poder político intocable en el diseño de la democracia restringida. La política de los consensos (que dominó fuertemente los primeros años de la transición) fortaleció aun más el rol de veto y de equiparamiento de fuerzas en la arena social. El liderazgo empresarial, encarnado en la Confederación de la Producción y el Comercio, Sociedad de Fomento Fabril y otros gremios de la

⁹ Véase la obra antes citada de M. Espinosa y P. Morris, “Calidad de vida en el trabajo...”.

gran empresa, creció a la par que se fue erosionando la influencia de la CUT. La paradoja de la transición es que la clase empresaria fue constituida desde lo político, en la medida en que gobierno, partidos y empresarios compartían el discurso del éxito económico y la complacencia por la performance de la economía chilena en el contexto internacional. El proyecto país ha sido durante largos años hecho a la medida y semejanza del sueño empresarial: libertad para emprender y crecimiento económico; todo lo demás vendría por añadidura.

4. LA DEBILIDAD DE LAS POLÍTICAS LABORALES DE LOS GOBIERNOS DE LA CONCERTACIÓN

Independientemente de que los gobiernos de la Concertación puedan exhibir algunos avances con relación a las políticas laborales (tales como el reconocimiento legal de las centrales sindicales; la ratificación de los convenios 86 y 98 de la OIT, que garantizan la organización sindical y la negociación colectiva; la creación del seguro de desempleo; la disminución de la jornada de trabajo de 48 a 45 horas semanales; la reforma a la ley de capacitación y la reforma histórica a la justicia laboral, entre otras medidas de importancia) hay en el mundo laboral la percepción de que los gobiernos de la Concertación están en deuda con los trabajadores. Ello, porque algunas de las demandas más emblemáticas del movimiento sindical se han visto frustradas. Por ejemplo, la negociación colectiva interempresa (que permitiría acumulación de fuerza sindical) y la supresión de la figura de los reemplazantes a la huelga, que debilita este recurso como fuente de presión en las situaciones de conflicto. También, porque la dirigencia sindical tiene el convencimiento de que desde los diferentes gobiernos de la Concertación no se ha cumplido con el programa propuesto y con los acuerdos previos a la recuperación de la democracia, que expresaban la intención de recuperar las conquistas perdidas durante los años de la dictadura.¹⁰

Sin embargo, a principios de los años noventa la promesa democrática de producir cambios fundamentales al statu quo heredado del régimen dictatorial parecía comenzar a cumplirse para el mundo de los trabajadores. El gobierno recién inaugurado de Patricio Aylwin daba inicio a un proyecto de reformas laborales y propiciaba un

¹⁰ Véase Arturo Martínez, "Estrategia sindical en un Chile internacionalizado," *Mitos y realidades del mercado laboral en Chile*, ed. Jaime Ensignia (Santiago: Fundación Friedrich Ebert, 2005).

Acuerdo Marco Tripartito: una mesa de trabajo que reunía a la Confederación de la Producción y el Comercio por la parte empresaria y a la CUT, por los trabajadores.

Estas dos iniciativas eran de extraordinaria importancia: la primera de ellas apuntaba a modificar el Código del Trabajo nacido del Plan Laboral de la dictadura que contenía en los hechos innumerables ventajas para el manejo unilateral de las relaciones laborales por parte de los empleadores;¹¹ la segunda pretendía inaugurar una política de diálogo tripartito o concertación social, con actores sociales fuertes, constituidos, dotados de legitimidad y representatividad de sus intereses, capaces de dialogar, negociar y llegar a acuerdos de interés nacional. Vale decir, una figura más política que corporativa que intentaba poner en el escenario político de la transición la insoslayable existencia del conflicto, por lo demás legítimo, entre capital y trabajo.

En los gobiernos sucesivos, de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos, estas dos grandes vertientes de la política laboral –reformas laborales y diálogo social– se mantuvieron como un norte necesario; sin embargo, no es aventurado afirmar que los logros fueron moderados en lo que se refiere a las reformas al Código del Trabajo y un fracaso en lo que se refiere a la política de diálogo social. De hecho, el Acuerdo Marco Tripartito del gobierno de Aylwin terminó diluyéndose a poco andar; el Foro Productivo del gobierno de Frei no pasó de ser una iniciativa de difusión de las ventajas de las buenas prácticas en materia de relaciones laborales, y el consejo económico-social del gobierno de Lagos quedó en un anteproyecto de ley que no ha visto hasta hoy la forma ni la luz para su existencia y funcionamiento institucional. Por otra parte, ambas vertientes de la política laboral estaban íntimamente relacionadas. Sin acuerdos amplios no era posible avanzar sustantivamente en las reformas.

¹¹ Entre otras ventajas empresariales estaban el despido sin expresión de causa; indemnizaciones reducidas (sólo tres meses por año de servicio); limitación del derecho a huelga (tanto por la norma que reconoce el derecho sólo durante la negociación colectiva, como por la posibilidad de contratar reemplazantes durante la huelga; normas que aún se mantienen); exclusión de importantes segmentos de trabajadores de la negociación colectiva, como es el caso de los temporeros, y una excesiva reglamentación estatal para la sindicalización y la negociación colectiva que conspiraban (y aún conspiran en muchos aspectos) para desarrollar las capacidades de negociación de los trabajadores frente al poder empleador.

Reformas laborales moderadas y de lenta incubación¹² (insuficientes, dice la CUT; antiempleo, dicen los empresarios) y diálogos sociales frustrados son parte del contexto necesario para examinar la situación del sindicalismo en la actualidad. Ello, por una sencilla razón: la escasa voluntad de dialogar de los actores y la debilidad del gobierno para liderar los cambios sustantivos en el ámbito laboral no hacen sino ocultar una realidad más profunda, esto es, la limitación de la democracia de la transición para cambiar la correlación de fuerzas entre el gobierno y la oposición como consecuencia directa del sistema electoral binominal. En la arena política esto se manifiesta en el persistente cerco opositor en el Congreso a todos los proyectos de contenido progresivo, entre otros, las reformas laborales en las que la derecha y los empresarios han ejercido un veto de facto. En la arena social eso se manifiesta en el enorme desequilibrio entre el poder de los empresarios y el de los trabajadores.

No obstante, buscar únicamente una explicación a la debilidad de las políticas laborales de los gobiernos de la Concertación en la correlación de fuerzas en el Parlamento, parece insuficiente. Durante varios años el discurso del éxito económico oscureció la realidad laboral que se escondía tras las tasas de crecimiento sostenido, en las bajas tasas de desempleo y en los aumentos del salario mínimo. No fue sino hasta la crisis asiática de 1998 cuando la economía chilena mostró su vulnerabilidad a los factores externos y, al igual que cuando en las catástrofes naturales aparece la pobreza, la crisis hizo justamente aflorar la precariedad del empleo y, una vez más, los mayores costos de esa crisis los pagaron los trabajadores. Primero, porque las grandes compañías ajustaron sus plantas con despidos masivos para mantener sus rentabilidades.¹³ Segundo, porque los salarios se estancaron y aumentó la intensidad del trabajo (producir lo mismo con menos gente). Tercero, porque las olvidadas micro y pequeñas empresas develaron que sin ser el motor de la economía (menos del

¹² Debe recordarse que las primeras reformas laborales se realizaron en 1991 y 1992, en los inicios de la transición. Un segundo proyecto de reformas se discutió entre 1995 y 1999 y *ad portas* de la elección presidencial, el Congreso terminó por abortar un preacuerdo alcanzado entre el ministro del Trabajo de la época y representantes de la oposición. El Senado, con los votos de la derecha, no aprobó la idea de legislar y dicho proyecto murió. Finalmente, durante el gobierno de Lagos a fines de 2001 se aprobó un segundo paquete de reformas que son las que actualmente rigen en el código laboral vigente.

¹³ Véase, Encuesta Laboral 1999 (Enclá 99). Dirección del Trabajo, en www.direcciondeltrabajo.cl

10% del producto) eran la principal fuente de trabajo del país, responsables de más del 70% del empleo (que por lo demás es lo que mueve al mercado interno). Tanto los temas del empleo como la vulnerabilidad de las empresas pequeñas han copado la agenda laboral de los últimos tres años, porque la crisis dejó de manifiesto que no existían políticas de Estado que pudieran prever la fragilidad del factor trabajo en momentos de turbulencias económicas.

Puede afirmarse que en los gobiernos de la Concertación la situación laboral se ha dejado librada a la dinámica económica. Naturalmente, sin crecimiento no puede haber un mejoramiento de la situación laboral, pero sólo con crecimiento tampoco. Se necesita un marco de protección al trabajo y políticas laborales permanentes, sistemáticas y decididas que aseguren no sólo el empleo sino la calidad del mismo. Y, más importante aun, se requiere fortalecer la institucionalidad laboral, es decir, el sindicalismo y la negociación colectiva. Tal como ha venido planteando la OIT, se requiere avanzar hacia un paradigma de trabajo decente y ello no debido únicamente a un imperativo ético de generar mejores condiciones de trabajo, sino sobre todo por las exigencias de la propia competitividad internacional. La situación laboral y medioambiental estarán en el centro del éxito de las oportunidades que abren los tratados de libre comercio. La competencia a la baja, es decir, que se funda en bajos costos laborales y consecuencias medioambientales tiene riesgos muy altos de acusaciones de *dumping* o competencia desleal. Y desde ya se sabe que la competitividad a la baja, fundada sólo en costos, está amenazada por el ingreso al mercado mundial de países como India y China. La batalla que se avecina es por mantener nichos específicos de mercado y por mejorar la productividad: conocimiento, tecnología y actores laborales constituidos.

5. LOS PROBLEMAS DEL PROPIO ACTOR SINDICAL Y LOS DESAFÍOS INTERNOS

Dentro de esta constelación de factores que explican la debilidad sindical, un papel no menor lo juegan las propias contradicciones internas y limitaciones del movimiento sindical. Durante la transición, la CUT estuvo encapsulada en las dinámicas internas y en la lógica política partidista de sus diversos componentes ideológicos. La coexistencia de partidos extraparlamentarios, en particular el PC y los partidos de la Concertación, e inclusive diferencias entre segmentos dentro de estos mismos partidos, han enfrentado la contradicción

entre la realización de una estrategia de colaboración o una de confrontación con el gobierno, como sucedió por ejemplo cuando Manuel Bustos (del PDC) firmó el Acuerdo Marco Tripartito a inicios de la transición y fue cuestionado por sectores radicalizados que esperaban una estrategia más confrontacional. También las pugnas internas por liderazgos individuales (que podrían explicar la escisión del año 2004) han impedido que la Central desarrolle a plenitud una situación de mayor autonomía.

Sin embargo, durante los últimos quince años, la CUT no ha tenido ni una estrategia confrontacional ni una estrategia de colaboración, sino más bien una actividad básicamente reactiva al gobierno. Ha concurrido o se ha retirado de las iniciativas de diálogo (que como ya se ha dicho han sido intentos frustrados) y ha centrado su discurso en las reformas laborales, sea para reiterar lo insuficientes que estas han sido, sea para reafirmar las demandas que considera insatisfechas. En ese sentido ha tenido una agenda restrictiva que ha terminado por agotarse en una crítica permanente a las políticas del gobierno y a la actitud de los empresarios, sin desarrollar una acción y un discurso sindical que permita aumentar su base de apoyo o generar un liderazgo político y cultural propio.

Esta situación está cambiando a partir del último congreso (2003-2004). Pareciera que la propia amenaza de división o merma, al menos de sus componentes, ha servido para realizar un análisis hacia el interior de la organización y para reconocer las falencias y debilidades de más de una década perdida.¹⁴

Si la CUT quiere sobrevivir y más que nada crecer y desarrollarse como un actor sociopolítico, tiene que, a lo menos, iniciar y/o profundizar diferentes procesos y desarrollar su acción y discurso tanto hacia el sistema político, partidos, gobierno, Parlamento, como hacia la sociedad que está atravesando por problemáticas diversas y complejas. En ese sentido, más que un liderazgo meramente corporativo necesita generar un liderazgo cultural, debe transformarse en un líder de opinión, decir y actuar sobre cosas que le importan a la ciudadanía. Esto no pareciera una empresa imposible. Puede y ha de actuar sobre el malestar social, la búsqueda de sentido y el deseo de ser sujeto que se esconde tras la demanda de dignidad por parte del sector laboral.

¹⁴ Véase la obra antes citada de Arturo Martínez, "Estrategia sindical en un Chile internacionalizado".

Entre otros desafíos, los siguientes parecieran ser urgentes:

- 1° Democratizar y aumentar la afiliación sindical. La CUT está compuesta por federaciones, confederaciones, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, el Colegio de Profesores y sindicatos nacionales. ¿Por qué no permitir la afiliación directa de todos los sindicatos que sin estar federados o confederados quisieran hacerlo?
- 2° Proponerse objetivos estratégicos en los que no jueguen un papel menor las alianzas internacionales. Ello, máxime cuando la economía transnacionalizada exige respuestas transnacionalizadas.¹⁵ El acercamiento a los sindicalismos internacionales y también latinoamericanos, en especial los del Mercosur, deberían ser una prioridad en la estrategia sindical. Asimismo, utilizar todos los espacios que abren los tratados de libre comercio y los acuerdos firmados por el gobierno con normas y directrices internacionales, por ejemplo, las directrices de la OCDE.¹⁶
- 3° Buscar puntos de acercamiento y/o estrategias conjuntas con la CAT, el UNETE y las expresiones que pudieran ir surgiendo de la diversidad. Puede ser sano tener una competencia por el liderazgo hacia el colectivo laboral en un proceso que tendencialmente pudiera converger a la unidad, pero que no debiera significar una homogenización. Es necesario que la diversidad se exprese aunque ella muestre ideas, componentes sociales y/o políticos con diferentes tendencias o matices.
- 4° Realizar acercamientos y en lo posible retroalimentarse de otros movimientos sociales que activamente emergen con un discurso crítico al modelo y al statu quo. La CUT debe tener una postura y un pronunciamiento sobre las diversas materias que afectan la vida nacional y que constituyen preocupaciones y nuevas dimensiones de identidad de la ciudadanía. Por ejemplo, el tema medioambiental, los derechos de los consumidores, la problemática étnica, los derechos humanos, los desempleados, etcétera.
- 5° Asumir uno de los fenómenos nuevos en la situación laboral: la incorporación creciente de la mujer al trabajo. Una de las grandes limitaciones de la acción sindical está en la invisibilidad que ha

¹⁵ Véase Ana Bell, "El TLC Chile-Estados Unidos y los desafíos para el movimiento sindical chileno," *Mitos y realidades del mercado laboral en Chile*, ed. Jaime Ensignia (Santiago: Fundación Friedrich Ebert, 2005).

¹⁶ Véase Martín Pascual, "Las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales y los trabajadores chilenos," *Mitos y realidades del mercado laboral en Chile*, ed. Jaime Ensignia (Santiago: Fundación Friedrich Ebert, 2005).

tenido la problemática mujer y trabajo, como problema propio del colectivo laboral y no sólo de las mujeres. Como es natural, aunque ha habido avances, el tema no pasa únicamente por generar secretarías de la mujer o agregar algunos asuntos en la agenda sindical. El tema pasa por democratizar el espacio de poder sindical que tradicionalmente ha sido masculino y generar una ruptura con el esquema patriarcal que domina el ejercicio del poder también en los sindicatos.¹⁷

- 6° Generar alianzas con universidades, centros de estudios, con expertos laborales y ONG para el fortalecimiento de un liderazgo sindical que se apoye en fortalezas científico-técnicas y humanistas. También, para que estos espacios de creación de conocimiento y reflexión crítica se retroalimenten con la experiencia de la realidad laboral. Hoy en día el sindicalismo, incluso la problemática laboral más amplia, no es temática de investigación o de estudio. Ella ha sido copada por los temas del empleo o por los de la gerencia de recursos humanos. Introducir en la agenda universitaria la cuestión laboral tendría, entre otras ventajas, la de fortalecer el rol del pensamiento crítico de los gestores del conocimiento, en particular de las universidades. No puede haber una reflexión filosófica, sociológica y política sobre la sociedad chilena actual si en los circuitos burocráticos la discusión se da sobre programas y acciones de gobierno, y la discusión en los circuitos académicos se da sobre los mismos tópicos en la medida en que la actividad universitaria se realiza en términos de consultorías y evaluación de programas (en el mejor de los casos con alguna reflexión mayor a modo de introducción); pero lejos de esa magnífica cualidad que tenía la intelectualidad del pasado, que era mirar desde afuera y con independencia el ritmo y el curso del devenir histórico. Paradójicamente, la incipiente crítica social de esta modernidad —que está mutando pero que aún no plasma en un nuevo ordenamiento social, incluida la generación de un pensamiento crítico— viene de los organismos internacionales. Hay más pensamiento crítico en el PNUD, la OIT, la UNCTAD, la CEPAL, la OMS, que en las universidades chilenas, y eso es una paradoja más que insostenible para el desarrollo político y cultural de la democracia en Chile.

¹⁷ Véase Estrella Díaz, "Sindicalismo y equidad de género," *Mitos y realidades del mercado laboral en Chile*, ed. Jaime Ensignia (Santiago: Fundación Friedrich Ebert, 2005).

- 7° Diseñar un programa de acción sindical nacional y programas sectoriales que expresen las especificidades de los grupos sociales a representar. No es lo mismo una acción sindical para la minería que, por ejemplo, para los empleados y empleadas de un supermercado, las actividades de exportación o las nuevas actividades de la banca. No es lo mismo el sindicalismo metropolitano que el sindicalismo regional. La reforma laboral del año 2001 es una oportunidad única para reinventar formas de articulación, toda vez que permite la creación de sindicatos sobre bases diversas. La lista taxativa que existía en el código anterior que admitía únicamente sindicatos de empresa, interempresa, transitorios e independientes, fue modificada en términos de que cualquier colectivo de trabajadores puede asumir la forma sindical que desee, inclusive, por ejemplo, base territorial, oficios, afinidad cultural, etcétera. En esta estrategia de diversidad concertada deben jugar un papel fundamental las federaciones y confederaciones.¹⁸ Es allí donde se podrán articular las especificidades y la necesidad de densificar la fuerza social de los representados.
- 8° Finalmente, pero no menos importante, debe generar una agenda de propuestas de cambio para ser sometidas al sistema político, a los partidos, al gobierno y también a las instancias de diálogo social con el empresariado.¹⁹ Aun cuando el diálogo social haya sido una estrategia llena de altibajos y contradicciones, para lograr en el mundo de hoy una voluntad negociadora del adversario se requiere buscar algún camino de convergencia y estar abierto a revisar algunos puntos de partida. ¿Dónde buscar esas convergencias? A nuestro modo de ver, en un acuerdo nacional por el trabajo decente, por la ciudadanía laboral de los trabajadores,²⁰ es decir, por su consideración como sujetos de derechos (y de deberes),

¹⁸ Un ejemplo interesante de este tipo de concertación y articulación lo constituye el trabajo de la Confederación Minera de Chile, que ha venido planteando la necesidad de hacer una negociación articulada, que sin ser negociación de la rama va teniendo planteamientos comunes y sobre todo una estrategia común de acumulación de fuerza social.

¹⁹ Véase Guillermo Campero, "Diálogo social y trabajo decente en América Latina", OIT (diciembre, 2003). También, "Trabajo decente, globalización e innovación tecnológica", OIT (diciembre, 2004).

²⁰ Sobre el concepto de ciudadanía laboral, véase Malva Espinosa, "Hacia una cultura democrática de las relaciones de trabajo en Chile," *Mitos y realidades del mercado laboral en Chile*, ed. Jaime Ensignia (Santiago: Fundación Friedrich Ebert, 2005).

fortaleciendo una cultura de respeto al otro en los ambientes laborales, y por un liderazgo empresarial de responsabilidad social donde las dimensiones económicas, laborales y medioambientales sean los pilares de un modelo de desarrollo sustentable.

A MODO DE EPILOGO

Pareciera que el mundo (y también Chile, que es un fiel seguidor de las tendencias mundiales) comenzara a vivir un nuevo ciclo. Ya se habla en diferentes foros y desde las más diversas tribunas del advenimiento de un posneoliberalismo. En primer lugar, porque la mano invisible del mercado no ha sido capaz de producir una autorregulación de las relaciones sociales, como pregonaba dicho pensamiento. Por el contrario, la desintegración social, la desigualdad, la exclusión –no sólo al interior de los países, sino entre países– han pasado a ser temas obligados de los foros nacionales y mundiales. En segundo lugar, porque hasta aquellos actores más visibles de las recetas neoliberales –como el Banco Mundial, el FMI– vienen de vuelta respecto de la ortodoxia neoliberal, expresada en los llamados consensos de Washington (no sólo por los resultados económicos y sociales cuestionables de algunas de estas recetas, sino también por la emergencia de un pensamiento crítico). No es menor en esta escalada de desprestigio y pérdida de hegemonía la autocrítica del pensamiento de J. Stiglitz,²¹ que ha contribuido de manera importante a desnudar no sólo la ineficacia de dichas políticas, sino también el cinismo subyacente de los grandes poderes. En tercer lugar, porque más que el fin de la historia (que podría ser entendido también como el fin de la política) se observa la revitalización de un discurso que aboga por la necesidad de lograr consensos políticos que le devuelvan a la política la capacidad de articular los conflictos sociales y los desequilibrios de poder, ejerciendo un control *desde* la política hacia la economía. Algo de eso está detrás de los foros mundiales, continentales y nacionales que se organizan en torno a la estabilización y profundización de la democracia, la lucha contra la pobreza, la dimensión social de la globalización, la necesidad de un paradigma de trabajo decente, la búsqueda de un comercio justo, la observancia del respeto a los derechos humanos, y en la persecución una vez más en la historia de una

²¹ Véase Joseph E. Stiglitz, *Los felices 90. La semilla de la destrucción* (Santiago: Alfaguara, 2003).

modernidad política, económica, social y cultural basada en la integración, la cohesión social y alguna idea de progreso. El mundo occidental está demasiado aterrado para abandonarse a la desprotección del ideal posmodernista. De no prosperar una salida que se base en ciertos hitos de "civilidad" (democracia y derechos humanos), el peligro está en la salida autoritaria. Buch nos recuerda todos los días que hay un poder económico y militar, unilateral o combinado, disponible para imponer el orden de los centros de poder mundial; la tentación fascista merodea en Europa: la salida conservadora y de fuerza o la salida democrática son las disyuntivas de hoy. En Chile, en un escenario más acotado, estamos o deberíamos estar dando por finalizada la transición, y es el momento de recuperar el proyecto democrático en todas sus dimensiones. En ese proyecto, el mundo laboral organizado tiene un lugar. ¿Podrá desplegar en plenitud su constitución en sujeto de la democracia? Los actores políticos y sociales tienen la palabra.

ÁLVARO BRIONES

Ingeniero comercial egresado de la Universidad de Chile, obtuvo el grado de doctor en economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha ejercido la docencia en las universidades de Chile, Nacional Autónoma de México, Metropolitana de México, del Zulia (Venezuela), Externado (Colombia), Nacional Autónoma de Honduras y en el Instituto Universitario Ortega y Gasset de España. Es autor de *Antecedentes históricos de la Unidad Popular* (Caracas: Rocinante, 1975), *Economía y política del fascismo dependiente* (México D.F.: Siglo XXI, 1978), *Entre el conflicto y la negociación. Los funcionarios públicos frente a las empresas transnacionales* (México D.F.: Nueva Imagen, 1982), *La economía es política* (Santiago: Aconcagua, 1987), *El zorro con espinas* (Santiago: Documentas, 1990), y *La pata coja y la transición infinita* (Santiago: Ediciones B, 1999). Además, ensayos de su autoría han sido incluidos en nueve libros colectivos, publicados en Argentina, Costa Rica, México y España. En 1998, Editorial Sudamericana de Chile publicó su novela *Como un país natal*. Tras el retorno a la democracia ha ocupado diversos cargos públicos, entre ellos el de subsecretario de Economía y embajador en España e Italia.

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DE LOS EMPRESARIOS?

ÁLVARO BRIONES

I. EXPLICACIÓN NECESARIA

Se me ha pedido una especulación sobre el empresariado que contribuya a esta reflexión colectiva sobre los actores y procesos de la sociedad chilena contemporánea. He aceptado de buen grado no sólo porque el placer de especular puede a veces llegar a ser irresistible, sino porque además los empresarios han sido siempre un tema misterioso para la izquierda.

Se trata de unos personajes a los que por lo general nos acercamos con la espada desenvainada o, si el buen gusto o la política contingente obligan a mantener la espada en su lugar, con una melosidad poco digna o simplemente con el ánimo evangelizador de transformarlos, de “ganarlos para la buena causa” (actitud que ha dado lugar al peculiar concepto de “empresario progresista”, tal como lo entendemos los izquierdistas, esto es, un empresario parecido o igual a nosotros).

He querido, por ello, aproximarme al tema sin ninguna pretensión de rigor académico (no esperen en consecuencia encontrar en las líneas que siguen estadísticas o catálogos de organizaciones o individuos) y ni siquiera de hacer un diagnóstico. Me mueve más bien el ánimo de observar e intentar comprender desde la izquierda, pero desde una izquierda de hoy, el comportamiento actual y sobre todo futuro de estos personajes con que tenemos que convivir en una sociedad que queremos crecientemente tolerante, abierta y comprensiva de las peculiaridades, roles y obligaciones sociales de todos y cada uno de quienes la compartimos.

2. TRES RAZONES NO VÁLIDAS PARA CONSIDERAR AL EMPRESARIADO COMO EL OSCURO OBJETO DE NUESTRA SOSPECHA

Los empresarios han sido siempre un objeto de sospecha para la izquierda. Normalmente esperamos de ellos lo peor y por regla general

no les creemos cuando escuchamos sus promesas de buen comportamiento.¹ ¿Son justificadas nuestras sospechas? Probablemente, como suele ocurrir con cualquier grupo humano, en muchos casos particulares están más que justificadas. Sin embargo, no son esos casos individuales, sino el estamento empresarial, en general, el que merece los signos de interrogación y el hecho de que dediquemos estas páginas a reflexionar sobre su posible comportamiento futuro. Para ello, empero, primero debemos detenernos forzosamente en la sistematización de los motivos de la desconfianza, pues nuestra estimación de su comportamiento futuro debería estar determinada por la persistencia o no de algunos de esos rasgos de la idiosincrasia empresarial que estimamos repudiables o, por lo menos, dignos de sospecha.

Primera razón: son el enemigo de clase

La primera razón de nuestras sospechas está anclada firmemente en la roca dura de lo ideológicamente consagrado. La sospecha –y más que la sospecha, la condena lisa y llana sin mediación de un innecesario tribunal– está marcada a fuego en la conciencia de cualquiera que haya mamado en la niñez del biberón del marxismo y, de manera más señalada aun, en aquellos que bebieron de él ya mayorcitos. El empresario es el epítome del burgués y, ya se sabe, el burgués es el enemigo de clase: una verdad contra la que no existen atenuantes. La sociedad está dividida en clases sociales que se constituyen a partir del lugar que los individuos ocupan en el proceso de producción; esa organización social sólo es viable en función del dominio de unas clases por otras, lo que permite la explotación de los dominados –esto es, la apropiación de una parte del valor creado por ellos en el proceso productivo– por parte de los dominantes.

Como la explotación, que está en la base de todo el proceso de dominación, exige de una trama más compleja de control que va desde la represión –por intermedio del Estado– a la subordinación por vía de

¹ Se trata de una sospecha tan arraigada en nuestro código genético que explica, en lugar de negar, la expresión “empresario progresista”, que sólo se entiende cuando se constata que tales progresistas personajes son –o han sido– izquierdistas genéticamente puros a quienes la vida ha sometido al oprobio de la actividad empresarial o se trata de la rama de un árbol empresarial familiar que por alguna razón –el paso por la universidad adecuada, la influencia de algún guía espiritual y, en no pocas ocasiones, la unión sentimental con la persona políticamente correcta– ha terminado por abrazar la buena causa aunque sin desprenderse del tronco familiar original del cual en muchos casos depende la diaria subsistencia.

la cultura, en una visión más amplia del marxismo –y también más contemporánea– es posible hablar de clases “hegemónicas” antes que de clases “dominantes” o “explotadoras”. Pero el resultado es el mismo: explotadores, dominantes o hegemónicos, hay quienes tienen la sartén por el mango, y dominados, explotados o subordinados, hay quienes están dentro de la sartén. De más está decir que en el orden capitalista quienes tienen bien cogido el mango de la sartén son los capitalistas (o propietarios de los medios de producción), también llamados burgueses, y quienes están dentro de la sartén son los proletarios o, más en general, los “trabajadores” en sus distintas versiones. Y como quienes son dueños del capital caben en general dentro de la categoría de “empresarios”, hete aquí que son estos en definitiva el enemigo de clase.

Con el correr de los muchos años que pasaron desde que Marx trazara el esquema anterior algo cambió en la ordenación del sistema capitalista. Básicamente, que una red cada vez más tupida de individuos y relaciones comenzó a separar la propiedad del capital de la administración de las empresas, con el resultado de que hoy en día los capitalistas sumen millones –incluso son millones de proletarios los que ahorran comprando acciones de empresas– y que los que se conocen comúnmente como “empresarios” sean en su mayoría los administradores de esas empresas, cuya propiedad se ve pulverizada entre esos millones de incógnitos dueños. El marxismo de biberón cortó por lo sano frente a situaciones como esa y no se amilanó en adjudicar el oprobioso epíteto de empresario también a los administradores y a quien quiera que, en definitiva, se enfrentara a los trabajadores en la organización corporativa (aunque los gerentes fuesen tan trabajadores asalariados como el obrero de la planta). Así, en definitiva, en el mundo de lo ideológicamente consagrado de que hablábamos antes, “empresarios” son todos aquellos que mandan en las empresas y a ellos no se les debe creer nada: son culpables (ni siquiera sospechosos) del cargo de enemigos de clase y, ya está dicho, contra ese crimen no existen atenuantes.

Los que están dispuestos a seguir esa orientación solucionan de ese modo el problema. El que no lo ve solucionado soy yo, pues si me guiara por ese simple esquema no tendría nada nuevo que decir frente a las interrogantes que han motivado este artículo: ¿cuál es la agenda futura de los empresarios chilenos?, ¿estarán ellos a la altura de los tiempos que el país se apresta a enfrentar en los próximos años? En realidad, sí tendría una cosa que decir (y sólo una): ¿que cuál es la agenda futura del empresariado chileno?: pues joder a los trabajadores y engañar a las autoridades democráticas; ¿cuál otra va a ser?

Segunda razón: apoyaron el golpe militar de 1973

Dejado entonces forzosamente de lado el principio de la lucha de clases como orientador de nuestro análisis en estas páginas, puesto que queremos cumplir en forma debida con quienes nos las encargaron, debemos movernos a otra de las posibles razones que convierten a los empresarios en sospechosos a los ojos de los izquierdistas: aunque siempre existen honrosas excepciones, los empresarios en general estuvieron entusiastamente detrás del golpe militar de 1973.

Es verdad que los empresarios no fueron los únicos que apoyaron ese golpe militar y que otros estamentos u organizaciones sociales, como por ejemplo el Partido Demócratacristiano, también lo hicieron. Pero estos fueron “amnistiados” por la izquierda, al grado que ahora la DC es aliada leal de esta y todos juntos formamos la coalición que gobierna Chile desde que la democracia misma fue recuperada. ¿Por qué entonces esta perseverancia de la memoria con los pecados de los empresarios? En buena medida, porque las faltas –a ojos izquierdistas– de la Democracia Cristiana –que apoyó de inmediato el golpe militar de 1973 tras tener este lugar– fueron de sobra lavadas con posterioridad prácticamente a todo lo largo del régimen militar, del que ese partido fue tenaz opositor, aportando su propia cuota de víctimas y contribuyendo al restablecimiento democrático en una medida no menor que la propia izquierda. Pero esa aversión a la indulgencia en relación a los empresarios se debe también al virulento frenesí con que estos contribuyeron a la desestabilización del gobierno de Salvador Allende, al grado de hacer imposible olvidar, por ejemplo, acciones como las del gremio de transportistas (“camioneros”, como se les llamaba entonces), cuyo delirio antiallendista, según se demostró después en forma documentada, era generosamente compensado por la CIA.

Sólo para terminar de justificar las sospechas en este ámbito, basta con recordar un incidente relatado por el ex Presidente Patricio Aylwin en un memorándum dado a conocer en diciembre de 1998, con motivo de una querrela por injurias que interpuso contra un general en retiro del Ejército que le había imputado haber pedido a las Fuerzas Armadas que derrocaran al Presidente Allende: “En la primera quincena de julio [se refiere al año 1973] me pidieron audiencia, en mi calidad de presidente del PDC, un grupo de dirigentes empresariales. Asistieron cuatro o cinco personas, entre las que recuerdo a Orlando Sáenz, presidente entonces de la Sofofa; a Hugo León, de los constructores; al presidente de la SNA y al de la Cámara de Comercio. Los recibí en la Sede del Partido. Sin muchos rodeos, me

expresaron que habían llegado a la conclusión de que la crisis que vivía el país no tenía otra salida que la intervención militar e iban a pedirme que la DC apoyara esa solución. Lo recuerdo como si fuera ayer; con voz serena pero enérgica les dije: 'Se han equivocado de puerta, caballeros. *No se viene al principal partido democrático de este país a pedirle que patrocine o apoye un golpe militar*'. Y poniéndome de pie, les agregué: 'Hemos terminado'".

No hay nada que añadir. Enemigos de clase o no, lo cierto es que treinta años atrás empresarios e izquierdistas éramos enemigos a secas... y punto. Sin embargo..., sin embargo, quizás haya por lo menos un par de aspectos que considerar. El primero es que ha pasado todo ese tiempo. Muchos de los personajes que entonces tuvieron esas repudiables actitudes ya no existen y otros parecen arrepentidos de lo que hicieron. Podemos no creerles, es cierto, pero esa no es la cuestión principal para efectos de esta reflexión acerca de la "agenda futura del empresariado", sino la pregunta: ¿lo volverán a hacer?, o aun más: ¿lo volverán a hacer una y otra vez?, ¿intentarán destruirnos cada vez que nosotros, la izquierda, intentemos construir algo?, ¿sospechan ellos tanto de nosotros como nosotros sospechamos de ellos?

Si nos atuviéramos a la respuesta simple del marxismo de biberón deberíamos decir que sí: que son nuestros enemigos mortales, que el odio de clases existe y que, sin importar las circunstancias, los empresarios intentarán una y otra vez destruirnos. Pero ya sabemos que el árbol de la realidad es bastante más verde que el gris oscuro y triste de esas teorías y, por otra parte, ya renuncié explícitamente a orientarme por las simplezas en estas reflexiones. Así, pues, no me queda más remedio que buscar alguna otra motivación en el comportamiento de los empresarios de hace tres décadas y ver si había en esas coyunturas algún parangón con lo que vivimos hoy.

Preguntémonos qué veían los empresarios en nosotros que justificara —o al menos explicara— la actitud que los llevó a estimular, promover y comprometerse con un golpe de Estado. Por qué nos temían tanto y cuál era para ellos la opción a la actitud que finalmente adoptaron y que todavía les recordamos y repudiamos. Comencemos por nuestros propósitos. El programa de gobierno de la Unidad Popular planteaba explícitamente la creación de un "área estatal" de la economía, que sería dominante y en la que se situarían buena parte de las empresas que hasta entonces pertenecían a nuestros enemigos, "los empresarios": "la gran minería del cobre, salitre, yodo, hierro y carbón mineral; el sistema financiero del país; el comercio exterior; las grandes empresas y monopolios de distribución; los monopolios

industriales estratégicos; en general, aquellas actividades que condicionan el desarrollo económico social del país”. Así notificados es plausible concebir que los empresarios no abrigaran ni simpatía ni confianza respecto de nosotros y que más bien nos vieran como un peligro directo a su propia existencia, esto es, para decirlo en términos llanos, como un peligro mortal. Un peligro que se hacía aun más amenazador cuando se hacían cargo de que más allá de la ambigua definición “en general actividades que condicionan el desarrollo económico social del país” no existía indicación alguna que revelara o siquiera sugiriera dónde iba a terminar el proceso de construcción de esa área estatal que, aunque no se explicitara en lugar alguno, todos entendían que iba a operar por la expedita vía de la expropiación. Incluso, el enunciado era tan objetivamente orientador para los seguidores de la Unidad Popular y tan subjetivamente amenazador para sus adversarios (¿enemigos?), entre los que se contaban inevitablemente los empresarios, que terminó por constituirse en el elemento central de la corta y trágica historia del régimen del Presidente Allende. De una parte, porque sus seguidores, al utilizar lo que ellos mismos denominaron “resquicios legales”, se dedicaron con denodado entusiasmo a requisar cuanta empresa se puso a su alcance, interpretando a su leal saber y entender el concepto de “actividad que condiciona el desarrollo económico social del país”; en tanto que en el plano estrictamente político la discusión sobre todo giró en torno a cómo poner límite a ese proceso.²

² Sólo durante 1971 se nacionalizó y estatizó la gran minería del cobre, el carbón, el salitre, el hierro, el acero y el cemento. Durante el mismo período casi la totalidad de los bancos privados fueron estatizados y en el sector agropecuario se expropiaron 2.3 millones de hectáreas correspondientes a casi 1.300 fundos. Ese año, además, pasaron a constituir el “área social” 70 empresas del sector industrial y se incorporaron a la misma algunos grandes monopolios comerciales. En octubre del mismo año, el Ejecutivo remitió al Congreso un proyecto de ley para limitar las tres áreas de la economía. El proyecto se centraba en considerar expropiables y traspasables al “área social” aquellas empresas que tuvieran un capital superior a 14 millones de escudos, lo que representaba aproximadamente 240 empresas. Cuatro días después, los senadores demócratacristianos Juan Hamilton y Renán Fuentealba presentaron un proyecto de reforma constitucional que quitaba al gobierno las facultades legales a través de las cuales se estaba implementando el “área social”, definía una nueva estructura que reducía al mínimo el sector estatizado y creaba una nueva área, llamada de “empresas de trabajadores”. La tramitación de este proyecto estuvo en el centro de todo el conflicto institucional posterior y derivó en acusaciones y declaraciones de la Cámara de Diputados y la Corte Suprema que, en algunos análisis, se han

¿Tenían, pues, razón los empresarios para vernos como una amenaza? Creo que habría que ser demasiado obcecado o simplemente estar demente para decir que no. ¿Tenían razón para actuar como actuaron? Esa ya es harina de otro costal, aunque no de un costal muy lejano, porque la respuesta también está ligada a nuestras actitudes y comportamientos de entonces. En suma: los empresarios no actuaban en ese momento fuera del contexto o, como resumiría el marxismo de biberón, impulsados exclusivamente por el odio de clase, sino que en función de las opciones de futuro que nosotros les anunciábamos. ¿Y qué les estábamos anunciando cotidianamente?: no sólo, como vimos a propósito del retiro del "proyecto Prats-Millas" por parte del gobierno, que no estábamos dispuestos a devolverles sus empresas, sino, además, que nuestra pretensión era poner fin al orden social y cultural que había constituido todo el sentido de su existencia como seres humanos hasta ese instante, y que nos proponíamos hacerlo a cualquier precio. Para muestra, sólo un botón. En una declaración del Partido Socialista de 1972, podía leerse: "Para construir el socialismo los trabajadores chilenos deben ejercer su dominación política, deben conquistar todo el poder (...) Para los revolucionarios, la solución no está en esconder o negar el objetivo de la toma del poder (...) Rehuir el enfrentamiento o moderar la lucha de clases constituye un gravísimo error. Para los socialistas cada pequeño triunfo eleva el nivel del próximo choque hasta que lleguemos al momento inevitable de definir quién se queda con el poder en Chile".

Conocido lo anterior, en realidad la pregunta correcta es: ¿tenían los empresarios alguna opción de comportamiento distinta de la que tuvieron dadas las condiciones que nosotros, con nuestra propia actitud y comportamiento, les impusimos en ese tiempo? Quizá nos ayude a comprender no sólo el comportamiento empresarial sino el com-

presentado como una de las razones que impulsaron o justificaron la decisión de las FF.AA. de romper el orden institucional. Ante esta situación, en enero de 1973 el gobierno dio a conocer el llamado "proyecto Prats-Millas", que reducía el "área social" a 90 empresas y establecía la devolución de aquellas que en ese instante estuviesen intervenidas o requisadas y que no correspondieran al criterio de conformación de esa área. Sin embargo, la oposición ni siquiera tuvo oportunidad de discutirlo, pues antes de llegar a oficializarse provocó tal repudio dentro de la propia Unidad Popular —algunos de cuyos sectores estimaban rayana en la traición la sola idea de devolver empresas que ya integraban el "área social"—, que el gobierno no tuvo más remedio que retirarlo.

portamiento humano en general un examen de cuáles eran las opciones que se abrían a los empresarios entonces. La primera, desde luego, era la resignación: ¿por qué no aceptar de buenas a primeras que les arrebataran (expropiaran) sus empresas, aunque la legitimidad legal de la decisión estuviese aún en discusión y su propio futuro en calidad de “ex enemigos de clase” fuese totalmente incierta en el nuevo orden social que se avecinaba? Por muy izquierdistas que seamos quienes leemos estas líneas, debemos aceptar que no sólo en lo tocante al comportamiento de los empresarios, sino en cuanto a seres humanos en general es determinante el instinto de conservación y es una dura prueba derrotarlo para llegar al autoexterminio. Creo que al comenzar los años setenta los empresarios chilenos simplemente no pudieron derrotar su instinto de conservación y no se resignaron a desaparecer sin resistirse a ello.

Una segunda posibilidad que les cabía era la de plegarse al movimiento. Seguir la corriente y, alegremente, pasarse al enemigo convirtiéndose en “empresarios progresistas”. Sin duda, esa era una opción, aunque quien estuviese dispuesto a considerarla debía tener en cuenta que no pasaba de ser una variante de la opción anterior, esto es, una manera quizá más elegante –o simplemente más rara– de llegar al mismo final: el autoexterminio. Además no era fácil, porque esto de volverse progresista “debido a que me convenció un profesor, mi mujer (o mi hombre) o simplemente porque un día cualquiera experimenté una epifanía y vi la luz” está bien para momentos de paz social, cuando puede llegar a ser un simpático tema de sobremesa, pero muy distinto es hacerlo cuando lo que está en juego es la existencia de tu familia... junto con la tuya propia. Quizá por ello fue que, si bien algún empresario progresista se hizo presente en el escenario por aquellos días, su comportamiento general se mantuvo fiel al instinto de conservación y no los llevó a cruzar hacia la vereda del frente, en donde los esperaban sus enemigos para aniquilarlos.

La tercera posibilidad era... resistir. No seré yo, desde luego, que padecí la persecución y el exilio como consecuencia de esa resistencia –y me considero afortunado al lado de las decenas de miles que sufrieron torturas y la muerte como efecto de la misma actitud–, quien justifique lo que los empresarios hicieron entonces. No puedo sino guardar el mismo sentimiento de Patricio Aylwin y repudiar la actitud de los empresarios desde una perspectiva cívica y moral. Sin embargo, soy al mismo tiempo una persona medianamente inteligente y no puedo dejar de comprender que, en esas circunstancias, no tuvieron prácticamente otra alternativa. Una alternativa que, supon-

go y como chileno de hoy –no de esos años–, también espero que les habrá provocado el mismo conflicto cívico y moral que creo me habría provocado a mí.

No obstante, el objetivo de esta reflexión no es juzgar las actitudes de ellos –ni las nuestras– de ese tiempo, sino buscar conclusiones útiles para resolver las interrogantes que se ha planteado a este artículo: ¿cuál es la agenda de los empresarios hacia el futuro?, ¿estarán ellos a la altura del Chile del mañana? Con tal propósito, y luego de todo lo anterior, mi conclusión sólo puede ser una respecto de la desconfianza de la izquierda hacia los empresarios debido a su comportamiento en 1973: ese comportamiento no fue entonces ni será en el futuro ajeno al de los otros actores sociales, incluidos, por cierto y quizás en primer lugar, nosotros, la izquierda. En suma, no existe razón para suponer que los empresarios van a tener en el futuro comportamientos que nosotros repudiamos en el pasado, al menos que nosotros vayamos a tener comportamientos que ellos, a su vez, también repudiaron en el pasado y en muchos casos los obligaron a adoptar actitudes y conductas de los que esperamos hoy día no se sientan complacidos.

Tercera razón: son ricos

Pero todavía existe un tercer motivo de sospecha que anida en nuestros corazones izquierdistas en contra de los empresarios. Se trata de ese sentimiento que Balzac resumió en una frase que Mario Puzo, muy listo él, utilizó como epígrafe de *El Padrino*: “Detrás de cada gran fortuna hay un crimen”. Debo aclarar acto seguido que se trata esta de una sospecha que no es exclusiva de los izquierdistas. En realidad, casi todo ser humano que contempla a otro con más dinero –y sobre todo si se trata de mucho dinero– quiere creer que es dinero mal habido, porque si no ¿cómo es que él mismo, que ha trabajado en forma honesta toda su vida, no es igualmente rico? En suma, esta sospecha izquierdista se basa en uno de los sentimientos más profundamente humanos y quizás en el más arraigado entre los chilenos: la envidia. Desde luego no seré yo el que lance la primera piedra en contra de los envidiosos, pues corro el riesgo de que me caiga a mí mismo. Sólo puedo decir, en cambio, que como fundamento de la sospecha de que los empresarios van a actuar de manera indebida en el futuro o simplemente no van a estar a la altura de lo que el país les demande es insuficiente. En realidad, como elemento de juicio no es suficiente para nada, pues, a pesar de ser tan humana, la envidia es y será siempre una mala consejera.

3. LOS DESAFÍOS DEL FUTURO Y CÓMO PODRÍAN REACCIONAR LOS EMPRESARIOS A ELLOS

Una vez aclarado que, por lo menos para mi entendimiento, no existe razón alguna para esperar una conducta empresarial "intrínsecamente perversa" o irrevocablemente determinada por pecados del pasado, me siento más libre de examinar con una mirada estrictamente de futuro cuáles son los desafíos que el empresariado deberá enfrentar y qué comportamiento debería esperarse de él.

No pretendo ser exhaustivo en esa enumeración de desafíos futuros porque, así como dije más arriba que el árbol de la realidad siempre es más verde que el de las teorías, debo decir ahora que también verdea más que los árboles de la predicción. Por otra parte, aun si estuviese seguro de lo que ocurrirá en el futuro no podría sino limitarme a señalar aquellas circunstancias que soy capaz de advertir y, debo confesar, mi capacidad no suele ir mucho más allá de lo evidente.

En mi opinión existen por lo menos tres situaciones que, desde ya, se plantean como los principales desafíos futuros del país y, por lo tanto y desde la perspectiva de sus propios intereses, también para los empresarios. Esos desafíos son, o están vinculados, a los siguientes temas: a) el desarrollo de condiciones que permitan una operación regular del derecho de los trabajadores a la sindicalización; b) la superación de los actuales niveles de desigualdad social, que lo son de ingresos pero principalmente de oportunidades; y c) el desafío de mantener altas tasas de crecimiento y desarrollo sin provocar un deterioro irreversible de nuestro medio ambiente.

El desafío de desarrollar el sindicalismo

Como es sabido, en Chile sólo alrededor de un 10% de los trabajadores está sindicalizado y negocia en forma colectiva. Se trata de una proporción que ruboriza constantemente a los negociadores chilenos de tratados internacionales, porque resulta difícil —si no imposible— demostrar que tal situación no deriva de prohibiciones u otras limitaciones que conduzcan a una suerte de *dumping* laboral y que, por el contrario, en nuestro país tanto el derecho a sindicalizarse como el de negociar en forma colectiva están consagrados en la Constitución. El reclamo o la incredulidad de los socios internacionales de Chile (que tiende a asumir la forma de protesta y aun de rechazo cuando por el otro lado negocian representantes sindicales) es razonable: la debilidad del movimiento sindical tiene inevitablemente efectos sobre la

calidad de las remuneraciones, pues, como demuestran todos los informes de la OIT, la existencia de un sindicalismo activo está directamente asociada a mayores niveles de ingreso de los trabajadores. De ahí que, al cabo, no sea extraño oír en el ámbito internacional que por lo menos una parte del éxito exportador de Chile descansa sobre su sistema de relaciones laborales y que, en definitiva, su mayor ventaja competitiva es la pobreza de su gente.

La debilidad —o fortaleza— del movimiento sindical chileno no es, desde luego, responsabilidad de los empresarios, sino de los propios trabajadores y de las organizaciones políticas que, como las de izquierda, hacen de esa organización uno de sus objetivos principales. Sin embargo, también es cierto que en la abrumadora mayoría de los casos los empresarios desalientan el sindicalismo dentro de sus empresas y en muchos de aquellos —quizá demasiados— lo hacen apelando a procedimientos que o se sitúan en el linde de la ley o claramente lo transgreden. Proceden así por la misma razón por la que la OIT alienta el sindicalismo: porque una mayor organización de los trabajadores significará inevitablemente mejores remuneraciones y eso es algo que, por lo menos de manera directa, no está entre los objetivos ni del empresario ni de la empresa. Más aun, altos salarios pueden llegar a representar —aunque no necesariamente— reducción de ganancias y esas ganancias, en cualquiera de sus formas, sí son el objetivo directo de la empresa y el empresario.³

¿Por qué plantear entonces que el desarrollo del sindicalismo en nuestro país es también un desafío para el empresariado? Por cierto, no para reclamar de dicho estamento el apoyo al movimiento sindical, pues es algo que deben dejarnos a nosotros, que es a quienes corresponde la tarea, sino para reclamar el cese de una actitud de franca hostilidad y de recurrencia a malas artes y peores prácticas. ¿Serán los empresarios capaces de poner una actitud de ese tipo en su agenda futura y, aun más, de cumplirla? En mi opinión se trata de una tarea difícil, probablemente la más difícil de todas las que me he atrevido a identificar como desafíos del empresariado en el futuro, porque atenta en forma directa contra la naturaleza de la condición empresaria. No debemos olvidar que si hubiese que reducir a un solo elemento el código genético empresarial tal vez este establecería la maximización de las utilidades como principio y fin de la vida. Prin-

³ No necesariamente representará reducción de ganancias porque el efecto del incremento de los salarios puede ser compensado, entre otros elementos, por un incremento de la productividad.

cipio que, en definitiva, constituye su principal responsabilidad social, pues tal como está organizada nuestra sociedad simplemente no funcionaría con empresarios que dedicaran sus mejores esfuerzos a perder dinero produciendo cosas inútiles o desvalorizando sus empresas con el consiguiente daño económico a sus miles de propietarios. Y el fortalecimiento de la organización de los trabajadores, ya lo hemos dicho, puede atentar contra ese objetivo, por lo que cualquier empresario cuerdo no sólo no va a hacer nada por estimular la organización sindical de sus trabajadores, sino que debería intentar impedirla.

No obstante, y pese a todo, creo que existen elementos que van a llevar al empresariado más lúcido del país (y por lúcidos entiendo a aquellos que están en mejor sintonía con la evolución económica de la actualidad y futura en nuestro país) a actuar no en contra de su naturaleza, apoyando el desarrollo sindical, pero sí dejando de lado malas artes y prácticas, y permitiendo que aquel tenga lugar allí en donde los propios trabajadores estén en condiciones de impulsarlo. Esa confianza radica principalmente en la existencia de un elemento nuevo, al que recurriré de manera constante más adelante en estas reflexiones: la globalización.

Esta se va a manifestar en forma creciente como un conjunto de regulaciones y normas cuyo cumplimiento será exigido a los exportadores de nuestro país como condición para el ingreso de productos chilenos a mercados foráneos. Entre esas exigencias, las de tipo laboral —tanto como las del orden medioambiental, según comentaré luego— es probable que se sitúen como las más rigurosas, tanto así que las limitaciones actuales de comercio a empresas que emplean niños es sólo un anticipo de lo que habrá de venir en el futuro. Se trata de condicionamientos que pueden llegar a niveles “micro”, afectando el desarrollo de la empresa misma. No prever esta situación futura —que los empresarios legítimamente pueden visualizar como una amenaza— constituiría una penosa debilidad que sólo podrían permitirse aquellos empresarios que antes, por antífrasis, he calificado como “no lúcidos”, pero que sería inadmisibles y dañina para los negocios de las empresas que marchan más acorde con la evolución económica general del país.

Siempre en conexión con la incorporación de Chile a los mercados globales, cabe tener presente que lo que de manera general se conoce hoy en día como “imagen país” es un tema no menor al momento de establecer las posibilidades de una determinada economía para penetrar esos mercados y que dentro de esa imagen nuevamente

el tema laboral y el respeto a los derechos de los trabajadores, al nivel que estos han alcanzado en los países desarrollados (los principales mercados a ganar), son una cuestión sustancial.

Por último, un empresariado que evolucione racionalmente incorporando toda la información disponible en el mundo de hoy debe saber que buenas relaciones con sindicatos sólidos, serios y responsables tienden a redundar en mejores ambientes laborales, con el consiguiente efecto en la reducción de la conflictividad interna, en el aumento de la productividad, en la mayor participación y, en general, en una mejor proyección de la empresa hacia el futuro. Esta circunstancia, insisto, no debe hacernos suponer que en consecuencia los empresarios van a correr a incentivar el desarrollo sindical, cosa que claramente iría en contra de su naturaleza, pero sí puede llevarlos a no impedir su desarrollo y, sobre todo, a no utilizar procedimientos censurables en su oposición a los mismos.

El desafío de superar los actuales niveles de desigualdad social

El hecho de vivir un año electoral lleva aparejada, entre muchos inconvenientes, la ventaja de que algunos temas son abordados públicamente con mucho menos pudor que con el que son tratados en otros períodos. Entre aquellos, el de la desigualdad social ha ocupado un terreno destacadísimo, al grado de que ha terminado por contar con una abrumadora unanimidad entre los candidatos presidenciales: ninguno de ellos desconoce que en el momento presente es el principal problema de nuestro país y todos han hecho girar sus plataformas electorales en torno a caminos y procedimientos para superarlo.

Y tienen razón. Entre las verdades indiscutibles del Chile de hoy se encuentra el hecho de que el chileno más pobre es, con toda seguridad, mucho menos pobre en términos absolutos de lo que era hace quince años (la pobreza y la indigencia se han reducido en forma drástica), pero simultáneamente es mucho menos rico que el chileno más rico. En suma, en materia de diferencia entre ricos y pobres la situación no sólo no ha variado con relación a quince años atrás sino que su comparación con la evolución positiva que han experimentado otros países durante el mismo período ha llevado al nuestro a situarse entre los diez países con peor distribución del ingreso en el mundo. Una vergüenza por donde se la mire y no sólo para nosotros, los partidarios de la coalición política que ha gobernado durante los últimos quince años, sino para todos los chilenos, incluidos entre ellos,

por cierto, los empresarios.

Se trata de una desigualdad, por otra parte, que no es sólo de ingresos, sino de oportunidades, esto es, de posibilidades sociales de superar esas diferencias de ingreso en el futuro. Dicho de otro modo, quien nace pobre en Chile, hoy día, muy probablemente experimentará condiciones de educación y de atención de salud que lo situarán en una posición de desventaja respecto de quienes nacieron en una familia de mayores ingresos, y esta situación se verá agravada si es mujer, si tiene más de cuarenta años o si tiene un apellido o presenta rasgos indígenas. Esa desigualdad de oportunidades tendrá como efecto, finalmente, la reproducción de las condiciones de pobreza, generándose un círculo vicioso y oprobioso de pobreza que genera, a su vez, más pobreza.

¿Es ese fenómeno una situación que corresponda a los empresarios superar? Por cierto que no. En este caso de nuevo la responsabilidad de la superación de esa vergüenza es algo que nos corresponde principalmente a quienes hacemos de la igualdad el motivo fundamental de nuestra actividad social y política, y no a los empresarios, cuyo medio ambiente existencial —el mercado— se basa precisamente en la diferencia, esto es, en la desigualdad como norma prioritaria de una actividad orientada a la competencia.

¿Por qué me atrevo entonces a plantear el tema como un desafío para los empresarios? Porque desde el punto de vista de sus intereses (no desde el de los intereses o necesidades de los pobres), un país con demasiadas desigualdades es malo para los negocios, sobre todo si esas desigualdades significan una educación ineficiente y una salubridad media deficiente para quienes en definitiva deben sostener la marcha de la operación: los trabajadores.

La cuestión de la eficiencia educativa, respecto de este tema, casi se explica por sí sola y no es necesario extenderse mucho sobre ella. Baste tener presente que el sistema productivo en escala mundial, incluida la producción de bienes primarios o materias primas, se basa de manera creciente en la información —la llamada “sociedad del conocimiento”— y esa información debe ser operada por individuos entrenados, entrenamiento que simplemente no es posible llevar a cabo si su formación básica no los califica para ello, vale decir, si no es eficiente desde la perspectiva de las necesidades contemporáneas.

Así, en suma, la cuestión de una educación eficiente tarde o temprano dejará de ser sólo un problema moral —ese que nos deja en vergüenza frente al mundo— para convertirse en un problema económico; uno que no sólo puede dejar en vergüenza sino conducir a la bancarro-

ta a empresas chilenas que compiten en mercados internacionales con empresas que sí funcionan con operarios altamente calificados. Es posible que el problema no se haya presentado todavía de modo dramático a los empresarios chilenos y que, aun cuando en el futuro próximo pudiera hacerse presente, podría por un tiempo al menos ser atenuado por vía de la importación de mano de obra calificada de países vecinos. Una situación de ese tipo, empero, no es sostenible en el largo plazo, no constituye una solución estructural al problema y, en consecuencia, un empresariado lúcido debiera comenzar a considerarlo un desafío a superar, como dije, desde la perspectiva de sus propios intereses.

Es posible que la situación sea menos evidente en lo que toca a la desigualdad de oportunidades en otros campos, como el de la salud. Desde luego, debiera considerarse que una fuerza de trabajo en particular vulnerable a problemas de salud y con altos porcentajes de ausentismo no es precisamente el contingente de recurso humano con que quisiera contar una empresa. Sin embargo, mientras operen otros elementos concomitantes –tales como la desprotección laboral debida a bajos niveles de sindicalización o incluso a debilidades de la propia legislación laboral– es posible que la empresa pueda sobrellevar la situación por la simple vía de sustituir a trabajadores enfermos por trabajadores sanos, recurriendo al expediente del despido. No obstante, la situación se complica en periodos de mayor tensión del mercado de trabajo –aquellos cercanos al pleno empleo– y se agudiza aun más cuando la operación empresarial requiere de niveles crecientes de calificación de mano de obra especializada, como está ocurriendo en el mundo productivo contemporáneo, según acabamos de explicar. En definitiva, si bien al empresario se le puede hacer fácil despedir hoy en día a un trabajador enfermo sin calificación para contratar a otro trabajador tan descalificado como aquel pero sano, no le resultará tan sencillo en el futuro si el trabajador enfermo tiene una calificación que es difícil encontrar en el mercado.

En el largo plazo, en suma, para una economía como la chilena, que busca situarse en niveles emergentes en el mercado global, no es un buen negocio la mantención de desigualdades de oportunidades, sobre todo en el plano de la educación y la salud. Si, en consecuencia, sólo fuera por esa consideración y mirando siempre desde la perspectiva de sus propios intereses, el empresariado chileno debería estimar la superación de esa situación como un desafío propio y plantearse la contribución a su superación junto con otros sectores de la sociedad. Sería injusto no reconocer que, en distintos pla-

nos, pero principalmente en el de la educación, muchas empresas, sobre todo aquellas de mayor tamaño o más vinculadas a los mercados internacionales, han comenzado ya a preocuparse de temas como la educación y a mantener diferentes sistemas de desarrollo de competencias para sus trabajadores y, en no pocos casos, para la comunidad en general.

*El desafío de mantener altas tasas de crecimiento
y desarrollo sin provocar un deterioro irreversible
de nuestro medio ambiente*

Como en los casos anteriores, no corresponde exigir al empresariado —como estamento social— una responsabilidad particular en relación a este tema. La protección del medio ambiente no corresponde a los empresarios, del mismo modo que no corresponde a los odontólogos, a los ingenieros comerciales o a los vendedores de cabritas. Les corresponde a todos ellos en tanto miembros de la especie humana y ciudadanos conscientes, junto con el resto de sus semejantes, pero no en tanto estamento particular de la sociedad. En suma, la protección ambiental es responsabilidad de la sociedad toda, si es que no quiere suicidarse al destruir el medio que le permite existir.

¿Por qué entonces plantear el tema como un desafío particular del empresariado? Básicamente porque, a diferencia de los odontólogos o los vendedores de cabritas, su actividad de productores, esto es, de transformadores de la naturaleza, los va a mantener constantemente en el límite de lo que la sociedad va a permitir y a prohibir en materia medioambiental. ¿Cuál va a ser su reacción? En primer lugar debo decir que, en este como en otros terrenos, no espero de los empresarios actitudes ni comportamientos que vayan en contra de su naturaleza ni de su responsabilidad social. Por consiguiente, sé que si la sociedad, en el marco de sus regulaciones y funcionamiento, les permite actuaciones que son racionales desde el punto de vista de los negocios, aunque irracionales desde aquel de la protección del medio ambiente, no vacilarán en imponer la primera racionalidad a la segunda, y actuarán de modo de hacer buenos negocios y maximizar sus utilidades aunque ello signifique un daño medioambiental. Debo decir a continuación que no hallo nada repudiable en eso y que, por el contrario, si me parecería censurable que a su obligación social principal —en tanto estamento de la sociedad con una definición de funciones bien precisas— antepusieran otras que no les corresponde a ellos tutelar. Sería tanto como censurar a

un odontólogo que saca una muela infectada porque atenta contra la belleza humana o a un vendedor de cabritas porque desafina cuando anuncia su mercancía.

En realidad, deberíamos preocuparnos de que cada estamento esté a la altura de su responsabilidad social particular –los empresarios haciendo buenos negocios, los odontólogos sanando a sus pacientes y los vendedores de cabritas produciendo y vendiendo un producto sano y sabroso– y de que la sociedad vele, por intermedio de sus órganos pertinentes –el Estado en primer lugar, pero también a través de las organizaciones civiles– por aquello que es responsabilidad de todos y que finalmente, si vivimos en sociedad, no puede sino traducirse en leyes, normas y reglamentos. Y en lo que toca al medio ambiente, esas leyes, normas y reglamentos deben estar orientados a impedir un deterioro irreversible de nuestro entorno ambiental manteniendo la sustentabilidad a largo plazo y procurando que ello no afecte el crecimiento económico del país.

Es más, creo que los empresarios van a tender naturalmente a esperar un sistema cada vez más restrictivo en materia medioambiental, pues ello será lo que terminará imponiendo el sistema global en el que, como sociedad, estamos crecientemente insertos. Incluso no es descartable que en algunos casos los empresarios se autoimpongan normas ambientalistas no exigidas internamente en Chile pero si así lo exigen sus mercados externos. En todo caso, no tiene sentido esperar de ellos que sean los impulsores de esas normas dentro del país; esa, sencillamente, es una tarea que nos corresponde a nosotros, como también a nosotros –a la sociedad y en ella tanto al Estado como a la sociedad civil– nos atañe vigilar que esas normas se cumplan en forma efectiva.

Un buen ejemplo de todo lo que quiero decir es lo ocurrido recientemente con la empresa Celulosa Constitución (Celco) y la contaminación del santuario de la naturaleza del río Cruces, en Valdivia. Es verdad que se puede pensar que Celco actuó de manera horrible al instalarse a producir y a verter residuos en un santuario de la naturaleza, pero también es verdad que instituciones y funcionarios del Estado insólitamente la autorizaron a hacerlo. Puede que la empresa haya abusado y que incluso haya mentido en relación a los residuos que vertió sobre el humedal o pantano. Pero ¿¡por qué maldita razón dejaron que esa posibilidad ocurriese!?. Porque, como a cualquiera le parece lógico, quienes la autorizaron a instalarse ¡en un santuario de la naturaleza! simplemente no lo impidieron. En definitiva: si bien puede parecer absurdo que una empresa solicite autorización para

instalarse a producir y verter residuos en un santuario de la naturaleza, más absurdo resulta que se le haya autorizado, sólo para comprobar –una vez que la inversión estaba hecha y en funcionamiento– que esos residuos... dañaban a la naturaleza.

Es más, si la empresa decidió al final paralizar sus actividades lo hizo en forma absolutamente interna, debido exclusivamente a la presión –verdadera epopeya– de las organizaciones ambientalistas. Tal paralización, por lo tanto, sólo debe ser agradecida a la sociedad civil porque, en lo que toca al Estado, las autorizaciones estaban debidamente otorgadas y las fiscalizaciones habían sido todas pasadas con éxito por la empresa. Como colofón a este punto sólo debo agregar que respecto de Pascua Lama, otro proyecto hoy objetado por organizaciones ambientalistas, de nuevo todas las autorizaciones están debidamente otorgadas desde hace mucho tiempo y la empresa no está haciendo nada fuera de la ley o las normas.

4. UN NUEVO PROTAGONISTA: LAS EMPRESAS (Y LOS EMPRESARIOS) DEL ESTADO

No se puede concluir una reflexión sobre las responsabilidades y la agenda futura del empresariado chileno sin incluir la consideración de un grupo de empresarios muy importantes: aquellos que tienen el cometido de gestionar las empresas del Estado. Es de todos sabido que el número de empresas estatales en el país es muy pequeño, pero se sabe menos que algunas de esas empresas, como Correos Chile, Banco Estado, Enap y Codelco, tanto por el volumen de sus operaciones como por el número de sus empleados, se sitúan entre las más grandes del país y al menos una de ellas, Codelco, entre las más grandes del mundo. Ello, sin considerar el hecho adicional de que casi todas concurren a mercados altamente competitivos y que, dadas sus actividades en un mundo globalizado, es inevitable que deberán considerar la necesidad de ampliar sus actividades al extranjero, como desde luego ocurre por su propia naturaleza con Codelco, y como también está ocurriendo ya con Enap. Estas empresas y los empresarios que las dirigen y administran, tienen las mismas obligaciones y responsabilidades que los empresarios privados y, en consecuencia, enfrentan los mismos desafíos hacia el futuro.

Por años se consideró a las estatales como un tipo especial de empresas, ajeno a las normas generales que rigen el comportamiento de estas. Entre sus rasgos distintivos se destacaba el hecho de que incursionaran en áreas o actividades que por su alto riesgo financiero

no resultaban interesantes al sector privado, que operaran actividades consideradas “estratégicas” o que en algunos casos simplemente hubiesen sido creadas para administrar un subsidio. De igual modo se esperaba de ellas un comportamiento con los trabajadores que, por lo generoso, podía rayar en lo antieconómico; que sirvieran a políticas generales de los gobiernos, como la generación de empleo (aun cuando ello fuese en contra de la racionalidad de la gestión de la propia empresa) y que su política de contrataciones se encuadrara en el marco de equilibrios y pagos de favores políticos que los gobiernos estaban en general obligados a respetar.

Debo decir que, quizá con la sola excepción de aquellas empresas destinadas explícitamente a administrar un subsidio –tal vez Enami sea el mejor ejemplo de ellas–, ninguna de esas particularidades debería hoy en día ser utilizada para caracterizar a las empresas estatales y mucho menos para justificar su incumplimiento de aquellos desafíos que se espera sean satisfechos por las empresas privadas. Es más, si queremos que nuestro país crezca y se desarrolle para mayor bienestar de sus habitantes, incluso en el caso de las empresas destinadas a administrar subsidios, se debe esperar que se cumplan los estándares de calidad y eficiencia característicos de cualquier empresa chilena.

En los hechos no existe en la actualidad ninguna empresa estatal cuya actividad no pueda ser desempeñada por una empresa privada. No existen ya pruritos ideológicos que obliguen al Estado a emprender actividades de alto riesgo económico y la idea de “actividad estratégica” cayó en desuso hace muchos años. Tampoco parece una exigencia ineludible que algún subsidio sea administrado bajo una forma corporativa y más bien parece aconsejable lo contrario. La mantención de empresas estatales no responde, pues, a criterios ideológicos, sino exclusivamente a la voluntad mayoritaria del país que, expresada por intermedio de gobiernos democráticamente electos y por razones que le son propias (técnicas en algunos casos, de finanzas públicas en los más), desea la mantención de esas empresas en el ámbito estatal.

En ese contexto y afortunadamente para Chile, desde hace ya bastante tiempo se viene extinguiendo también la idea de que las empresas públicas deben ser cajas pagadoras de favores o ser administradas por un personal cuyo mérito radique más en su filiación política que en sus calificaciones profesionales o técnicas. Por el contrario, lo que se ha tendido a imponer es la profesionalización de los cuadros

directivos y administrativos de estas empresas, tarea a la que ha contribuido eficientemente el desarrollo de una estructura de control estatal de las mismas que privilegia la calidad del rendimiento empresarial por sobre la contribución a la "causa" del gobierno de turno.

En consecuencia, no se puede eximir a las empresas estatales ni del tipo de comportamiento que en general debe orientar la actividad empresarial (la máxima eficiencia y la máxima utilidad, aunque en algunos casos esta última deba definirse en términos "sociales" y no pecuniarios), ni de aquellos que hemos definido como "desafíos" futuros del empresariado. Lo cierto es que empresas y empresarios estatales profesionales deben comportarse como tales y, en conclusión, cumplir tanto su obligación social como aquello que el país espera de todas sus empresas: que no se opongan de manera indebida o con malas artes al desarrollo sindical, que comprendan el significado económico (empresarial) de la igualdad social y que realicen sus actividades respetando rigurosamente las normas y leyes que la sociedad genere para impedir un deterioro irreversible de nuestro medio ambiente.

5. FINALMENTE

Debo decir que no creo que para que los empresarios estén a la altura del futuro deban "regenerarse" de sus pecados o culpas del pasado o que deba tener lugar una nueva generación de empresarios "progresistas" o de "amigos" de la izquierda. De los empresarios debe esperarse que se comporten como tales. Cualquier conducta diferente no sólo suele ser indebida o corruptora, sino que además con toda seguridad atenta en contra de la primera responsabilidad empresarial: obtener la máxima ganancia (o maximizar las utilidades de la empresa). En realidad, para que los empresarios se comporten decentemente deben, en primer lugar, ser tratados decentemente: con reglas claras y de claro cumplimiento, que no varíen al tenor del temperamento de gobernantes o legisladores y, sobre todo, que no se apliquen según de qué lado le sople el viento al funcionario encargado de fiscalizar su aplicación.

Creo que las cosas van a ir bien en el futuro y que finalmente el empresariado, normado por la sociedad, va a estar a la altura de sus desafíos, porque todos vamos a comprenderlos mejor. Asimismo, la puesta al día de todo el sistema (principalmente en el orden estatal) por la globalización obligará al Estado y a los empresarios a cumplir con los predicamentos de los demandantes de los productos chilenos

que exigen un mayor cuidado ambiental (responsabilidad en última instancia del Estado), un sistema de leyes laborales que guarde equilibrio con los derechos que los trabajadores han alcanzado en otras latitudes y con un orden más igualitario que no sólo nos reivindique moralmente ante el mundo, sino que también sea un leal aliado del desarrollo de nuestra economía.

“Ese es el principal mensaje que deja este libro. Nos habla de cómo se adaptan y renuevan los partidos políticos, de cómo se remecen viejas elites y emergen nuevas agrupaciones de poder. Nos habla de los nuevos actores sociales que emergen, de un nuevo movimiento indígena, de un nuevo movimiento sindical. Pero el libro también da una voz de alerta. Subsisten muchos grupos que no dan cuenta de los cambios, y que parecen destinados a una lenta y triste agonía.”

Michelle Bachelet

